



# Evaluación Estratégica de Honduras

## Informe Final

Julio 2022

Aprendizaje y Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe (LACLEARN)

Este informe fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo términos del Contrato No. AID-7200AA19D00006/7200AA20F00015. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de Development Professionals, Inc. - Making Cents International, LLC (DPI-MCI) y no reflejan necesariamente la opinión de USAID. Como producto de investigación aplicada, este informe no está destinado al diseño de programas. El informe puede producir recomendaciones que USAID y otros actores determinarán si o cómo abordar.

# Evaluación Estratégica de Honduras

## Informe Final

---

### **Reconocimientos:**

Un sincero agradecimiento a Michelle Linder y Shannon Schissler de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de USAID/Honduras y a Sofia Mendez de la Oficina de Crecimiento Económico de USAID/Honduras por su orientación a lo largo de la evaluación, y a Paola Acosta y Orlando Mejía de la Oficina de Programas por su asistencia en la integración de los esfuerzos de aprendizaje de la Misión y el apoyo al análisis geoespacial. El equipo también agradece al personal de la oficina central y de campo de LACLEARN, a los logistas y a los traductores que trabajaron incansablemente para hacer posible esta evaluación.

### **Autores:**

Karen Kaplan, Líder de Equipo  
Otto Argueta, Experto Local  
Omar Cacho Gil, Experto Local  
Lester Ramírez, Experto Local  
Lisa Chandonnet-Bedoya, USAID/CPS  
Jacob Good, USAID/CPS  
Tristan Willman, USAID/CPS  
Gabriela Leva, Asesora en Seguridad Ciudadana, LACLEARN

### **Contacto:**

Javier Calvo Echandi, Director, LACLEARN  
Development Professionals Inc.  
Email: [javier@developmentpi.com](mailto:javier@developmentpi.com)

# CONTENIDO

ACRÓNIMOS .....	iii
RESUMEN EJECUTIVO .....	1
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	23
PATRÓN SOCIAL DE BASE.....	25
DINÁMICAS DE CONFLICTO Y VIOLENCIA .....	26
FACTORES DE MITIGACIÓN .....	48
TRAYECTORIAS.....	49
RECOMENDACIONES .....	56
ANEXO A: FOTOGRAFÍAS DEPARTAMENTALES.....	80

# ACRÓNIMOS

BHA	Oficina de Asistencia Humanitaria
CAF 2.0	Marco de Análisis de Conflictos 2.0
CAFTA-DR	Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana
CDCS	Estrategia de Cooperación al Desarrollo del País
CICIH	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras
COPECO	Comisión Permanente de Contingencias
CPH	Colegio de Periodistas de Honduras
CPS	Oficina de Prevención de Conflictos y Estabilización, USAID
CVP	Centro de Prevención de Conflictos y Violencia, USAID
DOAG	Acuerdo de Objetivos de Desarrollo
DOD	Departamento de Defensa de EE.UU.
DTO	Organizaciones de Tráfico de Drogas
FNAMP	Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas
FOSDEH	Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
FPIC	Consentimiento libre, previo e informado
GBV	Violencia de Género
GOH	Gobierno de Honduras
GREAT	Educación y capacitación sobre resistencia a pandillas
HAP	Proyectos de Asistencia Humanitaria
HPN	Policía Nacional de Honduras (PNH)
IACHR	Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH)
ILO	Organización Internacional del Trabajo
ILO 169	Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
INL	Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU.
JOH	Juan Orlando Hernández (Ex Presidente)
LAC	Latinoamérica y el Caribe
LACLEARN	Aprendizaje y Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe
LGBTQI+	Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual, Mas
LIBRE	Partido Libertad y Refundación
MACCIH	Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
MAIE	Modelo de Atención Integral Especializado
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OSC	Organizaciones de Sociedad Civil
PIB	Producto Interno Bruto
PMOP	Policía Militar del Orden Público
PSH	Partido Salvador de Honduras
RCS	Estrategia para Abordar las Causas Raíz de la Migración en Centroamérica
SINAGER	Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
TOC	Teoría del Cambio
UFERCO	Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción
UN	Naciones Unidas
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USG	Gobierno de los Estados Unidos
VCAF	Evaluación de Violencia y Conflicto
ZEDE	Zonas de Empleo y Desarrollo Económico

# RESUMEN EJECUTIVO

En junio de 2021, la Oficina de América Latina y el Caribe (LAC) de USAID encargó a la Orden de Trabajo de LACLEARN la realización de una evaluación estratégica en Honduras. La evaluación incorpora elementos de la metodología del Marco de Evaluación de Conflictos (CAF 2.0) de USAID junto con una nueva guía complementaria (denominada Anexo sobre la Violencia)<sup>1</sup> para analizar la dinámica de la violencia y la interrelación de la seguridad ciudadana y el conflicto. USAID esperaba que la combinación de estas herramientas permitiera una evaluación estratégica sólida con un mejor análisis de la violencia, la delincuencia y la seguridad ciudadana. El trabajo de campo se llevó a cabo en mayo-junio 2022<sup>2</sup> para informar la implementación de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) 2020-2025, apoyando los esfuerzos de USAID/Honduras para asegurar que las dinámicas contextuales cambiantes se reflejen en la programación y la implementación de todas las estrategias relevantes del Gobierno de los Estados Unidos (USG). USAID/Honduras utilizará esta evaluación para informar la toma de decisiones, garantizar la sensibilidad al conflicto en toda su cartera e identificar oportunidades para mitigar el conflicto y la violencia a través de su programación. Las recomendaciones también respaldan la colaboración estratégica entre USAID, otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos y otros donantes que apoyan la programación sensible al conflicto.

El equipo de evaluación recopiló datos sobre cinco temas que se perciben como contribuyentes al conflicto y la violencia:

- Violencia de Género (GBV)
- Violencia juvenil
- Corrupción y captura del Estado
- Cultura de impunidad y acceso a la justicia
- Explotación de la tierra y los recursos naturales

El equipo utilizó entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos focales para recopilar datos de percepción. De los casi 330 encuestados de nueve departamentos,<sup>3</sup> el 53 por ciento se identificó como hombre, el 45 por ciento se identificó como mujer y el 2 por ciento se identificó como minoría no binaria o de género. Los datos de percepción son importantes para comprender cómo los agravios pueden transformarse en conflicto o violencia, y para identificar las oportunidades de construir la paz. Utilizando esta información, en combinación con los datos cuantitativos y cualitativos recopilados como parte de una revisión documental, este informe representa los hallazgos y recomendaciones del equipo de evaluación.

En el Anexo A se pueden encontrar fotografías departamentales detalladas que captan una imagen más localizada de la dinámica del conflicto y la violencia. Aunque el equipo de evaluación recogió datos en las regiones central, este, sur, oeste y norte, no pudo viajar a Gracias a Dios. Los problemas de seguridad que surgieron durante el periodo de recogida de datos también limitaron el acceso del equipo a algunas zonas descritas en el informe.

---

<sup>1</sup> El CAF 2.0 fue desarrollado para evaluar específicamente la dinámica del conflicto violento interestatal. Otras formas de violencia que no son de conflicto, por ejemplo, violencia de maras, actividad delictiva organizada, extremismo violento, abuso de la pareja íntima, etc., tradicionalmente se han evaluado por separado. El VCAF está diseñado para analizar las relaciones entre el conflicto violento y otras formas de violencia y cómo interactúan en un contexto determinado. Esta comprensión informa los enfoques integrados para prevenir la violencia y los conflictos y amplificar la dinámica de la paz.

<sup>2</sup> El período de recopilación de datos coincidió aproximadamente con el hito de los primeros 100 días del gobierno de Castro.

<sup>3</sup> Aunque el equipo no pudo viajar a Gracias a Dios, se reunió con líderes Miskitos en Tegucigalpa.

## PATRÓN SOCIAL DE BASE

El equipo habló con aproximadamente 330 personas que representan a nueve departamentos. De estas reuniones surgió un patrón social<sup>4</sup> general:

*La exclusión sistémica y la impunidad perpetúan la normalización de la desigualdad, la violencia, la fragmentación social y la corrupción en todos los niveles de la sociedad y del gobierno, contribuyendo a la completa marginación de las poblaciones vulnerables y a la falta de oportunidades socioeconómicas que dejan a la mayoría de las personas sin esperanza de un futuro viable en su país.*

Basándose en este patrón social tan arraigado, el equipo concluye que, **a corto plazo, la programación del USG puede contribuir a abordar los patrones que influyen en la decisión de emigrar (pero no tendrá un impacto directo en las tasas de migración)**. Los datos demuestran que el aumento de los ingresos permite la migración en contextos como el de Honduras.<sup>5</sup> El equipo escuchó repetidamente a personas que querían recibir formación y otras ayudas, pero con el fin de encontrar un mejor empleo al emigrar. Las dinámicas (véase abajo) que contribuyen a la decisión de emigrar requieren un cambio sistémico a largo plazo y la voluntad política de emprender profundas reformas estructurales y cambios de comportamiento. Una aguda falta de justicia y de mecanismos de protección para la mayoría de las personas sin dinero ni influencia atraviesa todas estas dinámicas y perpetúa el miedo, la impunidad y el deseo de escapar de la violencia.

## DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

En el marco del patrón social de base (arriba), el equipo identificó las dinámicas prioritarias que perpetúan el conflicto y la violencia. Entre ellas se encuentran:

1. Clientelismo y cultura de impunidad
2. Normalización de la violencia
3. Disputas por la tierra
4. Adaptación al cambio climático y escasez de recursos
5. Cierre del espacio cívico
6. Jóvenes privados de sus derechos
7. Tensiones latentes entre el sector público y el privado

## FACTORES MITIGANTES

El equipo identificó varios factores mitigantes que sirven para limitar la probabilidad de violencia y conflicto generalizados, pero deben ser vigilados para evitar cambios.<sup>6</sup>

## ESPERANZA – PERO NO PARA SIEMPRE

Los hondureños votaron en cifras récord en las elecciones de 2021, con un 68% de la población acudiendo a las urnas. La elección fue un claro voto por el cambio y una demostración de que muchos hondureños todavía tienen cierto grado de fe en el proceso electoral. Basándose en las promesas de la campaña, las expectativas para el nuevo gobierno son muy altas. Aunque muchas personas dijeron al equipo de

---

<sup>4</sup> Un patrón social es un marco de alto nivel, dentro del cual se desarrollan dinámicas específicas de conflicto, violencia y los factores que mitigan el conflicto y la violencia. Ofrece un resumen breve del impacto combinado de la dinámica específica y los factores mitigantes.

<sup>5</sup> Centro para el Desarrollo Global. 18 de agosto de 2020. “Una Nueva Investigación Confirma que la Migración Aumenta y los Países más Pobres Se Enriquecen”.

<sup>6</sup> Los factores mitigantes son elementos que tienen el potencial de reducir la probabilidad de que se produzca la violencia y el conflicto violento. No siempre son elementos que contribuyen a una paz duradera, sino que amortiguan la violencia.

evaluación que 100 días no son suficientes para determinar si el país cambiará, la mayoría expresó su preocupación de que el gobierno no estaba dando pasos claros hacia el cumplimiento de sus promesas. Los temas planteados con mayor frecuencia fueron la preocupación por la Ley de Amnistía, las percepciones de nepotismo y la experiencia/credenciales de los designados políticos. Otros señalaron que se están implementando algunas promesas de campaña, por ejemplo, la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDES<sup>7</sup> y la Ley del Empleo por Hora. Las comunidades indígenas y afrodescendientes expresaron su esperanza de que el gobierno de Castro cumpla sus promesas de inclusión social tras décadas de marginación.

El equipo escuchó repetidamente que la gente tenía una nueva ola de esperanza de cambio con la administración entrante, pero que quería verla pronto. Existe una ventana de oportunidad para que el gobierno señale claramente su dirección, y para que la presidenta Castro demuestre su liderazgo y autoridad. Sin embargo, los encuestados tenían muy claro que esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Muchos sugirieron que, si los cambios prometidos no se materializan en un año, la gente saldrá a la calle. Algunos ofrecieron plazos incluso más cortos. La duración de la esperanza como factor atenuante depende en gran medida de la capacidad del gobierno para demostrar que está tomando medidas concretas para cumplir sus promesas de campaña y mejorar las condiciones de vida.

## **MIGRACIÓN Y REMESAS**

Muchas personas, ante las escasas oportunidades de empleo, optan por emigrar de las zonas rurales a las grandes ciudades o por abandonar el país. Las remesas que los emigrantes envían a casa alivian la presión sobre el gobierno para que proporcione bienes y servicios básicos, por ejemplo, los NINIs (Ni estudian Ni trabajan) que dejan de trabajar y estudiar cuando empiezan a recibir remesas. Esto reduce la presión sobre el Estado para fomentar la creación de empleo y el acceso a una educación de calidad que sea relevante para el mercado laboral. Dado que las remesas representan el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras (aproximadamente 5.400 millones de dólares), pareciera que el gobierno hondureño tiene pocos incentivos para reducir la migración irregular.

## **MANIFESTACIÓN SIN REPRESIÓN**

El nuevo gobierno ha permitido, y (algunos encuestados creen) incluso ha animado a la gente a salir a la calle y hacer oír su voz. Por ahora, las fuerzas de seguridad no están utilizando técnicas de mano dura para sofocar las manifestaciones, lo que ofrece una válvula de escape y la oportunidad de que la gente se haga oír.

## **MARAS (PANDILLAS)**

Si bien las maras surgieron claramente como perpetradoras de violencia, algunas, como la MS-13, cumplen una función de mediación en las áreas donde están presentes. Las maras a menudo quieren evitar actos abiertos de violencia que llamen la atención de la policía.

## **EVITAR EL LENGUAJE INCENDIARIO**

El equipo escuchó de algunos medios de comunicación independientes que estaban trabajando para evitar un lenguaje incendiario específico. También vale la pena señalar que personas y medios de comunicación que alguna vez fueron voces de oposición al gobierno anterior ahora son parte del nuevo gobierno, lo que reduce el número de voces críticas en los medios hondureños.

---

<sup>7</sup> ZEDES son zonas económicas especiales que conceden a los administradores de las zonas libertad para adoptar sus propios sistemas fiscales y regímenes jurídicos, sujetos a la supervisión de un comité nacional. Han sido ampliamente atacadas como una amenaza a la soberanía hondureña.

## TRAYECTORIAS

Según los datos recopilados por el equipo, hay algunas dinámicas que tienen el potencial de convertirse en protestas específicas o actos generalizados de violencia y conflicto:

- La polarización ideológica seguirá aumentando. La gente está siguiendo de cerca las próximas elecciones a la Corte Suprema y al Fiscal General para detectar cualquier posible mala gestión.
- Las expectativas de cambio defraudadas podrían desembocar en un conflicto localizado o generalizado. Importantes tensiones giran en torno a una inclusión política y económica más significativa de los grupos sociales y de género minoritarios, la devolución de las tierras ancestrales a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y los campesinos. El aumento en el costo de los alimentos y la percepción de un incremento de la violencia también están desalentando la esperanza de cambio.
- El espacio cívico seguirá experimentando presiones, aumentando las agresiones selectivas contra quienes alzan la voz contra los intereses poderosos sin que se conviertan en violencia generalizada.
- La mayoría de la población seguirá experimentando el deterioro de las condiciones socioeconómicas, lo que aumentará la probabilidad de que continúen las protestas, la violencia, la delincuencia o la migración, al tiempo que disminuirá la legitimidad del nuevo gobierno.
- La percepción de que la seguridad general está empeorando podría dar lugar a protestas si se produce el acontecimiento desencadenante adecuado, por ejemplo, un asesinato por parte de las fuerzas policiales que recuerde al caso<sup>8</sup> de Keyla Martínez o un aumento de la violencia entre las maras más establecidas y nuevos derivados que compiten por el territorio y la venta de drogas.
- La violencia intrafamiliar y comunitaria seguirá sin disminuir, incluidos los ataques selectivos contra la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Queer, Intersexuales, Mas (LGBTQI+) y la completa marginación y violencia contra las mujeres, especialmente en las zonas rurales. La violencia generalizada perpetuará los ciclos de violencia.
- Los impactos del cambio climático seguirán aumentando. Otro evento natural similar a Eta o Iota, el aumento de los precios de la energía y los insumos agrícolas, la escasez de recursos como el agua y la falta de una respuesta del gobierno ante la inminente inseguridad alimentaria tienen el potencial de desencadenar manifestaciones.

## RECOMENDACIONES

La siguiente matriz ofrece una visión general de las recomendaciones del equipo. Para más detalles, consulte la sección "Recomendaciones" del informe principal. El equipo identificó recomendaciones que se alineaban con los Objetivos de Desarrollo (OD) del CDCS de la Misión y con la Estrategia de la Administración Biden para Abordar las Causas Raíz de la Migración en Centroamérica (o Estrategia de Causas Raíz, RCS). Si bien las referencias a la CDCS y la RCS proporcionan puntos de entrada para la programación, también es importante señalar que muchas de las recomendaciones también se ajustan a las prioridades transversales de la Misión, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, el empoderamiento de los jóvenes y la adaptación al cambio climático.

Dinámica	Objetivo	Recomendación
<b>Clientelismo y cultura</b>	Aumentar la	<b>Apalancar recursos:</b> Seguir aprovechando la

<sup>8</sup> En febrero de 2021, estallaron protestas en toda Honduras después de que la estudiante de enfermería Keyla Martínez muriera bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá. La policía dijo inmediatamente que se había suicidado; sin embargo, la autopsia reveló que Keyla había sido asesinada.

Dinámica	Objetivo	Recomendación
<b>de impunidad</b>	<p>transparencia y la rendición de cuentas para disminuir el clientelismo y mejorar el acceso a la justicia.</p> <p>Misión CDCS IR 2.4 e IR 3.1 Mejora de la gobernanza para reducir la impunidad</p> <p>RCS Pilar II</p>	<p>aceptación de alto nivel y los compromisos del gobierno para combatir la impunidad. Coordinar los mensajes del USG y comprometerse a cambiar los recursos cuando no se cumplan los puntos de referencia acordados en el sector de la justicia y la seguridad.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Promover la divulgación de financiamiento político, aumentar los incentivos y explorar nuevas formas de apoyar la profesionalización del servicio civil.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> identificar, reproducir y contextualizar iniciativas exitosas que promuevan el acceso a la justicia, reduzcan la impunidad y apoyen la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local.</p>
<b>Normalización de la violencia</b>	<p>Concienciar sobre los derechos humanos y el valor de la vida humana mediante intervenciones muy contextualizadas, en consulta con las comunidades, incluidas las poblaciones vulnerables, para fomentar un cambio de comportamiento a largo plazo.</p> <p>Misión CDCS SIR 2.4.4 y SIR 3.1.4 Mejora en la protección de los derechos humanos</p> <p>RCS Pilar V</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Asociarse con otros organismos del Gobierno de los Estados Unidos (USG) para apoyar a la policía en la utilización de enfoques centrados en los sobrevivientes al responder a incidentes de violencia de género (GBV).</p> <p>Identificar oportunidades de programas para prevenir la violencia en relación con la extorsión, especialmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma.<sup>9</sup></p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Trabajar a través de los programas nuevos o existentes de USAID para involucrar a la comunidad escolar -alumnos, profesores, padres y comunidades locales- para concienciar sobre los derechos humanos y la protección de la vida humana.</p> <p>Facilitar la curación de traumas y otro tipo de apoyo psicosocial a las familias, especialmente a los niños pequeños, para contrarrestar los efectos de presenciar y experimentar la violencia en el hogar y la comunidad.</p> <p>Integrar las consultas dirigidas por la comunidad que involucren a las poblaciones vulnerables en el</p>

<sup>9</sup> Para obtener más información sobre las dinámicas de violencia y extorsión, USAID está completando una evaluación regional de extorsión (Honduras, El Salvador y Guatemala) que estará disponible en septiembre de 2022. Comuníquese con el punto de contacto de LACLEARN para acceder al informe.

Dinámica	Objetivo	Recomendación
		<p>diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las actividades.</p> <p>Identificar, reproducir y contextualizar los enfoques de reducción de la violencia que han tenido éxito, así como los modelos que promueven el acceso a los servicios y la protección de las poblaciones en riesgo. Retirarse de los enfoques que se perciben como ineficaces o excluyentes.<sup>10</sup></p> <p>Apoyar la programación de radio en comunidades remotas y desarrollar una programación en torno a la concienciación sobre la inclusión y el acceso a los derechos de las poblaciones vulnerables. Ampliar la mensajería adaptada al contexto utilizando Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok para llegar a las comunidades específicas con acceso a las redes sociales relevantes.</p> <p>A medida que se vayan formando los comités de seguridad ciudadana, trabaje con ellos para crear modelos de prácticas y respuestas inclusivas, transparentes, no violentas y responsables a las necesidades locales.</p> <p>Comprender los diferentes roles que las iglesias pueden desempeñar a nivel local o nacional, como posibles defensores de la paz, pero también para perpetuar las dinámicas de exclusión y machismo, marginando aún más y alimentando la violencia contra las mujeres, los niños y LGBTQI+. Tener esto en cuenta en todos los programas que se realicen con socios religiosos para evitar mensajes contradictorios.</p>
<b>Disputas por la tierra</b>	<p>Evitar que surjan disputas por la tierra y aumentar las opciones de resolución pacífica de conflictos.</p> <p>Misión CDCS IR 1.2; IR 2.4; IR 3.1 Mejora de la</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Coordinar con otras agencias del USG para integrar mensajes de adhesión al Convenio ILO 169 y de respeto a los derechos humanos cuando se reúnan con sus homólogos hondureños.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar estrechamente con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el Congreso Nacional y otras partes interesadas para facilitar la aprobación de una</p>

<sup>10</sup> Por ejemplo, Cuidad Mujer, administrada por GOH tiene programas de GBV para las mujeres, pero se considera que excluye a las víctimas masculinas, a los agresores y a los miembros de la población LGBTQI+, lo que reduce la eficacia general.

Dinámica	Objetivo	Recomendación
	<p>gobernanza para reducir la impunidad</p> <p>RCS Pilares II y III</p>	<p>ley de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC) tal y como se establece en la Organización Internacional del Trabajo 169 - Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ILO 169). Involucrar a los actores del sector privado nacionales e internacionales para que adopten y se adhieran al FPIC.</p> <p>Mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Reforzar la capacidad de las entidades de titulación de tierras, los organismos de concesión de licencias medioambientales, los municipios, los defensores del pueblo, los jueces locales, los magistrados y los fiscales para aplicar y hacer cumplir el Convenio ILO 169, incluyendo el cumplimiento del protocolo de FPIC.</p> <p>Trabajar con empresas, comunidades y autoridades para fortalecer los mecanismos pacíficos de resolución de disputas por la tierra y mejorar la educación y la supervisión del cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de las empresas. Apoyar una mayor presencia gubernamental (civil) en zonas con altos índices de conflictos por la tierra.</p> <p>Trabajar con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pertinentes para apoyar la auditoría social de la resolución de disputas por la tierra y promover la defensa y el compromiso pacíficos de los derechos humanos, medioambientales y laborales. En la medida de lo posible, integrar mensajes adecuados al contexto sobre el derecho de las mujeres a poseer tierras.</p> <p>Junto con el sector privado y otros actores, identificar y difundir modelos exitosos existentes donde las comunidades y el sector privado han impulsado proyectos inclusivos y de beneficio mutuo.</p>
<p><b>Adaptación al cambio climático y escasez de recursos</b></p>	<p>Fortalecer la preparación y respuesta ante desastres. Mejorar</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Continuar trabajando con la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID y el Gobierno de Honduras (GOH) para desarrollar un plan para las áreas que probablemente</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendación
	<p>la gestión de los escasos recursos.</p> <p>Misión CDCS IR 1.3 Disminución de la vulnerabilidad a los principales impactos y tensiones</p> <p>RCS Pilar I</p>	<p>experimenten una alta inseguridad alimentaria.</p> <p>Reforzar la coordinación entre USAID y el Departamento de Defensa (DOD) para la respuesta y la preparación ante emergencias. Colaborar con los Proyectos de Asistencia Humanitaria (HAP) del Departamento de Defensa para una preparación más amplia de USAID ante las catástrofes y los esfuerzos de reducción del riesgo climático.</p> <p>Apoyar los esfuerzos de los donantes para aprobar el reglamento<sup>11</sup> de la ley del agua de 2009 y crear instancias para promover su implementación.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) para facilitar el desarrollo de protocolos de nivel operativo en respuesta a situaciones de emergencia bajo el nuevo Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Ayudar a mejorar los sistemas de información relacionados con la hidrología y los suelos con el fin de informar la toma de decisiones nacionales sobre el uso de la tierra.</p> <p>Apoyar los esfuerzos de COPECO para integrar las acciones de riesgo climático como herramienta de prevención, aumentando las capacidades de adaptación de las comunidades.</p> <p><b>Regional:</b> Mejorar la infraestructura de mitigación de inundaciones en el Valle de Sula, donde se necesita con urgencia la restauración, el fortalecimiento y la renovación.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Fortalecer las juntas<sup>12</sup> de agua y las autoridades municipales del agua para mejorar su asignación eficiente del agua, mantener la calidad del agua, proteger las fuentes de agua y resolver disputas por el uso del agua a nivel local. Informar la asignación de agua, mantener la calidad del agua y proteger las fuentes de agua.</p> <p>Buscar oportunidades en la programación de la Misión para apoyar o crear asociaciones</p>

<sup>11</sup> La Ley General de Aguas de 2009 creó una nueva Autoridad Nacional de Agua, que debía centralizar la política de aguas en Honduras. Sin embargo, la ley de 2009 carece de un reglamento - un documento legal que esboce las directrices y los principios de implementación y la creación de la autoridad del agua está pendiente.

<sup>12</sup> Las Juntas de Agua son asociaciones comunitarias presentes en la mayoría de las comunidades.

Dinámica	Objetivo	Recomendación
		intersectoriales y otros foros para gestionar y mitigar el cambio climático y las tensiones sobre los recursos.
<b>Cierre del espacio cívico</b>	<p>Mejorar la protección estatal y no estatal de los actores amenazados. Cultivar espacio para opiniones y voces diversas.</p> <p>Misión CDCS SIR 2.4.4 y SIR 3.1.4 Mejora en la protección de los derechos humanos; SIR 2.3.3 Sociedad civil y medios de comunicación fortalecidos</p> <p>RCS Pilar III</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Explorar oportunidades para trabajar con el proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia u otros mecanismos regionales anticorrupción para mejorar la capacidad de protección del estado.</p> <p>Utilizar los hallazgos de la próxima Evaluación del Ecosistema Nacional del Ecosistema Digital (DECA) para comprender e informar las respuestas a los patrones de violencia digital y brechas digitales.</p> <p><b>Programación a nivel nacional y/o local:</b> Contextualizar y mejorar las protecciones no estatales para las personas y organizaciones amenazadas por desafiar el poder o documentar los abusos de poder.</p> <p>Explorar la viabilidad de crear un mecanismo independiente de protección de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones existentes que protegen a las personas amenazadas. Ampliar el seguimiento del observatorio de la violencia de las violaciones contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas amenazadas.</p> <p>Apoyar las iniciativas de la sociedad civil para supervisar las normas éticas y el contenido neutral de la cobertura de los medios de comunicación. Integrar la comprobación de hechos en la formación de los periodistas. Facilitar oportunidades para los medios de comunicación emergentes, formar a los periodistas y editores en materia de ética y reforzar el Consejo de Ética del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).<sup>13</sup></p> <p>Apoyar la promoción y la creación de legislación que proteja contra los daños en los espacios digitales, incluida GBV. Apoyar a las unidades de respuesta designadas con asistencia técnica y recursos.</p>
<b>Jóvenes Privados de</b>	Involucrar y	<b>Apalancar recursos:</b> Fomentar la inversión del

<sup>13</sup> Todos los periodistas hondureños deben ser miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Este requisito, establecido por ley en 1979. <https://medialandscapes.org/country/honduras/organisations/journalist-associations>

Dinámica	Objetivo	Recomendación
<p><b>sus derechos</b></p>	<p>empoderar a los jóvenes en todos los aspectos de la vida social, económica y política.</p> <p>Misión CDCS IR 1.1 Los jóvenes y los niños están mejor educados y son miembros más productivos de la sociedad e IR 3.2 Riesgo de conducta delictiva reducido.</p> <p>RCS Pilares I y IV</p>	<p>GDH y del sector privado hacia acciones tangibles en la educación formal e informal. Colaborar con la programación de pequeñas subvenciones del DOD para mejorar la infraestructura educativa.</p> <p>Buscar oportunidades para asociarse con otros donantes para crear un enfoque contextualizado de la salud sexual y reproductiva y el abuso de alcohol y drogas. Cuando sea posible, integrar elementos de salud y comportamientos positivos (por ejemplo, no consumir alcohol y drogas) en las actividades existentes.</p> <p><b>Programación a nivel nacional y local:</b> Involucrar a los jóvenes como agentes de su propio cambio. Cultivar líderes juveniles e involucrar a los jóvenes como implementadores, visionarios y supervisores de actividades enfocadas en la juventud. Involucrar intencionalmente a las mujeres jóvenes y a las niñas que tienen necesidades especiales y que corren el riesgo de ser explotadas o ignoradas.</p> <p>Trabajar en múltiples niveles de entrada, por ejemplo, la política educativa y la elaboración de presupuestos, la inversión en infraestructura escolar, el trabajo con las familias y las comunidades, etc. para que los estudiantes vuelvan a la escuela.</p> <p>Centrar el desarrollo de la fuerza laboral y las actividades de empleo tanto en la colocación laboral con un salario justo como en las habilidades que coincidan con las necesidades y la capacitación del sector privado.</p>
<p><b>Tensiones entre el sector público/privado</b></p>	<p>Fomentar las condiciones para el diálogo y apoyar el desarrollo de una agenda común</p> <p>Misión CDCS IR 2.1 Mejora de la eficacia del sector privado</p> <p>RCS Pilares I y II</p>	<p><b>Aproveche los recursos:</b> Incentivar discusiones entre el GOH y el sector privado para aliviar las tensiones y acordar objetivos comunes.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar con representantes del sector privado dentro y fuera del gobierno para identificar campeones que apoyan la asociación y fomentar la comunicación constructiva entre el sector privado y el Gobierno de Honduras.</p> <p>Identificar un actor internacional neutral con credibilidad para facilitar y mediar en un proceso de diálogo y la creación de una agenda común entre los</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendación
		<p>subsectores dentro del sector privado. Apoyar la unificación de demandas y una agenda común del sector privado.</p> <p>Trabajar con las contrapartes gubernamentales para apoyar las negociaciones.</p> <p><b>Programación a nivel nacional y local:</b>            Buscar oportunidades para hacer crecer los mecanismos de resolución de conflictos del sector privado para mitigar la fragmentación del sector privado, apoyar la gestión de los escasos recursos y reducir las posibilidades de violencia.</p> <p>Fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado a nivel local.</p>
<b>Esperanza... pero no para siempre</b>	Aprovechar la esperanza del cambio	<p>Apoyar el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro en áreas como la educación, la salud, la reducción de la pobreza, los derechos de la mujer y GBV. Identificar oportunidades para trabajar con la presidenta Castro en iniciativas clave de lucha contra la corrupción y otros proyectos de alto perfil y combinarlos con una estrategia de comunicación enérgica del GOH.</p> <p>Crear espacios de diálogo entre el gobierno y las poblaciones indígenas y afrodescendientes, actores del sector privado y grupos de defensa de los derechos de las mujeres y LGBTQI+.</p>
<b>Migración y remesas</b>	Monitorear la migración y las remesas en la mitigación de la violencia y el conflicto social	Explorar opciones para diseñar actividades que fomenten la inversión de las remesas.
<b>Recomendaciones operativas y de gestión para la Misión</b>	<p>Integrar la sensibilidad ante los conflictos y la violencia en la estrategia y la cartera de programas de la Misión</p> <p>Misión CDCS Enfoques y principios</p>	<p>Asegurar que la Misión aplique a la programación de la misma una visión sensible a los conflictos.</p> <p>Permitir ajustes a mitad de camino en respuesta a los cambios en la dinámica del conflicto, la violencia y la paz, integrando la sensibilidad al conflicto en los procesos en curso de la Misión, por ejemplo, las revisiones de la cartera o del PMP.</p> <p>Considerar la posibilidad de contratar a un asesor de pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de USAID, establecer una junta o grupo asesor de</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendación
	<p>estratégicos</p> <p>CLA, género e inclusión social, programación integrada</p>	<p>pueblos indígenas, y/o tener un programa de pasantías para pueblos indígenas y afrodescendientes.</p> <p>Insertar en los Acuerdos de Objetivos de Desarrollo (DOAGs) un lenguaje que identifique las acciones clave de las contrapartes gubernamentales relevantes en temas prioritarios para mejorar la rendición de cuentas.</p> <p>Asegurarse que los socios implementadores lleven a cabo procesos de diligencia debida cuando se asocien con ONG y organizaciones de defensa, no solo con empresas privadas. Desarrollar una orden de misión sobre diligencia debida para aclarar a quién apoya USAID y evitar riesgos de reputación y desempeño.</p> <p>Mejorar la coordinación entre las actividades de USAID que trabajan en las mismas zonas y la coordinación entre las actividades de USAID y las de otras organizaciones.</p> <p>Consultar con las comunidades para identificar objetivos compartidos y apoyar la sostenibilidad. Cuando sea factible, use los recursos disponibles dentro de la comunidad.</p> <p>Considerar horizontes de tiempo de actividad más largos (más de cinco años) y/o monitoreo y evaluación a largo plazo para proyectos que buscan crear un cambio sistémico.</p>

## INTRODUCCIÓN

Honduras ha ocupado una posición estratégica en la política exterior estadounidense durante los últimos 50 años. Los vínculos comerciales y de inversión se han profundizado a raíz del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) en 2006. El país alberga bases militares estadounidenses desde la década de 1980 y sigue colaborando militarmente con Estados Unidos en la actualidad. Honduras ha vivido más de una década de inestabilidad política, marcada por el golpe de Estado de 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya (esposo de la actual presidenta Xiomara Castro), las protestas electorales de 2017, los escándalos de corrupción política y los abusos contra los derechos humanos.

Esta inestabilidad, el aumento de los niveles de pobreza extrema y el alto nivel de delincuencia y violencia en el país alimentaron el flujo de migrantes y solicitantes de asilo que ha llevado a los legisladores

estadounidenses a centrar mayor atención en las condiciones subyacentes en Honduras y sus implicaciones para los Estados Unidos. El número sin precedentes de encuentros con migrantes hondureños registrados en los últimos 10 años por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. ha sido un tema político recurrente durante las tres últimas administraciones de EE.UU., agravado por los crecientes problemas de inseguridad alimentaria, los elevados niveles de impunidad e inseguridad que persisten, la actual pandemia de COVID-19 y dos grandes desastres naturales en 2020.

La inestabilidad política y el creciente autoritarismo en toda Centroamérica contribuyen a la posición geopolítica estratégica de Honduras. En El Salvador, la administración del presidente Nayib Bukele ha debilitado derechos fundamentales como la libertad de reunión y expresión, ha iniciado detenciones arbitrarias y ha restringido la comunicación. Esto ha llevado a muchos mareros salvadoreños a huir del país hacia Honduras y Guatemala. En Nicaragua, la reciente inestabilidad política y las detenciones por motivos políticos están limitando aún más los espacios de participación política. En Guatemala, se han producido otros contratiempos para la estabilidad democrática tras los cambios en la Fiscalía General, así como la reciente negativa del Congreso Nacional a juramentar a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad en violación de la ley.

Una ola de esperanza de cambio se apoderó de Honduras tras la elección de la presidenta Xiomara Castro en noviembre de 2021. El proceso electoral pacífico y la toma de posesión son momentos históricos en la historia democrática de Honduras. Es la primera vez que Honduras sale de un gobierno bipartidista (partidos Nacional y Liberal); es la primera vez desde su creación en 2011 que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) gana una elección presidencial; y es también la primera vez que una mujer es elegida presidenta en Honduras. Estas elecciones marcaron un nuevo récord de participación electoral, con un 68,1 por ciento de participación y 1.796.723 votos contabilizados.

Honduras se considera un aliado estratégico en una región plagada de inestabilidad, violaciones de los derechos humanos, censura de prensa y hostilidad manifiesta hacia el gobierno estadounidense. El presidente Castro ha defendido una lucha directa contra las prácticas corruptas en el gobierno y ha tomado medidas inmediatas para buscar una colaboración abierta con el gobierno estadounidense.

Sin embargo, el gobierno de Castro ha contratado a asesores de Ecuador y Venezuela, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la dirección de su administración en su primer año. Muchas personas que se reunieron con el equipo creen que el ex presidente Mel Zelaya, depuesto en el golpe de Estado de 2009, ejerce un gran poder político en la actual Administración. El equipo escuchó con frecuencia la preocupación de que el ex presidente Zelaya está más preocupado por cambiar la constitución que por abordar los problemas prácticos.

## **ELECCIÓN DE XIOMARA CASTRO Y EL PARTIDO LIBRE**

Las elecciones generales de noviembre de 2021 dieron paso a la primera mujer presidenta electa en Honduras gracias al apoyo popular. Xiomara Castro, que se presentaba por segunda vez, fue elegida con la promesa de restaurar la democracia, promover los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y eliminar la corrupción generalizada y el crimen organizado.

Sin embargo, antes de su investidura, el partido LIBRE de Castro sufrió un importante revés. Una división imprevista dentro del partido surgió durante la instalación de la Junta Directiva del Congreso. La presidenta Castro trató de mantener un acuerdo político forjado con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros partidos pequeños, como el Partido Anticorrupción (PAC) y Honduras Humana. Según los términos del acuerdo, el PSH ocuparía la presidencia del Congreso si LIBRE ganaba las elecciones. Sin embargo, casi la mitad de los diputados de LIBRE, encabezados por Jorge Cáliz y Beatriz Valle (dos miembros de alto perfil de LIBRE), establecieron una alianza con el Partido Nacional para elegir a Cáliz

como Presidente del Congreso.

Castro calificó a estos 18 diputados de LIBRE como “traidores”, lo que provocó reacciones violentas de otros diputados y simpatizantes de LIBRE contra la facción que apoya a Cálix. En medio de peleas en la cámara del Congreso y protestas de los partidarios de Castro fuera de la asamblea, Cálix asumió como presidente interino. En la siguiente asamblea, Luis Redondo (PSH) fue juramentado como Presidente interino sin contar con los votos necesarios. Este conflicto debilitó potencialmente el posicionamiento de Castro como líder político del país, reveló una división dentro del partido LIBRE y el enfoque de abordar los conflictos políticos utilizando un discurso polarizador. Esta polarización intensificada continúa desarrollándose tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales.

La crisis legislativa se resolvió luego de que Manuel Zelaya hiciera un llamado a la dirección del partido LIBRE, incluido Cálix, para aceptar a Redondo como presidente del Congreso. Esta reunión se llevó a cabo en la residencia presidencial, pero la presidenta Castro estuvo ausente. Posteriormente se informó que Castro había dado positivo por Covid-19. Las declaraciones políticas posteriores y otras apariciones públicas del expresidente Zelaya han suscitado preocupaciones sobre su papel en el nuevo gobierno y la injerencia del ejecutivo en la legislatura. El equipo escuchó con frecuencia a personas que creen que Zelaya es quien controla la presidencia, no Castro.

El 27 de enero de 2022, la Presidenta Castro nombró a Ramón Sabillón para el cargo de Ministro de Seguridad. El Sr. Sabillón había pasado los cinco años anteriores en el exilio. En 2014, como jefe de policía, supervisó las detenciones de la cúpula del cártel de Valle y posteriormente se vio obligado a abandonar el país debido a las amenazas contra su vida. Sabillón ha declarado su intención de seguir extraditando traficantes en su nuevo cargo<sup>14</sup>.

Una vez fuera del cargo, el ex presidente Juan Orlando Hernández (JOH) perdió la inmunidad política que le había otorgado ser presidente. El 15 de febrero de 2022, a pocos minutos de recibir una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, la policía rodeó la casa del ex presidente y lo llevaron encadenado. La acción fue visible y ampliamente publicitada, sorprendiendo a muchos en un país en el que las élites poderosas están acostumbradas a operar con impunidad. JOH está acusado de colusión con carteles de la droga para facilitar el envío de toneladas de cocaína a los EE.UU. a cambio de apoyo financiero para el Partido Nacional. Funcionarios estadounidenses afirman que, durante su mandato, Honduras se transformó en uno de los mayores centros de transbordo de drogas de América Latina, con cárteles que penetraban en los niveles más altos del gobierno<sup>15</sup>. El 28 de marzo, la Corte Suprema ratificó por unanimidad la solicitud de extradición, y JOH fue extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022.

Las elecciones de 2021 que llevaron a Xiomara Castro al poder fueron en gran parte pacíficas. La alta participación electoral y la transmisión transparente de los votos preliminares generaron confianza en los resultados. Sin embargo, el período previo a las elecciones estuvo plagado de violencia e intimidación. Se informó que 68 candidatos que participaban en elecciones locales y nacionales fueron asesinados en 2021. De estos, casi la mitad estaban afiliados al Partido Nacional. Los asesinatos alcanzaron su punto máximo en marzo de 2021, coincidiendo con las elecciones primarias y dejando 19 muertos.<sup>16</sup>

El período previo a las elecciones también vio un aumento en la distribución de vales de ayuda social durante la campaña y la presión sobre los empleados públicos para que asistieran a las manifestaciones del

---

<sup>14</sup> Insight Crime. 31/01/22. “New Minister, But Security Challenges Await Honduras President.”

<sup>15</sup> New York Times 28/03/22. “Honduran Supreme Court Ratifies US Extradition Request of Ex-President.”

<sup>16</sup> El Heraldo. 17/11/21. “Honduras: 68 Homicidios Contra Políticos en los Últimos 10 Meses”

Partido Nacional. En las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y WhatsApp, se difundieron mensajes, memes, fotos y vídeos que difundían acusaciones, insultos y ataques, y que socavaban el derecho de los votantes a tomar una decisión informada. *Honduras Verifica*, una organización de comprobación de hechos, identificó 180 cuentas de Facebook capaces de difundir más de 400 mensajes de desinformación cada día. Aunque Facebook intentó eliminar las cuentas incendiarias, cada día se creaban otras nuevas. Al mismo tiempo, más de 300 cuentas de bots en Twitter promovieron narrativas sobre los tres principales candidatos presidenciales.<sup>17</sup>

Castro llegó al poder con la promesa de construir un “estado socialista y democrático”, pero también se acercó a la comunidad empresarial con la promesa de fortalecer el estado de derecho, evitar aumentos de impuestos y promover la inversión. Se comprometió a abordar la corrupción profundamente arraigada y el crimen organizado, y a trabajar con las Naciones Unidas (ONU) para crear una nueva comisión internacional contra la impunidad y la corrupción.<sup>18</sup>

## LOS PRIMEROS 100 DÍAS

Mientras que muchos señalaron que la presidenta Xiomara Castro actuó con rapidez y decisión contra los antiguos funcionarios de la administración, ha demostrado mucho menos entusiasmo para hacer que sus aliados rindan cuentas, lo que genera incertidumbre sobre sus intenciones de limpiar la corrupción.<sup>19</sup> Por ejemplo, la polémica Ley de Amnistía aprobada por el Congreso protege a los miembros del gobierno de Zelaya (2006-2009) y a los activistas de LIBRE. La administración justifica la Ley de Amnistía afirmando que las acusaciones de corrupción iniciadas por el Partido Nacional contra funcionarios y actividades del gobierno de LIBRE tenían motivaciones políticas.

El gobierno de Castro ha declarado que heredó una crisis financiera del gobierno anterior. A pesar de esto, el Congreso aprobó un aumento del presupuesto nacional del 17 por ciento en el año fiscal 2022-2023, 52 millones de lempiras más que el año anterior. El Ministerio de Finanzas anunció que el gobierno utilizará fondos de la reserva internacional para cubrir cualquier déficit. El nuevo presupuesto aumenta la financiación de la educación, la salud y la defensa. El presupuesto de defensa, que representa el gasto militar, sigue siendo más prioritario que el de seguridad, que financia la Policía Nacional de Honduras (HPN)<sup>20</sup>. El Consejo Nacional Electoral también recibió un importante aumento presupuestario en un año no electoral, lo que aumentó las especulaciones de que el gobierno podría estar preparando una asamblea nacional y un referéndum para reescribir eventualmente la constitución, algo que formaba parte de la campaña de Castro. A pesar de estos aumentos presupuestarios, muchas instituciones gubernamentales aún no habían recibido sus transferencias de fondos cuando el equipo de evaluación estaba realizando el trabajo de campo (mayo-junio de 2022).

Con respecto al presupuesto nacional, un encuestado afirmó:

*Los presupuestos militares son cuatro veces más altos que los presupuestos para apoyar a los Ministerios Públicos y la Corte Suprema. No estamos en guerra, pero ¿por qué dice el presupuesto que lo estamos?*

El nuevo gobierno está implementando una política de desmilitarización y cambiando la gestión de la seguridad penitenciaria y la lucha contra las maras del ejército a la HPN. Aunque la desmilitarización de la

<sup>17</sup> Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Honduras: Elecciones Generales 28 de noviembre de 2021. "Declaración preliminar: Los votantes mostraron su compromiso con el proceso democrático a pesar de la gestión altamente politizada de las elecciones y del violento período de campaña".

<sup>18</sup> Speck, Mary PhD.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> FOSDEH (2022). <https://fosdeh.com/wp-content/uploads/2022/05/fosdeh-2022-reformulacion-PGR-2022.pdf>

seguridad pública es fundamental para restaurar la democracia, el ancho de banda de la HPN se ha visto afectado por la prolongada crisis financiera, la escasez de personal y la ola de jubilaciones. Los cambios significativos en la dirección y la estructura de la HPN en los primeros días de la nueva administración han producido tensiones que la nueva dirección tendrá que gestionar para mantener el control y la confianza de los ciudadanos.

La policía está siendo redistribuida en un intento de gestionar estas nuevas responsabilidades sin aumentos proporcionales de recursos. Con un número limitado de policías para manejar las crecientes responsabilidades, la policía comunitaria está siendo retirada, incluso de comunidades con altos índices de delincuencia y violencia, lo que contribuye a la percepción de que la seguridad está empeorando. El nuevo gobierno también anunció que los antiguos policías depurados pueden volver a postularse para la fuerza policial. Muchas de las personas que se reunieron con el equipo expresaron su preocupación por la reintegración de los policías depurados y sus implicaciones para la corrupción y la seguridad en general. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) sigue patrullando en zonas rurales y urbanas para complementar las capacidades de la HPN.

En abril de 2022, Castro cumplió una promesa electoral de derogar la ley de ZEDES. Aunque esta medida fue bien recibida por muchos encuestados, la derogación no significa que las ZEDES existentes se disuelvan. Por el contrario, siguen funcionando. La derogación de la ley también tiene que ser ratificada por el Congreso Nacional. Algunos encuestados también expresan su preocupación por esta derogación debido a su impacto en la inversión extranjera y a cuestiones de legalidad.

Mientras que algunas órdenes ejecutivas controvertidas fueron eliminadas, por ejemplo, la ley de salario por hora, otras han sido firmadas, por ejemplo, la ley que refuerza la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO). Otra discrepancia ha sido la utilización de la controvertida *Partida Confidencial del Poder Ejecutivo* (o *fondo confidencial*) gestionado por el Ejecutivo y supuestamente utilizado con fines corruptos durante la anterior administración. El gobierno de Castro le cambió el nombre a *Partida de Servicios Financieros de la Administración Central* (un *fondo discrecional*). En el momento de redactar el informe, no parecía haber ningún sistema de auditoría pública para el fondo. Además, se anunció que los representantes del Congreso podrán utilizar la financiación legislativa para proyectos de desarrollo, lo que suscita preocupación, ya que esta práctica fue utilizada por los miembros del Congreso durante los gobiernos anteriores y se percibió como una forma de crear redes de patrocinio y de participar en la corrupción.

## CRIMINALIDAD

Honduras se ha vuelto infame por su dinámica criminal de los últimos 15 años. Con el apoyo de la comunidad internacional de donantes, Honduras ha logrado reducir las tasas generales de homicidio e implementar cambios estratégicos en instituciones nacionales clave durante la última década. Por ejemplo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)<sup>21</sup>, fue responsable de procesar a 113 personas durante sus cuatro años de duración.<sup>22</sup> Sin embargo, persisten desafíos en el acceso a la justicia, de confianza en el sistema judicial y en los agentes de seguridad, de reducción de la impunidad y de acceso constante a información estadística pública y confiable.

El país está situado en medio de un importante corredor de tráfico para una serie de mercados delictivos.

---

<sup>21</sup> En enero de 2022, el Gobierno de Honduras dejó expirar el mandato de la MACCIH, organización apoyada por la Organización de Estados Americanos.

<sup>22</sup> Contra Corriente (2022). “Diputados gestionaran proyectos sociales tras aumento desmesurado del 16 por ciento al Presupuesto General de la Republica.” <https://contracorriente.red/2022/04/13/diputados-gestionaran-proyectos-sociales-tras-aumento-desmesurado-del-16-al-presupuesto-general-de-la-republica/>

Es tanto un punto de origen como de tránsito para el tráfico de personas explotadas sexual y laboralmente que se dirigen a Estados Unidos o a destinos más cercanos en México y Centroamérica. Honduras también tiene un mercado de tráfico de armas impulsado por la demanda de maras, delincuentes y empresas de seguridad privada. Se atribuye a la disponibilidad de armas como una de las principales razones de los altos niveles de violencia del país.

Se cree que la tala ilegal por parte de madereros locales, agricultores sin tierra, narcotraficantes, ganaderos y otros, con la ayuda de autoridades corruptas, representa más de la mitad de la industria maderera del país. La caoba y el cedro son especialmente valorados y a menudo se trafican junto con la droga para su venta en China y Estados Unidos. El mercado maderero es el corazón de las actividades delictivas en Honduras, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.<sup>23</sup> La penetración de la corrupción y el narcotráfico en la explotación de los recursos naturales aumenta la probabilidad de violencia. Los encuestados señalaron que los intentos de los medios de comunicación de cubrir la tala ilegal y el clientelismo han dado lugar a amenazas, acoso y asesinatos. En consecuencia, muchos periodistas se autocensuran para protegerse.

#### El Crimen Organizado y el Estado

El Índice Global del Crimen Organizado (2021) identifica a Honduras entre los diez primeros países de los 193 clasificados por su mayor criminalidad. Los mercados predominantes del crimen organizado en Honduras son la trata de personas, el tráfico de armas, la tala ilegal y las drogas.

Se cree que los grupos criminales organizados en Honduras operan con la aprobación e incluso la protección de las autoridades estatales en todos los niveles de gobierno, incluidas las fuerzas de seguridad y presidentes.

La cocaína y el cannabis están en el centro del mercado de la droga en Honduras, habiendo cada vez más pruebas de la producción local de cocaína y de la participación de funcionarios de alto nivel, tanto actuales como anteriores, en todos los niveles del gobierno en la industria ilegal. Las organizaciones que trabajan como intermediarias entre los traficantes mexicanos y los productores colombianos mueven la cocaína a través de Honduras desde México, El Salvador y Guatemala hacia los Estados Unidos. En Honduras están surgiendo nuevos laboratorios y plantaciones en un esfuerzo de las organizaciones criminales locales por controlar más aspectos de la cadena de suministro que el tránsito.<sup>24</sup>

En marzo de 2020, una publicación de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado describió a Honduras como

"...explotada por los narcotraficantes para el tránsito de cocaína destinada a los Estados Unidos y de precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas". Estados Unidos estima que aproximadamente el cuatro por ciento, o 120 toneladas métricas (TM), de los envíos de cocaína procedentes de Sudamérica hicieron una primera parada por aire o por mar en Honduras en 2019, aunque se estima que una cantidad mayor transitó por Honduras por tierra tras hacer una primera llegada a otros países. El departamento de Gracias a Dios es un punto caliente para el tráfico de drogas por tierra, mar y aire debido a su lejanía, su limitada infraestructura vial y su mínima presencia gubernamental. El Departamento de Gracias a Dios es un punto caliente para el tráfico de drogas por tierra, mar y aire debido a su lejanía, su limitada infraestructura vial y su mínima presencia gubernamental. Las organizaciones de narcotraficantes se aprovechan de estas vulnerabilidades, dificultando la detección e interdicción.<sup>25</sup>

En la Costa Norte, la inseguridad es impulsada por la actividad del narcotráfico y las rutas que se extienden desde el Este, en Gracias a Dios, a lo largo de la costa hacia la frontera con Guatemala y a través de los

<sup>23</sup> *Ibíd.*

<sup>24</sup> *Ibíd.*

<sup>25</sup> Departamento de Estado de EE.UU., 2020, p. 159

departamentos de Colón, Atlántida y Cortés. Las redes del crimen organizado han desplazado a grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos de sus tierras para establecer pistas de aterrizaje clandestinas y plantaciones de coca y cannabis. Recientemente, la presidenta declaró un estado de emergencia tras la muerte de tres agentes de policía en una emboscada en el departamento de Colón. El HPN atribuyó los asesinatos a las redes del crimen organizado

Las remotas montañas del departamento de Copán sirven como centro de operaciones para la actividad criminal organizada y albergan muchas de las 200 pistas de aterrizaje clandestinas que se calcula que hay en Honduras.<sup>26</sup> En los últimos diez años se han desarticulado muchas organizaciones criminales importantes, pero no han desaparecido del todo. Por ejemplo, siguen operando<sup>27</sup> remanentes de la organización narcotraficante Los Valle. Asimismo, con la extradición de JOH, muchos encuestados esperan que la siguiente generación de la familia Hernández se haga cargo de las actividades delictivas.

En la región de Occidente, si bien existe una presencia significativa del crimen organizado internacional, los niveles de delincuencia y violencia están algo contenidos en las zonas fronterizas con Guatemala y El Salvador, donde las empresas del crimen organizado se centran en salvaguardar las rutas del narcotráfico y otros lugares estratégicos.

#### Contexto regional: El Nexo entre el Crimen Organizado, la Violencia y la Tierra

Los encuestados describieron cómo los grupos criminales organizados han ocupado las tierras de los Maya Chortí en Copán para el lavado de dinero y asegurar el movimiento a través de las fronteras. Los traficantes compran las tierras a precios inflados y amenazan a las personas que se niegan a vender. Como resultado, algunas personas han vendido sus tierras, incluso cuando están bajo título colectivo y no tienen derecho a vender como individuos. La pérdida de estas tierras impide el acceso a las fuentes de agua y debilita la cohesión de la comunidad Maya Chortí.

El equipo escuchó sobre una larga historia de violentas disputas por la tierra en Colón, que vinculan la agroindustria, los proyectos turísticos y el narcotráfico. Con el paso del tiempo, estos conflictos no resueltos han dado lugar a bandas criminales, fuerzas de seguridad privadas y comunidades que utilizan la violencia para poseer tierras. Las organizaciones criminales se confabulan con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, lo que permite que familias poderosas, empresas e inversores internacionales actúen con impunidad y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades campesinas y afrodescendientes.

Los encuestados informaron de que, en **La Moskitia**, las tierras adquiridas por los grupos de crimen organizado, aparentemente para la ganadería, suelen servir de base de operaciones para las pistas de aterrizaje para el traslado de drogas. Las operaciones más grandes pueden tener hasta 20-30 guardias armados. Hay muchos asesinatos dirigidos y ninguna protección en esta zona. Las personas que denuncian o son testigos de la violencia en La Moskitia son perseguidas, incluso cuando huyen a otras partes del país.

Las maras contribuyen a la delincuencia urbana, la violencia y las tasas de homicidio en las regiones del norte y el centro de Honduras. Las dos maras más grandes, la MS-13 y Barrio 18, están profundamente arraigadas en las zonas periurbanas de Tegucigalpa, el Valle de Sula (San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Lima), Tela y La Ceiba. Su economía criminal se basa en la extorsión, el tráfico de drogas y la

<sup>26</sup> PBS Newshour. 18/11/21. "Culture of Silence, Fear and Government Corruption Exacerbate Honduras Drug Problem."

<sup>27</sup> Insight Crime. Febrero 2021. "Honduras Profile".

subcontratación de servicios para las redes de crimen organizado. Cuando se les solicita, también se relacionan con actores políticos como interruptores armados.

El departamento de Cortés, incluida la ciudad de San Pedro Sula, registró la mayor cantidad de masacres en Honduras —tres o más personas asesinadas— en 2021. Una ola de masacres asociadas con incautaciones de drogas en el norte, junto con disputas entre maras y/o asesinatos por venganza, provocó 14 masacres en Cortés, dejando 41 muertos.

Una de las transformaciones más importantes en la estructura de las maras durante los últimos 15 años ha sido su participación y control de los mercados de drogas ilícitas en los barrios y comunidades. Esto ha incrementado sus recursos financieros y ha introducido una mayor sofisticación en las estructuras organizativas y en la participación de las maras en la política. El equipo escuchó repetidamente que la MS-13 se dedica menos a la extorsión y más a la venta y, a veces, a la fabricación de drogas. Paralelamente, la relación con las comunidades ha evolucionado ya que las maras ofrecen —y también obligan— a los residentes a dedicarse a la venta de drogas, que luego se convierte en una fuente de ingresos para las familias en territorios de alta vulnerabilidad. San Pedro Sula es un bastión de la MS-13 en el que la mara controla el tráfico y la venta de una costosa y potente mezcla de cannabis.<sup>28</sup> Llamada "krispy", ofrece a la MS-13 una fuente de ingresos más allá de la extorsión.<sup>29</sup> La lucha por el control de los territorios entre las maras se ha transformado en una lucha por el control de los mercados de drogas ilícitas en las calles. Al mismo tiempo, este cambio también aumenta el compromiso potencial con los políticos y las autoridades, especialmente la policía y el ejército, lo que aumenta el riesgo de colusión y las relaciones político-criminales.<sup>30</sup>

Las maras también se están expandiendo en el Sur y, en menor medida, en el Occidente, trayendo consigo la extorsión, el lavado de dinero y los servicios ofrecidos a otras redes de crimen organizado. En el oriente y el sur, sobre todo en torno al departamento de Olancho, la dinámica criminal se centra principalmente en la narco-ganadería (actividad delictiva que consiste en el desmonte ilegal de tierras para crear haciendas ganaderas, pistas de aterrizaje y carreteras) para facilitar el lavado de dinero y mantener el control de las rutas de tráfico a lo largo de la a lo largo de la frontera con

#### Violencia en el sector del transporte

La MS-13 y Barrio 18 son muy activos en el sector del transporte, que incluye a los conductores de autobuses, conductores de autobuses interurbanos, taxistas y mototaxis. El transporte es ahora una de las profesiones más vulnerables, con más de 2,000 conductores asesinados. A medida que los conductores atraviesan múltiples territorios, se enfrentan a extorsiones y amenazas en cada zona en la que entran.

La violencia en el sector del transporte está muy marcada por el género. Todas las víctimas son hombres, lo que deja a sus familias sin apoyo. A falta de otras opciones de subsistencia viables, muchas de estas familias optan por emigrar.

#### Explotación de migrantes

La actividad del crimen organizado en Choluteca se centra principalmente en el tráfico y el contrabando de migrantes que cruzan la frontera con Nicaragua. Los migrantes que transitan por Honduras corren un mayor riesgo de extorsión, violencia sexual y trata de personas. Los migrantes que no hablan español corren el mayor riesgo de ser explotados.

<sup>28</sup> Insight Crime. 2022. "Insight Crime's 2021 Homicide Round-Up."

<sup>29</sup> Insight Crime. Noviembre 5, 2021. "Is the MS-13 in Honduras Expanding its Role in the Regional Drug Trade?"

<sup>30</sup> <https://es.insightcrime.org/investigaciones/como-ms-13-paso-pandilla-callejera-mafia-honduras/>

Nicaragua y la costa del Pacífico. En el sur, Choluteca sigue siendo un foco de tráfico de personas y de contrabando a través de la frontera nicaragüense.

### Contexto Regional: Crimen Organizado y Maras

En **Copán y Lempira**, donde las grandes maras (MS-13 y Barrio 18) no son tan prevalentes, el equipo oyó hablar de las diferentes relaciones entre las pequeñas maras locales y las redes delictivas organizadas. En algunos lugares, la gente explicó que al crimen organizado no le gusta la competencia, por lo que elimina a los miembros de las maras antes de que se conviertan en un problema. En otros lugares, la gente describió una relación en la que los miembros de las maras prestaban servicios a los grupos delictivos organizados, como protección, sicariato, cobro de extorsiones, entre otros.

Los encuestados en **Cortés** coinciden en que las maras son responsables de la mayor parte de la violencia, pero señalan que su relación con otras redes del crimen organizado también es muy influyente. Atribuyen las recientes masacres a una reorganización de las redes del crimen organizado y de las maras en un intento de reclamar o adquirir nuevos territorios ante la percepción de la reducción de la presencia de las fuerzas de seguridad en el departamento.

El crimen y la violencia en La Ceiba, **Atlántida**, se atribuye a la MS-13 y Barrio 18. La ciudad también está conectada a las rutas del narcotráfico en Colón y Gracias a Dios.

**Olancho** es un importante punto de tránsito para la tala ilegal, las drogas y la vida silvestre en peligro de extinción de la biosfera del Río Plátano en Gracias a Dios. A pesar de ello, los encuestados destacaron que en el departamento hay mucha menos presencia de maras o delincuencia a pequeña escala que en otras partes del país, porque las redes del crimen organizado no toleran la competencia.

En **Tegucigalpa**, la MS-13 y Barrio 18 desempeñan un papel tanto en la perpetración como en la moderación de la violencia. La MS 13 y Barrio 18 utilizan modelos de negocio cada vez más sofisticados. En lugar de competir con maras más pequeñas, están "subarrendando" territorio a estas maras para extorsionar a cambio de una cuota. Numerosos encuestados identificaron el aumento de la violencia y la delincuencia, ya que las maras y las organizaciones criminales se aprovechan de la mala transición de responsabilidades del ejército a la HPN, que cuenta con menos recursos.

## **MIGRACIÓN Y REMESAS**

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelan que más de 319,000 hondureños, más que cualquier otra nacionalidad, fueron detenidos a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México durante el año fiscal 2021.<sup>31</sup> Para Honduras, la emigración es la principal fuente de divisas, superando la producción de café y las maquilas. Las remesas familiares aumentaron un 850 por ciento entre 2000 y 2020,<sup>32</sup> y hoy representan alrededor del 25 por ciento del PIB del país. A pesar de esto, las remesas están generando grandes ganancias para los bancos privados en lugar de aliviar la pobreza.<sup>33</sup> Los gobiernos no han sido capaces de crear una política que incentive la inversión de las remesas en las comunidades empobrecidas y en los grupos de riesgo social. La mayoría de las remesas se utilizan para el consumo primario y los hogares ahorran muy poco. Según el Banco Internacional de Desarrollo, en 2016,

<sup>31</sup> Al Jazeera. Enero 26, 2022. "Hondurans Concerned Legislative Crisis Threatens New Government."

<sup>32</sup> SwissInfo (2021) Las remesas recibidas por Honduras crecen un 36,2% entre enero y julio.

[https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas\\_las-remesas-recibidas-por-honduras-crecen-un-36-2---entre-enero-y-julio/46861504](https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-recibidas-por-honduras-crecen-un-36-2---entre-enero-y-julio/46861504)

<sup>33</sup> FOSDEH y OXFAM. Abril 2020. Culture of Exile: Causes and Consequences of Honduran Migration (1980-2020)

uno de cada seis hondureños se benefició de las remesas.<sup>34</sup> El equipo oyó hablar de personas que dejan de trabajar cuando empiezan a recibir remesas, aun teniendo un buen empleo. Los entrevistados describieron a estas personas como NINIs - *Ni estudian Ni trabajan*.

Una encuesta realizada a estudiantes de secundaria en junio de 2021 reveló que más del 55 por ciento tiene intención de emigrar cuando termine sus estudios. El deseo de emigrar se ve alimentado por múltiples factores, como la esperanza de conseguir mejores empleos, reunirse con la familia, escapar de la violencia y la discriminación, y la inestabilidad en el hogar.<sup>35</sup>

La inseguridad alimentaria se ha visto agravada por repetidos huracanes y ciclos de sequía relacionados con el cambio climático. La expansión de cultivos como la palma africana, que ha provocado el desplazamiento de algunas poblaciones afrodescendientes y campesinas, y las industrias de extracción, también han contribuido al cambio climático y a la pérdida de medios de subsistencia. Incapaces de ganarse la vida con su tierra, los agricultores de subsistencia a menudo se mudan primero a las ciudades y luego abandonan el país para escapar de la violencia urbana.<sup>36</sup>

La pobreza, la violencia y la impunidad se consideran importantes factores de empuje, especialmente para las mujeres y las personas que se identifican como LGBTQI+. Frente a la discriminación, la exclusión y la violencia, el 59 por ciento de los migrantes hondureños son mujeres. La falta de albergues para mujeres lleva a miles de mujeres y niñas a emigrar en busca de seguridad. Más de un tercio de las familias hondureñas están encabezadas por mujeres, muchas de ellas madres solteras. Debido a las profundas desigualdades de género, ellas luchan por mantener a sus familias. Treinta por ciento menos mujeres que hombres participan en el mercado laboral y, con la excepción de ciertas industrias del sector privado (por ejemplo, las maquilas), las mujeres que están empleadas ganan un 30 por ciento menos que los hombres.<sup>37</sup> Para muchos miembros de la muy estigmatizada comunidad LGBTQI+, que temen por su seguridad, la migración a zonas urbanas o la emigración se perciben como las únicas opciones.

#### Política Migratoria de EE.UU.

A pesar de las promesas de revertir las políticas migratorias de la era Trump, la Administración Biden-Harris ha mantenido las expulsiones del Título 42 y ha renovado el programa Permanecer en México. Muchas organizaciones que luchan contra la impunidad creen que los enfoques de disuasión que militarizan las fronteras han debilitado la influencia diplomática de EE.UU. en lo que respecta a temas relacionados con el estado de derecho. También ha ampliado los ingresos y el alcance de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y a la extorsión.

- *Iniciativa Causas Raíz: Evaluación del primer año de la Estrategia de Causas Raíz de Biden-Harris*

<sup>34</sup> IDB (2016) *La población receptora de remesas en Honduras*.

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-poblaci%C3%B3n-receptora-de-remesas-en-Honduras-Un-an%C3%A1lisis-de-sus-caracter%C3%ADsticas-socioecon%C3%B3micas.pdf>

<sup>35</sup> Speck, Mary PhD.

<sup>36</sup> Speck, Mary PhD. Diciembre 2021. "Amid Democratic Disillusionment, Can Honduras' Historical Election Bring Change?"

<sup>37</sup> FOSDEH y OXFAM. Abril 2020. *Culture of Exile: Causes and Consequences of Honduran Migration (1980-2020)*

El gobierno de Biden ofreció un nuevo enfoque para abordar la migración irregular del norte de Centroamérica y ha manifestado su apoyo a la recién electa presidenta Castro. La vicepresidenta de EE. UU. Harris viajó a Honduras para la toma de posesión y la Estrategia de EE.UU. para Abordar las Causas Raíz de la Migración en Centroamérica (RCS) articula el compromiso de la Administración Biden-Harris para establecer una migración humana, justa y ordenada mediante la mejora de la seguridad, la gobernabilidad, los derechos humanos y la gobernanza en el norte de Centroamérica. No existe una política clara del gobierno hondureño para incentivar a su población a permanecer en el país mediante la creación de oportunidades de generación de ingresos y acceso a apoyo financiero.

Un encuestado destacó:  
*El cambio ocurre en Honduras cuando Estados Unidos quiere que ocurra y con la ayuda de Estados Unidos*

## PERCEPCIONES DEL USG Y USAID

La percepción de la política exterior del gobierno estadounidense y de la labor de USAID fue mayoritariamente positiva, con algunas advertencias y sugerencias. Muchos vieron al gobierno de los EE. UU. como una de las pocas fuerzas externas capaces de efectuar cambios en el GOH. Señalaron como ejemplo la extradición de JOH, indicando que es poco probable que se haya enfrentado a la justicia en Honduras. Las personas que se reunieron con el equipo expresaron con frecuencia la creencia de que EE.UU. y la comunidad internacional tienen la obligación de acompañar a Honduras en la erradicación del narcotráfico y la corrupción, creyendo que Honduras no puede o no quiere hacerlo sola. El equipo también se encontró con la percepción, sobre todo en Occidente, de que el papel de los donantes y las ONG es atender a la población de Honduras cuando su propio gobierno no lo hace, aliviando tácitamente la presión sobre el GOH para encontrar soluciones.

Los encuestados señalaron con frecuencia las incoherencias percibidas en la política exterior del gobierno estadounidense. Los casos que surgieron repetidamente a lo largo de las entrevistas incluyen la frustración por el apoyo del gobierno estadounidense a JOH a pesar de conocer el alcance de la corrupción y los abusos que ocurrían bajo su liderazgo. Algunos señalaron que la extradición de JOH, pero no de otros altos funcionarios del gobierno que participaron en los abusos o fueron cómplices de ellos, parecía más una acción con motivación política que un verdadero esfuerzo por abordar la corrupción estructural. Otros casos incluyen la falta de objeción del gobierno estadounidense al golpe de Estado de 2009 o a las elecciones de 2017, mientras que al mismo tiempo se llevan a cabo programas de lucha contra la corrupción y se apoyan elecciones libres y justas. Algunos señalaron que, dado que el gobierno estadounidense está tan centrado en frenar la migración, otras necesidades urgentes, como la pobreza extrema y la falta de servicios básicos, no reciben la atención que merecen. Del mismo modo, algunos cuestionaron el enfoque del Gobierno de EE.UU. por combatir el flujo de drogas, y desconocían las inversiones correspondientes en EE.UU. para suprimir la demanda.

La mayoría de las personas que hablaron con el equipo tenían cierto nivel de familiaridad con USAID y reconocían la importancia de las considerables inversiones de USAID en Honduras. En Occidente, en general, había menos familiaridad con las actividades de USAID, aunque algunos percibían que se dirigían más a los hombres y señalaban que las mujeres tenían más dificultades para participar porque sus maridos no lo permitían.

Las personas señalaron proyectos específicos de USAID que, en su opinión, han sido especialmente eficaces y han contribuido a un cambio positivo. Los más mencionados fueron la Alianza del Corredor Seco, el trabajo de auditoría social, Proclaque, Transformación de los Sistemas de Mercado, GENESIS y la respuesta al desastre de BHA. Sin embargo, muchos también destacaron que, a pesar de toda la inversión

de la comunidad internacional en Honduras durante muchos años, algo no está funcionando. Señalan la falta de un cambio estructural profundo o de un movimiento de los indicadores críticos de desarrollo.

Aunque los encuestados valoran la inversión de USAID en el desarrollo, les preocupa que la mayor parte del dinero parezca ir a parar a los ejecutores internacionales en lugar de beneficiar directamente a los sistemas, organizaciones y comunidades locales. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes perciben de forma generalizada que no se les consulta ni se les hace partícipes de las actividades de USAID porque los ejecutores trabajan directamente con los municipios y los objetivos de éstos no suelen coincidir con sus objetivos y su visión del mundo. Al mismo tiempo, algunos municipios y asociaciones municipales, también conocidas como “mancomunidades”, creen que los fondos de USAID deberían pasar por ellos para alinearse perfectamente con las prioridades locales. Las personas que hablaron con el equipo transmitieron la percepción generalizada de que los fondos de USAID van directamente a los municipios, donde corren el riesgo de politizarse o perderse debido a la corrupción. Solicitaron una consulta más directa con las comunidades cuando comienza un proyecto y durante su implementación.

Muchas de las personas que se reunieron con el equipo también hicieron sugerencias a USAID para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones. Entre ellas figuraba, cuando fuera posible, recurrir a expertos técnicos locales, de la comunidad o del municipio, según la perspectiva del encuestado, en lugar de traer a consultores externos. Creen que los consultores externos, tanto hondureños como internacionales, llegan sin entender el contexto local o la cosmovisión de la comunidad y traen sus propios objetivos para el proyecto que a menudo no se alinean con los objetivos de la comunidad. La falta de consulta con las comunidades desde el principio fue una gran preocupación para las personas y organizaciones indígenas y afrodescendientes que se reunieron con el equipo.

Algunos también hicieron comentarios dirigidos a los socios ejecutores sobre la sostenibilidad de las intervenciones. Describieron cómo una vez que un proyecto termina, también lo hace la iniciativa. Cuando los ejecutores y los consultores se van, se llevan consigo los conocimientos, las metodologías y las capacidades en lugar de transferirlos a los miembros de la comunidad, lo que limita la sostenibilidad. Varios destacaron que se percibe una falta de comunicación entre las actividades de USAID y los ejecutores que trabajan en la misma zona geográfica, lo que resulta confuso para los socios locales. También señalaron con frecuencia que las intervenciones a más largo plazo (más de 5 años) apoyarían mejor el desarrollo sostenible.

Las organizaciones locales que buscan fondos de USAID comentaron la complejidad de los requisitos de solicitud, gestión y presentación de informes. Algunos comentaron que USAID debería tener en cuenta el modo en que se estructuran las actividades para no excluir a las organizaciones locales en favor de los ejecutores internacionales, o para no obligar a organizaciones locales con objetivos y visiones diferentes a trabajar juntas. Señalaron que estas situaciones pueden comprometer la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones.

## **METODOLOGÍA**

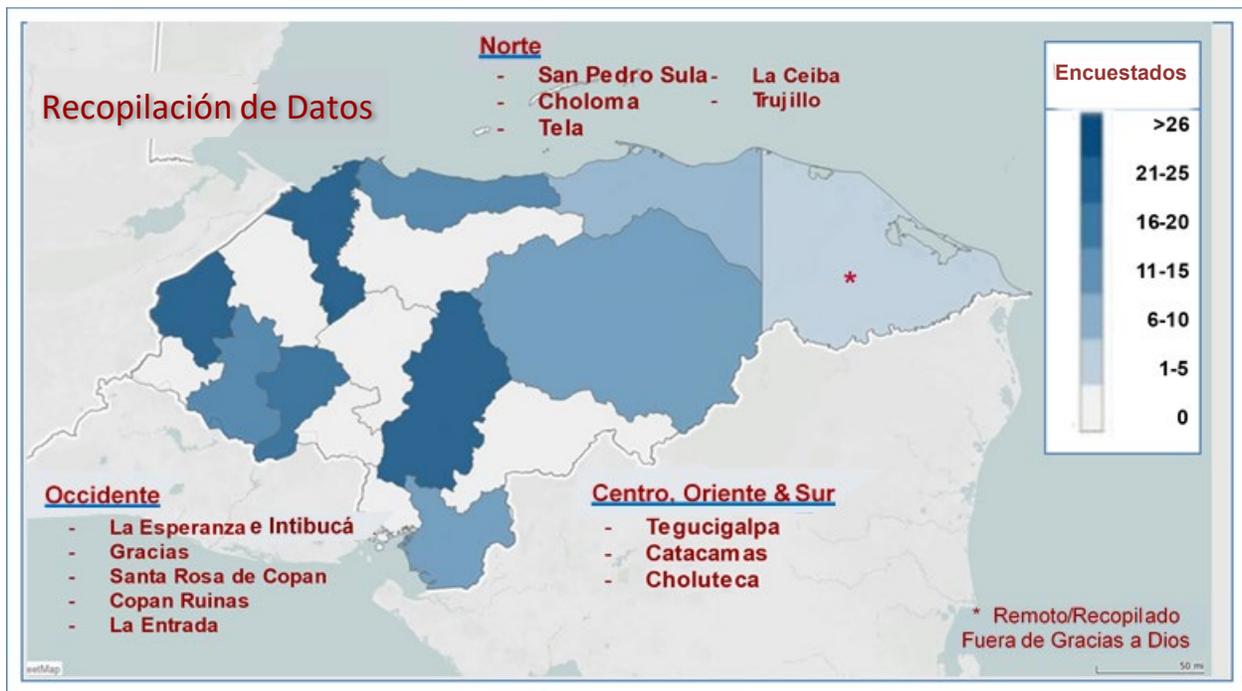
En 2020, USAID/Honduras solicitó una evaluación estratégica de las tendencias actuales con potencial para contribuir a la violencia, el conflicto violento o la paz. Tras los retrasos debidos a la pandemia de COVID, el trabajo de campo de la evaluación se llevó a cabo durante mayo - junio de 2022.<sup>38</sup> con el fin de informar sobre la implementación de la CDCS 2020 - 2025, apoyando los esfuerzos de USAID para garantizar que

---

<sup>38</sup> El período de recopilación de datos coincidió aproximadamente con el hito de los primeros 100 días del gobierno de Castro.

la dinámica contextual cambiante se refleje en la programación y la estrategia. USAID/Honduras utilizará esta evaluación para informar la toma de decisiones, garantizar la sensibilidad al conflicto en toda su cartera e identificar oportunidades para mitigar el conflicto y la violencia a través de su programación.

El equipo de evaluación incluyó representantes de USAID/Honduras, el Centro para la Prevención de Conflictos y Violencia (CVP) y consultores locales e internacionales contratados por el proyecto LACLEARN. Este equipo multidisciplinario fue cuidadosamente seleccionado para poner a prueba el Adendum de Violencia del Marco de Evaluación de Conflictos 2.0 de USAID (VCAF<sup>39</sup>) desarrollado en 2020. Al comprender que los diferentes tipos de violencia y los conflictos violentos no pueden ser entendidos de forma aislada, el VCAF amplía el marco analítico del CAF 2.0 para explicar mejor la violencia no relacionada con el conflicto en múltiples niveles de entrada. Los principios del VCAF pueden utilizarse a nivel nacional o incluso regional para evaluar la dinámica de la delincuencia organizada transnacional, a nivel subnacional para abordar los conflictos violentos y a nivel muy local para evaluar la violencia comunitaria e interpersonal.



El equipo realizó entrevistas con informantes clave y debates de grupos focales, recopilando datos de percepción en nueve departamentos (consulte el mapa para ver las ubicaciones de recopilación de datos). De las casi 330 personas que se reunieron con el equipo en representación de nueve departamentos,<sup>40</sup> el 53 por ciento se identificó como hombre, el 45 por ciento se identificó como mujer y el dos por ciento se identificó como minorías no binarias o de género. Los informantes clave y los participantes de los grupos focales representaron diversos puntos de vista políticos y segmentos de la sociedad, incluidas las

<sup>39</sup> El CAF 2.0 se desarrolló para evaluar específicamente la dinámica de los conflictos violentos intraestatales. Otras formas de violencia no relacionadas con el conflicto, por ejemplo, la violencia de las maras, la actividad delictiva organizada, el extremismo violento, el abuso de la pareja, etc., se han evaluado tradicionalmente por separado. El VCAF está diseñado para analizar las relaciones entre los conflictos violentos y otras formas de violencia y cómo interactúan en un contexto determinado. Esta comprensión informa los enfoques integrados para prevenir la violencia y el conflicto y amplificar la dinámica de la paz.

<sup>40</sup> Aunque el equipo no pudo viajar a Gracias a Dios, se reunió con los líderes Miskitos en Tegucigalpa.

poblaciones de las que USAID no escucha habitualmente.

Entre los encuestados se encontraban: ONGs, sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, fuerzas de seguridad y policía, jóvenes, mujeres, líderes religiosos, líderes indígenas, alcaldes y personal municipal, mancomunidades, instituciones de ámbito nacional, sector privado (es decir, empresas, cámaras de comercio, sector informal), socios ejecutores, agricultores, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, ex reclusos, comunidad LGBTQI+, comunidades afectadas por la violencia, académicos y partidos políticos. En cada departamento, el equipo intentó entrevistar a una muestra representativa de informantes, recolectando diversas percepciones y comprobando la información disponible.

#### Patrón Social de Base

La exclusión sistémica y la impunidad perpetúan la normalización de la violencia, la desigualdad, la fragmentación social y la corrupción en todos los niveles de la sociedad y del gobierno, contribuyendo a la completa marginación de las poblaciones vulnerables y a la falta de oportunidades socioeconómicas que dejan a la mayoría de las personas sin esperanza de un futuro viable en su país.

Para preservar la riqueza de los datos recogidos en cada departamento, este informe también incluye fotografías departamentales (*Anexo A*). Cada instantánea incluye información específica del departamento y está organizada de manera que refleje la estructura del informe principal, analizando la dinámica de la violencia y el conflicto y los factores mitigantes. Las trayectorias y las recomendaciones programáticas se incluyen en el cuerpo principal del informe. Aunque el equipo considere que la evaluación representa una representación válida de las percepciones de los departamentos, es importante reconocer las limitaciones del breve plazo<sup>41</sup> y alcance de la recopilación de datos.

El equipo recopiló datos de percepción en torno a las siguientes líneas de investigación priorizadas por la Misión:

- Violencia de género (GBV)
- Violencia juvenil
- Corrupción y captura del Estado
- Cultura de impunidad y acceso a la justicia
- Explotación de la tierra y los recursos naturales

Este informe representa el análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Al revisar este informe, es importante tener en cuenta que ofrece hallazgos, conclusiones y recomendaciones relacionadas con la forma en que las personas entrevistadas perciben su realidad. Estas percepciones están moldeadas por el entorno e inherentemente vinculadas a una interacción de identidades, intereses e incentivos, narrativas dominantes, normas sociales y valores, y el desempeño percibido de las instituciones formales e informales dentro de este entorno. Por lo tanto, esta evaluación debe entenderse como una instantánea en el tiempo, recopilada principalmente a partir de datos de percepción, frente a un análisis cuantitativo sólido.

## **PATRÓN SOCIAL DE BASE**

En las entrevistas y en los debates de los grupos focales, surgió repetidamente un patrón social de base. Un patrón de exclusión e impunidad normaliza la violencia y permite el crecimiento de la corrupción en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Esto lleva a muchas personas a perder la esperanza de

---

<sup>41</sup> La recopilación de datos fue realizada simultáneamente por tres sub-equipos en el transcurso de dos semanas.

poder satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones en Honduras, contribuyendo a la migración interna y externa.

La naturaleza profundamente arraigada de este patrón social y la dinámica de conflicto y violencia que se perpetúa en este contexto requerirán tiempo y voluntad política por parte del GOH para lograr reformas y cambios de comportamiento. Aunque a corto plazo, **la programación del USG puede contribuir a abordar los patrones que influyen en la decisión de emigrar, el equipo concluye que no tendrá un impacto directo en las tasas de migración.**

La investigación mundial demuestra que un mayor crecimiento económico no disuade inmediatamente la migración. Más bien, la migración crece cuando se incrementan los ingresos. A medida que el PIB per cápita aumenta, también lo hace la migración. Esta relación disminuye alrededor de los \$5,000 y se revierte a partir de los \$10,000 aproximadamente. En los países de bajos ingresos, las personas que se preparan para migrar tienen ingresos un 30 por ciento más altos que el promedio; el 14 por ciento de la estratificación de ingresos más altos se atribuye a más años de educación.<sup>42</sup> El equipo escuchó repetidamente a personas que querían formación y otras ayudas, pero con el fin de encontrar un mejor empleo al emigrar.

El efecto del crecimiento económico sobre la migración aumenta en sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos. Honduras tenía en 2019 el cuarto nivel más alto de desigualdad de ingresos (índice de Gini de 0.482) en la región de LAC. Las tasas de crecimiento económico sostenidas para Honduras indican que la emigración probablemente seguirá aumentando, al menos en el corto plazo.

## DINÁMICAS DE CONFLICTO Y VIOLENCIA

Dentro del marco del patrón social de base, el equipo utilizó el mapeo de sistemas para identificar las relaciones y los patrones que perpetúan y mitigan la violencia y el conflicto. La carencia aguda de mecanismos de justicia y protección para la mayoría de las personas sin dinero ni influencia atraviesa todas estas dinámicas y perpetúa el miedo, la impunidad y el deseo de escapar de la violencia. Estos incluyen las percepciones de:

1. Clientelismo y cultura de *impunidad*
2. Normalización de la violencia
3. Disputas por la tierra
4. *Adaptación al cambio climático y escasez de recursos*
5. *Cierre del espacio cívico*
6. Jóvenes Privados de sus derechos
7. Tensiones latentes entre el sector público y el privado

Los elementos en *cursiva* indican puntos de ventaja estratégica que aparecieron en múltiples partes del sistema. Aunque se describen en secciones separadas a continuación, es importante reconocer que estas dinámicas se interrelacionan y no pueden considerarse de forma aislada.

---

<sup>42</sup> Centro para el Desarrollo Global. Agosto 18, 2020. “New Research Confirms that Migration Rises as the Poorest Countries Get Richer.”

## CLIENTELISMO Y CULTURA DE IMPUNIDAD

El clientelismo, la corrupción y la cultura de la impunidad fueron temas que surgieron en prácticamente todas las entrevistas. Aunque la presidenta Xiomara Castro prometió combatir la arraigada corrupción estatal, algunas de sus primeras acciones han suscitado dudas. Las más mencionadas fueron la aprobación de la Ley de Amnistía, que efectivamente ofrece inmunidad a los miembros del gobierno anterior<sup>43</sup> de Manuel Zelaya, y su nombramiento de miembros de la familia y asociados cercanos de Manuel Zelaya para servir en su gobierno, por ejemplo, colocando a José Zelaya, sobrino de Manuel Zelaya, en el cargo de Ministro de Defensa. Sin embargo, los encuestados apoyaron la derogación de la Ley de Secretos, con la esperanza de que conduzca a una mayor transparencia y rendición de cuentas

### Percepciones de los Encuestados Sobre la Cultura de la Impunidad:

*La justicia es para los que pueden pagar.*

*La gente no denuncia porque no hay protección efectiva para las víctimas ni sanción para el agresor.*

*Las autoridades son el mayor enemigo del pueblo.*

*El sector policial y judicial no parece funcionar. Cuando llega la policía, no sabes si están ahí para ayudarte o para hacerte daño.*

### Percepciones de los Encuestados Sobre la Corrupción:

*El gobierno está reproduciendo malas prácticas. Si alguien no es miembro de LIBRE no tiene acceso a un trabajo. El clientelismo continúa.*

*La corrupción es un cáncer. No se puede erradicar en cuatro años. Se trata de nepotismo con las familias.*

*La PMOP y la policía están en colusión con las maras. Fuman y compran marihuana a las maras y terminan extorsionando y reclutando para las mismas.*

La corrupción está arraigada en las instituciones del Estado y se considera una de las principales fuentes de financiamiento del sistema político. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), en 2021, Honduras era el cuarto país más corrupto de América, detrás de Haití, Venezuela y Nicaragua.<sup>44</sup> Informes del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) de los cuales ha hecho eco Ricardo Zúñiga, enviado especial de la administración Biden para el norte de Centroamérica, muestran que el dinero perdido por la corrupción representó el 12

por ciento del PIB del país en 2020, es decir, aproximadamente 3 mil millones de dólares.<sup>45</sup> Muchos encuestados se preguntan si la presidenta Castro es capaz o está dispuesta a introducir las profundas reformas estructurales necesarias para combatir la corrupción, o si las prioridades de la administración se centran más en castigar al anterior gobierno.

Las personas que se reunieron con el equipo describieron las muchas formas en que el gobierno y el clientelismo de los partidos políticos afecta su acceso a los servicios básicos, empleos, tierra y a la justicia. Muchas personas que trabajan en ministerios y organismos gubernamentales son despedidas para crear puestos de trabajo para los partidarios del partido LIBRE. Se están vaciando las oficinas públicas y despidiendo a todo el personal, incluidos los expertos técnicos, lo cual paraliza la capacidad institucional. Muchos encuestados señalaron que las nuevas personas que se instalan a menudo no

<sup>43</sup> La Ley de Amnistía fue aprobada para facilitar la liberación de activistas de derechos humanos y líderes de la sociedad civil que sufrieron criminalización tras el golpe de Estado de 2009.

<sup>44</sup> Revistazo (2022) Transparencia Internacional presenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2021. <https://revistazo.com/transparencia-internacional-presenta-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2021/>

<sup>45</sup> Proceso Digital (2021) Corrupción le arrebató a Honduras \$3 mil millones durante la pandemia, dice Ricardo Zúñiga: <https://proceso.hn/es-de-especial-interes-de-eeuu-la-prosperidad-y-democracia-de-honduras-ricardo-zuniga/>

tienen las habilidades para desempeñar estas funciones, lo que deja a las instituciones con una capacidad técnica y de gestión gravemente mermada, y prácticamente sin memoria institucional. También significa volver a empezar y establecer nuevas relaciones en los municipios, con la policía o en otras oficinas gubernamentales.

Esta cultura del clientelismo agudiza el sentimiento de exclusión de la mayoría de la población. Combinado con la impunidad generalizada, el clientelismo también perpetúa las oportunidades y los incentivos para la corrupción.

#### Perspectivas Regionales: Impactos del Clientelismo y la Corrupción

Muchos habitantes de **Tegucigalpa** describen el elevado número de personas que viven en la pobreza extrema y sin acceso a los servicios básicos como una ruptura del contrato social entre el gobierno y los ciudadanos. Además de la falta de financiamiento e infraestructuras deficientes, muchos culpan la mala gestión y la corrupción de esta exclusión generalizada.

En **Colón**, aunque las comunidades Garífunas y Pech apoyaron a Xiomara Castro en las elecciones, no sienten que la nueva administración esté cambiando la dinámica de exclusión que han sentido durante décadas. Muchos sienten que el nuevo gobierno utilizó a las poblaciones indígenas y afrodescendientes para ganar las elecciones, pero no tienen ningún interés en atender las necesidades indígenas. Como declaró un líder, *"sólo nos invitaron a bailar como parte de un festival cultural"*.

Como JOH es de Gracias, el departamento de Lempira está estrechamente relacionado con el Partido Nacional. Tanto en **Lempira** como en **Copán**, la gente le contó al equipo cómo sus amigos y familiares están perdiendo sus trabajos para dar cabida a los empleados del Partido LIBRE.

A medida que aumenta la percepción de exclusión y corrupción, estallan más protestas. Los líderes de las protestas surgen y son objeto de asesinato, criminalización o cooptación por parte del gobierno, los miembros de los partidos políticos o el sector privado. El equipo escuchó diversas expresiones de esta dinámica, desde un alcalde que buscaba activamente voces de la oposición y trataba de contratarlas como "enlaces comunitarios" con altos salarios, hasta líderes del sector del transporte en Tegucigalpa que fueron cooptados o asesinados, así como el asesinato de Berta Cáceres en Intibucá. Una vez que estos líderes son efectivamente eliminados, los movimientos sociales se debilitan y el clientelismo sigue floreciendo.

La percepción generalizada de que el sistema de justicia formal (policía, Ministerio Público y poder judicial) no actúa a favor de nadie que no tenga influencia política perpetúa la cultura de la impunidad y disuade a la mayoría de la población de presentar quejas y denunciar actos de violencia a las autoridades locales. Varias personas comentaron al equipo que denunciar un acto de violencia o un delito se considera contraproducente. Si el agresor busca venganza, las víctimas de extorsión o violencia doméstica pueden ser asesinadas por denunciar el delito.

En el Índice de Estado de Derecho de 2021, Honduras ocupó el puesto 136 de los 139 países encuestados a nivel mundial. Su puntuación ha disminuido desde 2016. Honduras tiene uno de los sistemas de justicia penal más corruptos y menos eficaces del mundo.<sup>46</sup> Según LatinoBarometro 2020, la confianza de los hondureños en su poder judicial se encuentra entre las más bajas de América Latina, con sólo el 16 por ciento de los encuestados expresando su confianza en la institución.<sup>47</sup>

Existe una desconfianza generalizada hacia el ejecutivo, el Congreso, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. A pesar de haber firmado varios tratados internacionales contra el crimen organizado y de haber aprobado leyes nacionales para combatir la corrupción y la actividad criminal, Honduras no ha podido implementar estas medidas, muchos atribuyen esto a esfuerzos para proteger los intereses de las élites políticas y económicas.<sup>48</sup> Los actores estatales facilitan los mercados ilícitos no solo protegiéndolos y haciendo la vista gorda, sino también rechazando medidas que, si se implementan de manera efectiva, podrían fortalecer la capacidad de su país para combatir el crimen organizado. Entre ellas se encuentran mecanismos sólidos de rendición de cuentas, programas de prevención del delito y de apoyo a las víctimas, y una buena gobernanza.<sup>49</sup>

El GOH está preparando la puesta en marcha de Comités de Seguridad Ciudadana. Los comités incluirán a los ciudadanos y a la policía, utilizando el modelo de policía comunitaria, que facilita los debates y la colaboración al tiempo que mejora las intervenciones policiales basadas en la inteligencia. Aunque el funcionamiento operativo de los comités aún está por definirse, algunos expresaron su preocupación por la posibilidad de que estos comités sean cooptados con fines políticos e incluso de vigilancia. Los dos primeros Comités de Seguridad Ciudadana se formarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, según las tendencias del país, es probable que enfrenten desafíos presupuestarios, de capacitación y de recursos, así como el riesgo de politización. Si los comités no funcionan o parecen estar cooptados, la percepción de impunidad a nivel local podría empeorar. Los miembros de la comunidad expresaron su preocupación por la transparencia de los procesos de selección y las posibles implicaciones de una toma

Percepciones de los encuestados sobre la policía:  
*El gobierno nacional no entiende las condiciones de vida de la policía nacional. Es ampliamente reconocido que la policía carece de personal y de recursos. Las condiciones de vida son deplorables y los policías tienen que pagar sus propios teléfonos móviles y planes de datos para usarlos en el trabajo. ¿Cómo van a implementar las actividades de policía comunitaria?*

*Los narcos y las maras se han infiltrado en la policía. La gente no confía en ellos.*

*Tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes.*

*En algunos casos, cuando se producen dos sucesos al mismo tiempo, la policía tiene que dar prioridad a la respuesta al incidente más grave porque no dispone de recursos para responder a ambos.*

<sup>46</sup> World Justice Project. 2021. "Rule of Law Index."

<sup>47</sup> Latinobarometro Informe 2021. "Confianza en poder judicial."

<sup>48</sup> Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 2021. "Global Organized Crime Index 2021"

<sup>49</sup> Global Institute for Transnational Organized Crime. Enero 2022. "Part of the Landscape."

de decisiones exclusiva y poco transparente sobre la seguridad de la comunidad y la asignación de recursos. Sin embargo, en algunas áreas como Olancho, la gente también expresó sentimientos de optimismo cauteloso sobre los comités.

## NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

En 2020, Honduras tuvo la tasa de feminicidios más alta de América Latina. Honduras registró 227 feminicidios en 2020—una tasa de 4,7 por cada 100.000 mujeres, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. La Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) calcula que entre 2006 y 2020 murieron aproximadamente 6,266 mujeres en circunstancias violentas: El 90 por ciento de estas muertes han quedado impunes.

La cultura de la impunidad y el machismo profundamente arraigado que existe en todos los niveles de la sociedad ha llevado a una normalización generalizada de la violencia y a la falta de respeto por la vida humana. La violencia se ha convertido en una norma social y un hecho de la vida cotidiana. Las personas que viven con una discapacidad corren un riesgo aún mayor, ya que su probabilidad de sufrir violencia física y emocional es casi cuatro veces mayor que la de sus compañeros.<sup>50</sup>

### El País más Peligroso de Central América

En 2021 Honduras mantuvo su posición como el país más mortífero de Centroamérica con una tasa nacional de homicidios de 38.6 por cada 100,000. Según datos preliminares del gobierno, los 3,651 homicidios registrados en 2021 representaron un aumento con respecto a 2020, pero siguen siendo inferiores a los casi 4.000 homicidios registrados en 2019.

- *Insight Crime's 2021 Homicide Round-up*

El miedo a la violencia contribuye tanto a la migración interna a ciudades más grandes como a la emigración. Los que no emigran buscan mecanismos de protección alternativos para escapar de la violencia. Para los miembros de la comunidad LGBTQI+ eso puede significar hacerse "invisible" para evitar daños, o en el peor de los casos, suicidarse. En algunos casos, las personas contratan a pandilleros o miembros de barras que ofrecen protección.

El equipo conoció muchos casos de violencia que se utilizan de manera rutinaria para resolver

disputas menores, ejercer el control y conseguir objetivos. Las poblaciones vulnerables se quedan sin acceso a la protección o a la justicia, lo que crea una cultura del miedo en las comunidades. Muchas personas, especialmente en las zonas rurales de Occidente, describieron la violencia contra las mujeres, los niños, las poblaciones indígenas y los miembros de la comunidad LGBTQI+ como normas socialmente aceptadas en sus comunidades conservadoras. La violencia sexual se percibe como algo común, e incluso es aceptada como un derecho del hombre por algunos en las zonas más remotas de Occidente. De forma alarmante, los encuestados describieron el aumento del incesto y de los embarazos precoces (de hasta 9 años), atribuidos a la pandemia, la aceptación social de la violencia sexual y el aumento del consumo de alcohol y drogas. Varias personas que se reunieron con el equipo describieron cómo la iglesia a veces perpetúa esta dinámica de machismo y violencia al aconsejar a las mujeres y a los niños que se sometan a la voluntad de los hombres y que recen por el cambio, incluso si eso significa sufrir repetidos actos de violencia.

Los encuestados describieron con frecuencia situaciones en las que las mujeres están atrapadas en ciclos de abuso doméstico. Sólo el 8,2 por ciento de las mujeres de Honduras tienen títulos de propiedad a su nombre (frente al 30 por ciento de los hombres). Otro 5,4 por ciento son copropietarias, pero la mayoría, el 86 por ciento de las mujeres, no son propietarias. En consecuencia, las mujeres tienen menos acceso al

<sup>50</sup> USAID/Honduras. Febrero 2020. Analysis of Gender and Inclusive Social Development.

crédito que los hombres porque no tienen propiedades que ofrecer como garantía.<sup>51</sup> Esto significa efectivamente que muchas mujeres rurales están obligadas a estar con sus cónyuges, que son los propietarios de la tierra y, por tanto, de los medios de producción y de los beneficios. En Occidente, el equipo escuchó repetidamente que las mujeres no pueden escapar de la violencia doméstica por carecer de medios para generar ingresos.

Muchas de las personas que hablaron con el equipo expresaron su preocupación por que los niños están expuestos a la violencia desde una edad muy temprana. Según algunos, al no haber controles, los niños ven imágenes gráficas y violentas a través de los medios de comunicación. A menudo son testigos de la violencia intrafamiliar y de los abusos sexuales y, en consecuencia, los perciben como una norma social. Los niños también pueden estar expuestos a ver cadáveres en las calles o exhibidos abiertamente en los medios impresos y sociales. Toda esta exposición a una edad temprana normaliza la violencia y la comprensión de la impunidad de los autores. Algunos niños incluso aspiran a ser miembros de maras o a formar parte del crimen organizado por el estilo de vida glamuroso y el poder que se asocia a las maras.

Percepciones de los Encuestados  
Sobre la Naturaleza Sistémica de la  
Violencia:

*Los niños son educados en el machismo. Las niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños desde que nacen.*

*Si el problema fueran solo bloqueos de calles, entonces sería fácil. El problema radica en la forma en que se educa a los niños y en las condiciones de vida.*

Muchos también culparon a la iglesia de agudizar la estigmatización, la criminalización y la violencia contra las poblaciones LGBTQI+. Los acontecimientos que promueven los derechos de las personas LGBTQI+ en Honduras u otros países suelen desencadenar reacciones violentas contra la comunidad LGBTQI+, por ejemplo, la legalización del matrimonio homosexual en Chile. Los encuestados también describieron la violencia, la intimidación y el lenguaje agresivo utilizado por algunos miembros de la prensa escrita cuando informan sobre noticias relacionadas con la comunidad LGBTQI+.

Altamente estigmatizadas, las mujeres transgénero y las activistas de derechos se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género. La Red Lésbica Cattrachas informó de 373 muertes violentas entre personas LGBTQI+ entre junio de 2009 y marzo de 2020, de las cuales 111 fueron feminicidios trans. En el departamento de Atlántida, los encuestados señalaron un aumento de la persecución y la extorsión de mujeres y trabajadores sexuales trans por parte de las maras. Algunas personas describieron cómo muchas trabajadoras sexuales trans han recurrido a pagar a delincuentes para que las protejan de las maras que las obligan a vender drogas para ellas. La policía fue caracterizada como cómplice de estas actividades de las maras.

---

<sup>51</sup> USAID/Honduras. Febrero 2020. Analysis of Gender and Inclusive Social Development.

Percepciones de los Encuestados sobre el  
Papel de las Instituciones en la  
Normalización de la Violencia:

*La religión y la iglesia son generadoras de violencia. Las iglesias evangélicas y católicas utilizan narrativas de buena intención, pero en realidad, forman un bloque en contra la comunidad LGBTQI+*

*Los medios de comunicación perpetúan los actos de violencia contra la comunidad LGBTQI+. Los periodistas piden dinero para dar cobertura, y luego sesgan la información para enardecer a la gente contra nosotros por la forma en que reportan las noticias.*

La violencia impregna todos los niveles del gobierno y la sociedad. Las mujeres se enfrentan a muchas barreras en la vida política y pública, incluida la violencia dentro de sus propios partidos políticos. En los nueve meses previos a las elecciones más recientes, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron un aumento de la violencia política contra las mujeres, incluido el feminicidio, que afectó a los tres principales partidos políticos. En las últimas elecciones, solo dos candidatos LGBTQI+ al Congreso declararon su orientación sexual frente a siete en 2017. Los grupos LGBTQI+ afirman que la discriminación, la marginación y los altos niveles de violencia electoral desaniman a muchos candidatos potenciales a participar.<sup>52</sup>

La violencia es una forma aceptada de resolver las disputas incluso en los niveles más altos del gobierno. Antes de que la presidenta Xiomara Castro tomara posesión, estalló la violencia en el Congreso Nacional por una disputa entre dos facciones del partido por el control del poder legislativo. La violencia se extendió a los simpatizantes de ambas facciones que esperaban afuera y recibió cobertura en los medios de comunicación nacionales.

El equipo también se enteró del aumento del uso de las redes sociales para perpetrar agresivos ataques digitales contra mujeres de alto perfil, incluyendo políticas y periodistas. La circulación de fotos comprometedoras de mujeres en el espacio digital se está convirtiendo en una táctica más frecuente de abuso cibernético. Los encuestados destacaron que las agresiones contra las mujeres en los foros digitales eran especialmente gráficas y de carácter personal en comparación con las perpetradas contra los hombres.

La gente describió cómo no hay protección contra la violencia familiar y comunitaria para las poblaciones vulnerables. En general, las personas temen acudir a la policía o consideran que denunciar los actos de violencia es una pérdida de tiempo, y posiblemente incluso contraproducente. El equipo habló con mujeres que describieron cómo la policía suele intentar que la víctima retire los cargos contra el abusador, especialmente si se trata del cónyuge u otro miembro de la familia.

Aunque la HPN ha contratado a más mujeres, esto no significa automáticamente que la cobertura mejore. Por ejemplo, la comisaría de Gracias cubre 28 municipios. Aunque hay varias mujeres en servicio, todas se encuentran en la ciudad de Gracias porque ninguno de los otros municipios tiene instalaciones policiales, como zonas de descanso y baños separados, capaces de alojarlas.

El aumento de la violencia cibernética  
apunta a mujeres y niñas

Las redes sociales y WhatsApp se utilizan para borrar la credibilidad, señalar e intimidar a las periodistas. No se utiliza de la misma manera contra los hombres. El acoso a las mujeres es muy personal, manchando su imagen e invadiendo su vida personal. TikTok se usa para atacar e intimidar a las niñas.

Se utilizan Bots y cuentas falsas para hostigar y arruinar la reputación de las mujeres periodistas. Las tácticas utilizadas contra las mujeres son diferentes. A los hombres no se les ataca la imagen pública.

<sup>52</sup> Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras: Elecciones Generales 28 noviembre 2021.

En muchas comunidades remotas, no hay presencia de la policía ni del sistema judicial, y las víctimas tienen que pagar el transporte a otra ciudad para presentar una denuncia. Las que siguen adelante con una denuncia en las ciudades más grandes pueden tener acceso a un servicio integrado para sobrevivientes de la violencia de género, conocido como *Modelo de Atención Integral Especializado* (MAIE). Sin embargo, este servicio no existe en muchas partes del país. Además, según los encuestados, las herramientas del MAIE destinadas a evitar la revictimización, como el uso de la Cámara de Gesell<sup>53</sup>, no funcionan adecuadamente. Además de la desconfianza generalizada en la policía, el Ministerio Público y los tribunales, hay desincentivos sistemáticos para denunciar los actos de violencia.

#### Perspectivas Regionales: Normalización de la Violencia

En **Atlántida**, personas de Tela y La Ceiba describieron cómo las sobrevivientes de la violencia que se identifican como mujeres transgénero son especialmente vulnerables a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por la policía y el ejército.

El equipo escuchó que los sicarios están a la venta y activos en varias ciudades de **Olancho**, incluyendo Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.

En **Intibucá**, algunos describieron cómo la cosecha de café anual pone a las mujeres y a los niños en mayor riesgo de abuso. Cuando se cosecha el café, de octubre a mayo, los niños no van a la escuela. En su lugar, van con sus padres a recoger café. La gente viene desde lejos para trabajar, y muchos de ellos traen alcohol y drogas. En este entorno, el aumento de los niveles de violencia y la falta de protección hacen que los niños y las mujeres sean muy vulnerables a los abusos.

En **Colón**, la delincuencia es relativamente baja porque se mantiene controlada por las redes criminales. Sin embargo, las personas informaron que otros tipos de violencia, como la represión, los enfrentamientos armados y los asesinatos de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, se perciben como parte normal de la vida cotidiana.

En reacción a la violencia y al fracaso del sistema de justicia formal para protegerlos, los encuestados describieron cómo las comunidades se fragmentan más a medida que la gente trata de protegerse. Algunas personas optan por emigrar, y otras, ante el fracaso de los sistemas de justicia formales, adoptan otros enfoques para resolver las disputas fuera de los canales legales formales. Como resultado, no existe una demanda unificada de justicia y rendición de cuentas, lo que alimenta aún más la cultura de la impunidad y permite que la violencia generalizada continúe sin control.

En algunas comunidades existe la percepción de que la autoprotección es la única alternativa. Por ejemplo, en las comunidades garífunas el uso de juntas de seguridad comunales es una práctica generalizada. Estas juntas pretenden tanto abordar los problemas de seguridad de la comunidad de acuerdo con sus prácticas culturales como reemplazar la falta de presencia y capacidad de respuesta de la policía en estas zonas. Sin embargo, los encuestados compartieron que algunas de las juntas emplean la violencia para contrarrestar la violencia y/o situaciones de usurpación de tierras como medio de defensa. Otros señalaron que están dominados por los hombres y que no ofrecen apoyo, ni siquiera reconocimiento, a los problemas de GBV.

---

<sup>53</sup> Las Cámaras Gesell utilizan espejos unidireccionales y equipos audiovisuales para facilitar la documentación de los testimonios de sobrevivientes y testigos de delitos delicados como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual o la agresión sexual. Esto permite que los psicólogos y otras profesiones capacitadas brinden apoyo y minimicen la revictimización.

La violencia afecta prácticamente a todos los aspectos de la vida en muchos de los barrios y colonias más pobres de Tegucigalpa, que están muy disputados entre las distintas maras. Por ejemplo, los encuestados de un barrio explicaron que el toque de queda informal se había reducido de las siete a las cinco de la tarde debido a la creciente violencia. El toque de queda representa momentos en los que la gente se siente insegura al salir de sus casas o al caminar por las calles. En San Pedro Sula, los encuestados hablaron sobre cómo las personas ya no valoran la vida humana. Se puede matar a alguien por muy poco dinero, y posiblemente incluso para devolver un favor personal. Los homicidios se han convertido en algo tan rutinario que apenas llaman la atención.

#### Papel de los Sicarios

Si las personas no se caen bien, contratan a sicarios. Algunos son detenidos inicialmente por delitos, pero son liberados después de unos días.

Después de que el gobierno prohibiera que dos hombres viajaran juntos en moto en un intento de frenar los asesinatos, las mujeres de las maras están asumiendo cada vez más el papel de sicarias.

Aunque las maras no son tan frecuentes en el Occidente, los habitantes tanto de Gracias como de Santa Rosa de Copán señalaron que los centros de detención que albergan a las maras de otras ciudades están atrayendo una mayor presencia delictiva. Cuando los miembros de las maras son trasladados, sus familiares y socios criminales suelen trasladarse a la zona. Algunas personas correlacionan esta mayor presencia con un aumento de la violencia y sospechan que los miembros de las maras ordenan crímenes desde la cárcel. En algunos casos, el equipo se enteró de situaciones en las que los miembros de las maras habían entrado en una comunidad con la intención de tomar el control, y la comunidad se defendió con medios violentos.

En Olancho, la gente describió cómo la narco-cultura y la violencia se consideran cada vez más normales. Las redes criminales han asumido la responsabilidad de la seguridad en algunas zonas donde el Estado está ausente: por ejemplo, Trujillo en Colón. Se percibe que colaboran con la policía para controlar la delincuencia común, expulsar a las maras de la ciudad o matar a los miembros de las maras o a los delincuentes que puedan adentrarse en su territorio. En Occidente, el equipo escuchó casos de redes de delincuencia organizada, y a veces de las propias comunidades, que matan a personas identificadas como presuntos miembros de maras.

A lo largo de la recopilación de datos, el equipo escuchó con frecuencia la percepción de que la seguridad está empeorando. Los encuestados citaron varios factores que creen que están contribuyendo al aumento de la violencia, incluyendo las medidas del gobierno para desmilitarizar la seguridad mediante la transferencia de responsabilidades del ejército a la policía, por ejemplo, la supervisión de las prisiones y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP). Algunos señalaron que a pesar de que se habían transferido responsabilidades, no hubo una transferencia presupuestaria correspondiente a la policía para asumir estas nuevas obligaciones.

Muchos ven el posible regreso de los policías depurados como otro indicador de que la administración no está cumpliendo sus promesas electorales de reducir la corrupción. Algunos han sugerido que los policías retornados ya se dedican a la extorsión. Al mismo tiempo, la administración ha destituido a muchos policías, incluidos algunos oficiales de alto rango y con experiencia, que se consideraban vinculados a la última administración. Algunas personas expresaron su frustración por tener que forjar nuevas relaciones de trabajo con la policía, muchos de los cuales carecen de experiencia. Algunos consideran que las recientes acciones del gobierno indican que no serán tan duros con el crimen como lo fue la administración anterior y sugieren que un enfoque como el de *mano dura* de Nayib Bukele en El Salvador sería más efectivo.

El equipo también se enteró de cómo la violencia afecta a las economías y los negocios. Existe la percepción, sobre todo en las zonas urbanas, de que la extorsión está empeorando, obligando incluso a cerrar algunos pequeños negocios. Algunos señalaron que, en el pasado, sólo los negocios más grandes y exitosos eran objeto de extorsión, pero que ahora todos lo son. También atribuyen el aumento de la extorsión a la creciente fragmentación de las maras, por ejemplo, los Illuminati y la MI, que se separaron del Barrio 18. Ahora, en lugar de pagar la extorsión a un solo grupo, una empresa puede tener que pagar a varios grupos al mismo tiempo.

En el Occidente del país, si bien hay quejas sobre el aumento de la extorsión, parece tener menos impacto en el sector privado que en otras partes del país. En el Occidente, el equipo escuchó más sobre las economías que surgen en torno a la presencia de redes de criminales organizadas. Entre ellas se encuentra la demanda de servicios que estimulan los negocios y crean puestos de trabajo. En algunos casos, los empresarios se quejaron de que las empresas establecidas para el lavado de dinero socavaban sus negocios legítimos, pero aun así reconocieron las contribuciones de las empresas criminales organizadas al empleo y a la economía.

## DISPUTAS POR LA TIERRA

El equipo de evaluación descubrió que los conflictos en la intersección de la tierra, la política y las redes criminales son bombas de tiempo latentes.

La inseguridad y la disputa por la tierra surgieron como una dinámica central que contribuye tanto al conflicto social como a la violencia en todas las regiones incluidas en la evaluación. El equipo escuchó repetidamente cómo una historia de distribución desigual de las tierras productivas, la falta de respeto a los títulos colectivos y las incautaciones por parte de redes criminales organizadas hacen que las poblaciones indígenas y afrodescendientes y los campesinos se sientan despojados de sus tierras. Los conflictos por la tierra se manifiestan de forma diferente según el contexto y los actores implicados. En algunos casos, se trata de pueblos indígenas y tierras ancestrales, mientras que en otros se trata de una disputa entre comunidades agrícolas e intereses del sector privado sobre el uso productivo de la tierra, el manejo de los recursos naturales y los daños al medio ambiente.

Se observaron varios puntos en común, como los vínculos claros y generalizados entre la inseguridad de la tierra y la corrupción, la impunidad y la frecuente implicación de redes delictivas organizadas que buscan asegurar el acceso a los corredores de tráfico. Las redes criminales llevan años invadiendo los terrenos de la bioreserva de La Moskitia porque no hay presencia del Estado para detenerlas. Estos patrones se están reproduciendo en otras zonas, por ejemplo, a algunos Maya Chortí en Copán se les ha dicho que abandonen sus tierras o serán asesinados por grupos criminales organizados. En el Parque Nacional de Celaque, familias poderosas son propietarias de cafetales que operan en tierras protegidas propiedad del municipio.

En Honduras no hay tribunales dedicados a las disputas por la tierra. Como resultado, las comunidades, el gobierno y el sector privado presentan acciones administrativas y legales a nivel local, lo que abre oportunidades para la corrupción. Muchos encuestados señalaron la ausencia de mediadores imparciales con autoridad y credibilidad para arbitrar disputas. Además, algunos señalaron los obstáculos institucionales subyacentes a la resolución pacífica de conflictos, por ejemplo, la falta de transparencia en los procedimientos y registros de arbitraje. La necesidad de contar con mecanismos de disputa eficaces se ve acentuada por los enfrentamientos entre las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los intereses del sector privado. En algunos casos, los grupos delictivos organizados ofrecen precios superiores a los del mercado para comprar tierras o simplemente amenazan a los propietarios hasta que ceden su propiedad. En estas situaciones, los propietarios no tienen otro recurso

que marcharse. En Honduras, la titulación de la tierra es a menudo confusa. Algunos empresarios consideran que se les arrebató la tierra con la reforma agraria, y siguen reclamando los derechos sobre ella. En otros casos, los individuos que viven en tierras colectivas "venden" la tierra a otra persona, a pesar de que la venta de tierras colectivas está prohibida para ellos. Hay muchos incidentes registrados en los que existe la doble titulación.

Hay nueve pueblos culturalmente distintos que viven en Honduras, de los cuales siete son indígenas y dos son Afrodescendientes.<sup>54</sup> Se calcula que los pueblos Indígenas y Afrodescendientes representan alrededor del 8 por ciento de los más de 9 millones de habitantes del país. Aunque Honduras ha firmado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también conocido como ILO 169, el convenio rara vez se aplica, lo que genera desconfianza en el gobierno por parte de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y contribuye al conflicto. Una de las deficiencias más comunes es la falta de cumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC)<sup>55</sup> que se exige cuando se realizan proyectos en tierras Indígenas y Afrodescendientes.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresó su "profunda preocupación por el ambiente generalizado de violencia e impunidad que sufren muchas comunidades indígenas en el país". Observando que un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales, el Relator Especial de las Naciones Unidas dijo que "incluso en los casos en los que los pueblos indígenas tienen tierras tituladas, se ven amenazados por la superposición de demandas de terceros sobre tierras indígenas; para proyectos de desarrollo en los sectores de extracción y energía, ciudades modelo, turismo y áreas protegidas".

#### ILO 169: Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales

En 1994, Honduras firmó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como ILO 169. El convenio es el único instrumento legal que protege los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, en los 28 años transcurridos desde su firma, el convenio aún no ha sido aplicado de forma efectiva por el gobierno de Honduras.

Cada año, líderes indígenas y afrodescendientes son asesinados por defender sus tierras, muchos creen que con la complicidad del Estado.

Según la Ley de Concesiones, el Estado tiene la propiedad de los recursos en la tierra y puede otorgar concesiones a empresas sin el FPIC como ocurrió en Santa Bárbara con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y en Guapinol donde se permitió la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras. El equipo también tuvo conocimiento de casos en los que un alcalde o un *patronato* habían vendido ilegalmente terrenos y se habían quedado con las ganancias.

Durante su campaña, la presidenta Xiomara Castro prometió un enfoque más inclusivo para involucrar a las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la gobernanza. Ahora, las comunidades indígenas y afrodescendientes exigen que el gobierno restablezca los derechos de propiedad ancestrales de las tierras que actualmente son propiedad de poderosos individuos y empresas nacionales e internacionales. Cuando el equipo se reunió con personas y organizaciones que representaban a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ninguna de ellas consideró que hubiera recibido el nivel de respuesta esperado por parte del nuevo gobierno. Algunos especularon que, dado que el sector privado del norte es considerado

<sup>54</sup> Estos pueblos indígenas y afro-hondureños incluyen a personas pertenecientes a los grupos Miskito, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán. Los Afro-hondureños están formados por Garífunas y Negros de habla inglesa.

<sup>55</sup> Para más información sobre FPIC, véase: <https://www.fao.org/Indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/>

un importante aliado de la presidenta Xiomara Castro, es poco probable que actúe contra ellos en temas de tierra.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes y agricultores que hablaron con el equipo comprenden que el cambio lleva tiempo, pero muchos indicaron que 100 días son suficientes para demostrar la voluntad política de entablar un diálogo sobre sus demandas. Los Pech siguen esperando la respuesta del gobierno a sus peticiones de educación y servicios sanitarios en el contexto cultural, y existe la percepción de que el gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre su voluntad de apoyar la conservación de la tierra frente a la ganadería y la palma africana.

Percepciones de los Encuestados sobre las  
Disputas de Tierras:

*Los Maya Chortí no tienen ambiciones, sólo quieren conseguir comida para el día.*

*Las comunidades indígenas no están educadas. No tienen valores adecuados.*

*En la década de 1990, el gobierno entregó a los Maya Chortí una gran cantidad de tierras. Nunca aprendieron a cultivar la tierra, así que la alquilan. Tienen que aprender a trabajar, y la educación también es muy importante.*

*El gobierno da tierras a las poblaciones indígenas, pero luego se las venden a los cárteles.*

El conflicto por la tierra también debilita las estructuras comunales, la cultura y la identidad, dejando a las comunidades más fragmentadas y vulnerables. Por ejemplo, los Lenca, los Maya Chortí y los Miskito tienen múltiples organizaciones (seis, dos y dos respectivamente) que dicen representarlos. Estas organizaciones se han dividido por percepciones de corrupción o mala gestión y son incapaces de reunirse para formar una única voz para la comunidad. Las fuerzas de la comunidad, tanto las que están a favor como las que están en contra del desarrollo, son incapaces de unirse y resolver sus disputas.

En Occidente, el equipo escuchó repetidamente relatos expresados por poblaciones no indígenas que perpetúan e intentan racionalizar la situación actual. No era inusual escuchar a la gente de Copán hablar de cómo los Maya Chortí no

quieren trabajar la tierra, y que el gobierno ya les había dado algunas tierras a los Maya Chortí y la gente simplemente las vendió de nuevo, ya sea a redes criminales o a intereses privados. En Intibucá y Lempira, el equipo escuchó percepciones de que, como los Lenca son menos educados, no tienen valores adecuados.

Existe una desconfianza generalizada en la eficacia de los operadores de justicia a nivel local (policía, Ministerio Público y tribunales). Los encuestados señalaron que, en muchos casos, las autoridades locales no responden a las demandas judiciales. En otros, se dictan sentencias judiciales para desalojar a las personas o se realizan sobornos para obtener sentencias favorables. Sin poder ni influencia, las poblaciones indígenas y afrodescendientes y los campesinos han agotado sus opciones con el sistema formal de compensación. Sin opciones alternativas de justicia, la gente se da por vencida, lo que permite una mayor usurpación de tierras, u organiza protestas contra las empresas o el Estado, lo que divide aún más a las comunidades.

Las ONGs movilizan a las comunidades fracturadas que no pueden encontrar resoluciones formales y positivas a las disputas legales por la tierra, o buscan los recursos de las ONGs para la defensa y protestas, y otras acciones contra las empresas privadas y el Estado. Aunque muchas ONGs existen realmente para ofrecer apoyo, algunas personas plantearon la preocupación de que hay algunas ONGs que intentan manipular los proyectos de desarrollo negándose a participar en los esfuerzos de mediación o negociación,

o trasladando a los "partidarios" de un conflicto a otro para demostrar el apoyo popular.

Cuando el Estado o las empresas empiezan a sentirse amenazados por los esfuerzos de defensa de las ONG, pueden recurrir a la intimidación, los actos de violencia, el acoso a los miembros de la comunidad y los sobornos a los responsables de la toma de decisiones. Estas acciones atraen la atención de los medios de comunicación, que a menudo se centran en el sensacionalismo, y aumentan la atención sobre los problemas, politizando aún más las disputas sobre la propiedad de la tierra y profundizando la fragmentación de la comunidad. El aumento de la politización abre la puerta a más invasiones de tierras por parte de los que tienen el poder, o a la migración, y a más acciones legales para los que no lo tienen. Algunas comunidades indígenas y afrodescendientes, como los garífunas de San Juan, han elevado sus demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACHR). Históricamente, la IACHR ha fallado en contra del gobierno de Honduras, pero sus recomendaciones nunca se ponen en práctica, sirviendo como un incentivo perverso para una mayor invasión de tierras.

Algunos especulan que la ocupación de terrenos se ha convertido en una industria para oportunistas que buscan beneficios. Describieron cómo los individuos se instalan en un terreno cuando ven a alguien haciendo una inspección, en espera de obtener un pago de los promotores a medida que el proyecto avanza. El equipo escuchó de algunos encuestados que estas situaciones parecen estar aumentando tras la toma de posesión del nuevo gobierno, utilizando la bandera del partido LIBRE con el pretexto de la justicia social.

#### Percepciones del Sector Privado sobre las Disputas de Tierra:

*La dinámica es complicada. La gente está ocupando tierras y la policía no los desaloja por temor a ser acusados de abusos contra los derechos humanos. Las empresas tienen miedo de proteger sus propios activos.*

*La ONU tiene "guardianes" que protegen las invasiones de tierras en nombre de los derechos humanos. Cuando esto ocurre, las empresas tienen que contratar a abogados caros y asesores de derechos humanos para evitar ser acusadas de violación a los derechos humanos. Se está convirtiendo en algo sistemático en los sectores de la agroindustria y la minería.*

### Contexto Regional: Disputas por la Tierra

Las disputas por la tierra en **Atlántida** a menudo están vinculadas a los títulos ancestrales de tierras comunales de los afrodescendientes. Estos títulos suelen restringir la venta de tierras a miembros ajenos a la comunidad. Las disputas surgen cuando se presentan varios títulos de propiedad para el mismo terreno y cuando las municipalidades venden tierras a empresas turísticas. Algunos Maya Chortí están vendiendo sus tierras y emigrando, a pesar de que las tierras están bajo título comunal y no se puede vender legalmente.

Los encuestados de **Olancho** describieron diferentes niveles de disputa por las tierras ganaderas. Se percibe una creciente actividad de las redes del crimen organizado que compran tierras ganaderas para albergar aeródromos clandestinos. Al mismo tiempo, los ganaderos están invadiendo tierras forestales, la mayoría de las cuales son reservas naturales protegidas.

Cuando surgen proyectos de desarrollo, las municipalidades de **Intibucá** utilizan, al parecer, las reuniones del cabildo para presentar un proyecto a la comunidad con el fin de satisfacer los requisitos del FPIC. Esto no es suficiente para realizar las consultas exhaustivas que exige la ILO169, lo que da lugar a conflictos con las comunidades Lenca.

En **Choluteca**, el activismo cívico en torno a la tierra es un tema polémico. Muchas familias dependen de las oportunidades de empleo creadas por la minería y la agroindustria, y las comunidades están divididas sobre la mejor manera de responder a los daños (ambientales y sociales) creados por estas empresas.

En **Copán**, la presencia de redes criminales organizadas ha provocado un aumento de los precios de la tierra, especialmente en las zonas fronterizas, y una presión para que se venda. Si los propietarios se niegan a vender, son objeto de acoso e incluso pueden ser asesinados.

Conflictos en **Colón** están enfrentando a las comunidades campesinas contra las poderosas empresas de aceite de palma. Algunos encuestados describieron la complicidad de las instituciones de justicia y las fuerzas de seguridad con las empresas nacionales propiedad de prominentes familias adineradas, dejando a las organizaciones agrícolas lidiando con las consecuencias de la impunidad.

## **ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESCASEZ DE RECURSOS**

Honduras es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático. En las entrevistas, el equipo escuchó repetidamente la preocupación de que las catástrofes naturales y otros fenómenos meteorológicos, como las sequías y/o los huracanes recurrentes, podrían sobrepasar la capacidad de respuesta del gobierno. Las preocupaciones más frecuentes fueron la inminente inseguridad alimentaria y el temor a otro fenómeno meteorológico fuerte en las zonas más afectadas por Eta e Iota. Muchos de los recursos de reconstrucción prometidos por el gobierno nunca llegaron a la gente, y la infraestructura crítica de control de inundaciones necesita reparación con urgencia.

Al explorar las causas fundamentales de la migración, los investigadores están creando conciencia sobre los vínculos entre la migración, el cambio climático y la violencia. El análisis

### Migración, Clima, y Violencia

*Si un migrante climático decide emigrar al exterior en lugar de hacerlo al interior porque la migración interna es insegura, entonces la amenaza de la violencia, así como el cambio climático, son responsables de la decisión de emigrar.*

*Migración en Honduras: Cambio Climático, Violencia y Asistencia página 5*

estadístico indica que la reducción de las lluvias está asociada a un aumento de la emigración, y que este efecto se magnifica cuando los niveles de violencia son mayores. Durante la última década, Honduras ha sufrido repetidas sequías que han provocado un aumento en la inseguridad alimentaria, especialmente para los agricultores de subsistencia que viven en el Corredor Seco (región suroeste), con algunas zonas que experimentan más de un 70 por ciento de pérdida de cosecha anual.<sup>56</sup>

Percepciones de los Encuestados sobre el Acceso al Agua:

*El agua genera conflictos sociales porque se favorece a los ricos por encima de las necesidades de los pobres.*

*El agua es un gran problema y las municipalidades no saben cómo gestionar la situación.*

Los datos demuestran que existe una fuerte relación entre la disminución de las lluvias en un departamento y las detenciones de familias del mismo departamento en EE. UU. al año siguiente. Por lo tanto, la sequía prolongada en el Corredor Seco contribuye a aumentar las detenciones. Cuando las tasas de homicidio son más elevadas, la relación entre las lluvias y las detenciones es aún mayor, lo que pone en tela de juicio la idea de distinguir entre los migrantes que huyen de la violencia y los que se van a causa del cambio climático. La migración aumenta cuando aumentan los ingresos, sin embargo, en el caso de la sequía prolongada y recurrente en el Corredor Seco, un golpe (evento único) también puede desencadenar la migración.<sup>57</sup>

Los encuestados de todas las regiones destacaron la falta de preparación del GOH ante las catástrofes, lo que contribuye a la percepción de una mayor vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria y los futuros fenómenos meteorológicos. El cambio climático intensifica esta dinámica, y sus efectos contribuyen a las decisiones de emigrar y a aumentar el riesgo de conflicto social.

Además del estrés de la sequía, los fenómenos meteorológicos de 2020, Eta e Iota, dañaron gravemente la infraestructura y aumentaron la inseguridad alimentaria. En conjunto, causaron más de 10,000 millones de dólares en daños, mataron al menos a 98 personas y desplazaron a 175,000 más.<sup>58</sup> Según el Informe Gubernamental de Evaluación de Daños y Pérdidas de los Huracanes (2020), los pequeños agricultores sufrieron las mayores pérdidas en sus cultivos, concentrándose el 84 por ciento de las pérdidas en seis departamentos: Yoro, Cortés, Colón, El Paraíso, Choluteca y Atlántida. La economía nacional depende en gran medida de la agricultura y sus actividades conexas, que representan el 12.9 por ciento del PIB. La agricultura es una importante fuente de ingresos (35.6 por ciento del valor total de las exportaciones), de empleo y de alimentación para el 35 por ciento de la población económicamente activa, especialmente las poblaciones indígenas.<sup>59</sup> El equipo escuchó en repetidas ocasiones a los pequeños agricultores que, con el aumento de los costos de los fertilizantes y otros insumos, la agricultura ya no es viable. Muchos de estos agricultores son ahora consumidores en lugar de productores, lo que agrava la preocupación por la inminente inseguridad alimentaria.

El cambio climático también contribuye a la escasez de recursos. Por ejemplo, la irregularidad de las lluvias, combinada con la falta de capacidad de almacenamiento de agua en las comunidades, puede resultar en menos agua disponible para el uso de la comunidad y en el racionamiento de esta. Varias personas describieron cómo la mala gestión de recursos como el agua y la energía está provocando escasez y una

<sup>56</sup> Bermeo Sarah y Leblang David, Duke Sanford Center for International Development. Marzo 2021. "Honduras Migration: Climate Change, Violence, & Assistance."

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Scialla Mark. Octubre 27, 2021. "How Climate Change and Gang Violence Intersect in Honduras."

<sup>59</sup> Presencia Unitaria, UNAH (2021). "Tasa de pobreza en Honduras paso del 59.3 por ciento en el 2019 a 70 por ciento en el 2020, indica el Boletín Económico de la UNAH." <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/tasa-de-pobreza-en-honduras-paso-del-59-3-en-el-2019-a-70-en-el-2020-indica-boletin-economico-de-la-unah/>

distribución desigual. La mayoría de las personas atribuyen al menos parte de la culpa de estos fracasos a los funcionarios corruptos de todos los niveles y a la dinámica entre el gobierno y el sector privado que influye en el manejo de los recursos.

Honduras cuenta con abundantes recursos hídricos. La falta de planificación urbana ha llevado a ciudades como Tegucigalpa a plantearse un fuerte racionamiento de agua, lo que ha aumentado el coste de la vida y ha dado lugar a protestas. Contribuyendo a esta situación, el aumento de la deforestación en las zonas productoras de agua ha incrementado significativamente la erosión del suelo y la sedimentación de los ríos y arroyos ha secado a estos últimos, ha reducido la capacidad de almacenamiento de los embalses y ha reducido la biodiversidad.

Honduras cuenta con abundantes recursos forestales, con la mayor proporción de cobertura forestal de todos los países Centroamericanos. Sin embargo, los datos del Global Forest Watch (2021) estiman que, entre 2002 y 2020, el país perdió el 35 por ciento de sus bosques, recursos hídricos, agricultura de subsistencia y ecosistemas de selva tropical. La deforestación se potencia por la conversión de los bosques, los incendios forestales, la recogida de leña y la tala ilegal. Los miembros de los movimientos ecologistas han sido amenazados, intimidados y asesinados por hacer campaña contra la deforestación.<sup>60</sup>

#### Contexto regional: Mala gestión de las catástrofes y de los recursos

El departamento de **Choluteca** depende en gran medida de la agricultura. La gente explicó que, aunque hay suficiente agua, la distribución favorece en gran medida los intereses del sector privado (producción) a expensas del consumo humano. Proyectan que las sequías continuarán, impulsando una mayor migración.

Los efectos de Eta e Iota todavía se sienten en **Cortés**. En algunas zonas, la gente no ha regresado a sus casas, y los encuestados expresaron su preocupación por que la infraestructura que mitiga los daños de las inundaciones necesita reparaciones críticas.

**Olancho** sufre un acceso irregular a la energía. El departamento se abastece de energía de la presa hidroeléctrica Patuca III, pero algunos encuestados expresaron su temor de que el cambio climático y la tala ilegal afecten aún más a las cuencas hidrográficas y al acceso a la energía. Aunque gran parte de Olancho es rural, en las zonas urbanas la falta de acceso al agua ejerce presión sobre los funcionarios locales y contribuye a los conflictos.

**Tegucigalpa** se enfrenta a muchos peligros naturales, pero lo que más preocupa a los encuestados es la incapacidad del gobierno local para gestionar la distribución del agua en la ciudad.

En **Gracias a Dios**, Eta e Iota destacaron la falta de presencia, capacidad y apoyo del Estado en La Moskitia. Al parecer, este vacío lo llenaron las organizaciones comunitarias, la comunidad internacional y, en algunos casos, las redes de crimen organizado, que, a cambio de un precio, ayudaron a prestar servicios de transporte básico a los miembros de la comunidad que lo necesitaban.

En **Lempira, Intibucá y Copán**, muchas personas que hablaron con el equipo describieron cómo habían tenido que dejar de cultivar debido al alto precio de los fertilizantes y otros insumos y a la inminente inseguridad alimentaria prevista en Occidente.

<sup>60</sup> USAID (2021). LandLinks: Country Profiles, Honduras. <https://land-links.org/country-profile/honduras/>

## CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO

El informe anual de ACNUR de 2020 destacó que "tras la crisis electoral de 2017 y el posterior conflicto social, la Oficina del Alto Comisionado observó una progresiva reducción del espacio cívico en Honduras. Esta tendencia continuó, agudizada por la pandemia del COVID-19 y la correspondiente restricción de varios derechos, especialmente la libertad de movimiento" (ACNUR, 2021). En octubre de 2021, a sólo un mes de las elecciones generales, el Congreso aprobó reformas que criminalizan la protesta social, y desalientan las manifestaciones limitando las libertades básicas de reunión, asociación y circulación. También modificaron la ley de lavado de dinero, debilitando la capacidad del Ministerio Público para investigar la corrupción.<sup>61</sup> Los empleados de los medios de comunicación y los periodistas que informan sobre la corrupción y la delincuencia suelen ser censurados o atacados, lo que lleva a muchos a la autocensura por temor.<sup>62</sup>

Sólo en enero de 2022, tres defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras. Entre ellos, Pablo Isabel Hernández, líder indígena de la comunidad Lenca y defensor del medio ambiente que vivía en San Marcos de Caiquín, Departamento de Lempira; Thalía Rodríguez, defensora de los derechos humanos de las personas transgénero, asesinada en Tegucigalpa; y Melvin Geovany Mejía, miembro de la Comunidad Indígena Tolupán y defensor del territorio, hallado muerto en Morazán, Departamento de Yoro.<sup>63</sup> Según Global Witness, Honduras es el segundo país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.<sup>64</sup>

En el país, existe una percepción generalizada de que es peligroso ser periodista de investigación, activista de derechos humanos o defensor del medio ambiente. También se percibe que hablar en contra del gobierno o del partido LIBRE no es muy tolerado. Las personas describieron el Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, como algo que no funciona, lo que hace que las personas bajo amenaza no tengan acceso a una efectiva protección o recurso.

Los encuestados hablaron de cómo los medios de comunicación se han visto limitados en su cobertura del nuevo gobierno. Las voces que antes eran críticas son ahora parte del gobierno y han permanecido en gran medida en silencio. Algunos señalaron el enfoque del gobierno de adjudicar selectivamente la publicidad a ciertos medios de comunicación como una forma de negociar y controlar las voces de la prensa. Muchos de los que se pronuncian, sobre todo en cuestiones de corrupción, crimen organizado y otros temas delicados, temen por su seguridad y la de sus familias, lo que lleva a algunos a abandonar el país. Esto es especialmente cierto para los periodistas que viven y trabajan en áreas fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde no tienen acceso a los sistemas de alerta temprana y otros recursos de protección.

Asimismo, el equipo escuchó especulaciones de que las organizaciones de la sociedad civil han permanecido en gran parte silenciosas porque pasaron de ser voces de oposición bajo la administración anterior a ser voces de apoyo al gobierno actual. Algunos activistas de la sociedad civil han sido contratados directamente por el gobierno. Por ello, la sociedad civil ha dejado de enfrentarse en gran medida a las acciones y decisiones del gobierno y del partido LIBRE.

---

<sup>61</sup> Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Honduras: Elecciones Generales 28 noviembre 2021.

<sup>62</sup> Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. 2021. "Global Organized Crime Index 2021"

<sup>63</sup> Amnistía Internacional. Febrero 2022. "Americas: Amnesty International Sounds Alert Over Killings of Human Rights Defenders and Journalists in First Month of 2022."

<sup>64</sup> Global Witness. Septiembre 2021. "Last Line of Defense"

Al mismo tiempo, las ONGs se enfrentan cada vez más a limitaciones que van desde la legislación restrictiva propuesta hasta la disminución de los recursos humanos y financieros, ya que donantes como la UE, los suizos y los alemanes abandonan Honduras.

#### Perspectivas Regionales: Cierre del espacio cívico

En **Olancho**, el equipo escuchó sobre periodistas que cubren negocios ilícitos, como la tala de árboles o el narcotráfico, que son amenazados o incluso asesinados. Un ejemplo es el asesinato del periodista Pedro Arangel Canelas en Dulce Nombre de Culmí. Dos años después, todavía no hay ningún individuo u organización que haya sido acusado de su muerte.

La comunidad LGBTQI+ en Occidente es invisible. En las entrevistas realizadas en **Intibucá, Copán y Lempira**, unas pocas personas reconocieron que las personas LGBTQI+ existen, y que a menudo están expuestas a la violencia. La mayoría, sin embargo, se mostró firme en su afirmación de que no existía una comunidad LGBTQI+, y lo atribuyó a las normas sociales "conservadoras" de Occidente. Para protegerse, las personas LGBTQI+ se esconden, se trasladan a ciudades más grandes o emigran; algunas se suicidan.

En **Cortés**, el equipo se encontró con la percepción general de que los medios de comunicación independientes son cada vez más escasos. La mayor parte de los medios de comunicación que estaban en la oposición son ahora pro-gobierno, con algunos periodistas y personas influyentes que aceptan cargos en puestos públicos. Como resultado, los controles y contrapesos en la administración han disminuido.

Las personas que hablaron con el equipo en **Lempira** explicaron que la violencia suele estar vinculada a las disputas por la tierra. Citaron el asesinato del líder indígena y activista de los derechos humanos Pablo Hernández, que recibió nueve disparos en San Marcos de Caiquín. Nadie ha sido acusado del asesinato y algunos sospechan que fue ultimado por sicarios.

En **Tegucigalpa**, el equipo escuchó la percepción de que el nuevo gobierno está tratando cada vez más de marginar a la sociedad civil; esto es supuestamente un intento de crear relaciones directas con la población en general.

### **JÓVENES PRIVADOS DE SUS DERECHOS**

Los jóvenes salieron a votar en las últimas elecciones, eligiendo trabajar dentro del sistema para promover el cambio. A pesar de ello, muchos jóvenes hondureños sienten que el sistema les ha fallado. La mayoría de los jóvenes que se reunieron con el equipo describieron las dificultades para acceder a la educación y a las oportunidades de trabajo. Dado el estancamiento económico y la falta de puestos de trabajo disponibles, algunos encuestados indicaron que la migración continuará sin cesar. Otros encuestados creen que hay más jóvenes y desempleados que recurren a la economía ilegal para ganarse la vida.

Los jóvenes describieron las barreras para acceder a la educación, incluyendo la imposibilidad de cruzar las fronteras invisibles de las maras en San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, y la limitada disponibilidad de escuelas a nivel local. En muchos departamentos de Occidente, como Intibucá y Copán, la educación suele detenerse en sexto o noveno grado. Los niños que desean continuar sus estudios deben dejar a sus familias y comunidades para viajar a escuelas secundarias en otros lugares del departamento. Los encuestados indígenas y afrodescendientes describieron cómo la educación carece de aplicabilidad cultural y lingüística para los niños y jóvenes de sus comunidades

Los trabajos en el sector formal son muy difíciles de conseguir para los jóvenes. Los jóvenes que hablaron con el equipo indicaron que incluso los que tienen un título universitario tienen dificultades para encontrar trabajo. Varios contaron historias sobre la solicitud de empleo y la primera pregunta que se les hizo fue: "¿Por cuál partido votaste?". Muchos señalaron que los empleadores quieren experiencia antes de contratar, lo que crea un círculo vicioso para los jóvenes que buscan trabajo por primera vez. Al mismo tiempo, el equipo escuchó a algunos representantes del sector privado decir que no podían encontrar mano de obra calificada para cubrir los puestos vacantes, y algunos incluso describieron la percepción de la falta de capital humano en Honduras como un impedimento para la inversión extranjera. Esto llevó a algunos jóvenes y encuestados del sector privado a señalar un aparente desajuste entre las competencias laborales que se ofrecen a los jóvenes hondureños y las necesidades de los empleadores.

Los jóvenes luchan por sobrevivir (satisfacer sus necesidades sociales, físicas y económicas básicas) y alcanzar sus aspiraciones. Los jóvenes cuyos padres han emigrado pueden tener responsabilidades de cuidado de niños y ancianos que hacen que seguir una educación o una carrera sea aún más desafiante. La escasa supervisión de los jóvenes en los casos de migración, la GBV y la exclusión generalizada de los servicios básicos, incluida la salud sexual y reproductiva, contribuyen al aumento de las tasas de embarazo precoz. El equipo se enteró de casos en los que adolescentes menores de edad embarazadas evitan buscar atención médica y se niegan a dar a luz en un hospital, lo que a veces conduce a complicaciones fatales. Esperan que, al no acudir al sistema médico, puedan evitar participar en una investigación obligatoria sobre violencia sexual.

Aunque muchas comunidades indígenas y afrodescendientes practican la agricultura de subsistencia, a los jóvenes les resulta difícil acceder a la tierra. Incluso cuando pueden hacerlo, el equipo supo de jóvenes Pech, Lenca y Garífuna que ya no quieren cultivar. Prefieren unos ingresos más estables, lo que lleva a muchos a emigrar a zonas urbanas o a abandonar el país. Los jóvenes indígenas y afrodescendientes suelen ser estigmatizados, y algunos encuestados los describen como delincuentes, vagos o incultos.

#### Perspectivas de los jóvenes encuestados:

*Solo se necesita ser joven para ser asesinado en este país.*

*Con demasiada frecuencia se demoniza a los jóvenes como delincuentes o como la causa de la creciente violencia.*

*Los políticos no van a mejorar este país.*

*Los parques creados bajo la última administración ya no son seguros. Es un incumplimiento del contrato social, que el Estado no pueda asegurar estos espacios.*

*Las ciudades del Occidente tienen una forma de pensar tradicional que no permite la educación sexual y discrimina a los LGBTQI+. Los jóvenes no encuentran esta educación en las escuelas, en la iglesia o en sus hogares.*

Aunque muchos jóvenes siguen siendo resilientes en condiciones de adversidad, al enfrentarse a un entorno inseguro y a la falta de educación y oportunidades de trabajo lícito, muchos jóvenes recurren a la migración, a la economía ilegal o a la economía informal. Como las opciones lícitas no proporcionan la seguridad social, física y económica que los jóvenes buscan, y después de hacer repetidos intentos de acceder a los servicios, esto acaba provocando un mayor sentimiento de frustración, injusticia e impotencia. Esto hace que algunos pierdan la esperanza y se desvinculen de los sistemas políticos, sociales y económicos formales. Pueden recurrir a comportamientos violentos y de riesgo que conducen a la estigmatización, la criminalización y la victimización. Existe la percepción de que, al igual que en el resto de la población, el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes va en aumento.

Estas dinámicas de exclusión permiten a los actores violentos involucrar a los jóvenes descontentos, degradando aún más su seguridad física, emocional y económica. Esto perpetúa la exclusión de los jóvenes

de los servicios básicos, el empleo, la tierra y la justicia, y aumenta la creencia de los jóvenes de que el Estado les ha fallado.

### Contexto Regional: Los Jóvenes

**Tegucigalpa** ofrece pocas opciones de empleo para los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico. Los jóvenes con estudios rara vez encuentran oportunidades de trabajo para aplicar su educación de manera significativa. Los jóvenes de los barrios pobres y de alta criminalidad se enfrentan a la estigmatización por parte de los empleadores, que temen que la contratación de estos jóvenes aumente el riesgo de ser objeto de extorsión.

Los altos niveles de estigmatización y criminalización de los jóvenes Pech dificultan la obtención de un empleo en Trujillo, **Colón**, y contribuyen a la decisión de muchos jóvenes de emigrar.

En lugar de estar en la escuela, el equipo observó a muchos niños Maya Chortí, en su mayoría niñas, deambulando por las calles de **Copán Ruinas** y entrando en hoteles y restaurantes para vender a los turistas muñecas de tuza y collares de semillas hechos por sus madres. Al no poder vender sus artesanías al precio que se pide, ofrecen un descuento y cantan el himno nacional hondureño en Maya Chortí. Además de faltar a la escuela, estos niños corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas y de otros abusos.

En **Atlántida**, los jóvenes que viven en zonas periurbanas controladas por las maras son objeto de discriminación por parte de los empleadores y de criminalización por parte de la policía. Al mismo tiempo, en sus barrios, los niños y jóvenes son reclutados activamente por las maras y las organizaciones criminales. Impulsados por la desesperación o bajo la amenaza de que ellos o sus familias sean asesinados, los jóvenes no tienen más remedio que unirse.

### **TENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO-PRIVADO**

El sector privado, en particular las empresas internacionales y las grandes empresas nacionales propiedad de la pequeña pero poderosa élite del país está estrechamente relacionado con JOH y el Partido Nacional. El partido LIBRE y la administración actual aprovecharon con éxito las percepciones de explotación del sector privado y el interés propio para obtener apoyo durante la campaña. Muchos encuestados del sector privado señalaron la inexperiencia del nuevo gobierno y la percepción de que el partido LIBRE está fomentando discursos polarizadores y contrarios al sector privado. Esto contribuye a crear una gran incertidumbre, y algunos encuestados del sector privado dijeron al equipo que los inversionistas están aplazando sus inversiones para ver qué sucede. Otros han declarado su intención de llevar sus inversiones a otra parte de la región.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Castro para ejercer un mayor control sobre el sector privado están contribuyendo a crear incertidumbre en el clima de inversiones y negocios del país. Ejemplos de acciones del nuevo gobierno que han frenado las inversiones son la derogación de la Ley de Salarios por Hora, la prohibición de nuevas ZEDEs y la posible nacionalización del sector energético. Sin embargo, fuera del sector privado, muchos encuestados mencionaron la derogación del salario por hora y la legislación de las ZEDEs como medidas positivas adoptadas por el Gobierno para cumplir sus promesas electorales.

Estas decisiones políticas destinadas a regular la distribución desigual del capital están exacerbando las tensiones entre el sector público y el privado. En algunos casos, las medidas adoptadas en nombre de la

protección de los trabajadores, tales como la eliminación de la ley sobre el salario por hora, han tenido consecuencias no deseadas, por ejemplo, haciendo que los empresarios eliminen puestos de trabajo a tiempo parcial y empujando a los trabajadores por hora a la economía informal, donde tienen aún menos protecciones.

Con una retórica cada vez más polarizadora y medidas adoptadas para frenar al sector privado, los inversionistas son más cautelosos y las empresas se enfrentan a un entorno cada vez más restringido. Si la relación se deteriora, el gobierno de Honduras corre el riesgo de perder inversiones, reduciendo así la creación de empleo, y potencialmente estimulando flujos de migración aún mayores. Las acciones del gobierno, como los esfuerzos por nacionalizar el sector de la energía, pueden aumentar los choques de precios y contribuir a la quiebra de empresas. La energía ya es inestable, y los encuestados predicen que, si el gobierno se hace cargo del sector energético, el suministro de energía empeorará. Aunque la violencia generalizada como resultado de estas tensiones no es inminente, sus repercusiones prometen contribuir a expresiones más amplias de conflicto social y polarización.

#### La extorsión paraliza el Sector Transporte

Las maras utilizan la extorsión y la intimidación para reducir la competencia en el sector del transporte de Tegucigalpa. La gente explicó que era fácil detectar los autobuses operados por las maras porque no tienen marcas de quemaduras de intentos de extorsión, no hay señales ni rutas publicadas y los autobuses suelen ser microbuses de 15 pasajeros. Las maras también utilizan los mototaxis como intermediarios de los narcotraficantes y la policía.

La extorsión está teniendo un efecto paralizante en las empresas. Prácticamente todos los que se reunieron con el equipo coincidieron en que la extorsión por parte de las maras y los grupos delictivos organizados está aumentando, y en algunos casos obliga a las empresas a cerrar. Aunque los encuestados de Occidente coinciden en que la extorsión está empeorando, las empresas de esta zona parecen ser menos vulnerables que las de otras regiones visitadas por el equipo.

La percepción de que la extorsión es peor bajo la nueva administración también socava las relaciones entre el sector público y el privado y afecta al crecimiento económico. En base a las conversaciones con la comunidad empresarial, todavía no han encontrado un medio eficaz para combatir la extorsión y no les queda otra opción que pagar o cerrar su negocio. El equipo también tuvo conocimiento de casos en los que las maras y el crimen organizado establecieron negocios para el lavado de dinero. En algunos casos, amenazan a los negocios legítimos para reducir la competencia, por ejemplo, quemando autobuses, y en otros casos fijan precios tan bajos que el sector privado no puede competir y tiene que cerrar negocios.

A medida que la inversión se reduce debido a la extorsión o a la incertidumbre, la economía se vuelve más restringida, lo que contribuye a la frustración en el sector privado y repercute en los costes de los servicios y limita la creación de empleo. La falta de ingresos fiscales reduce la capacidad del gobierno para pagar a los empleados y prestar servicios, lo que aumenta la percepción de falta de compromiso por parte de los actores gubernamentales a todos los niveles. El sector privado, representado por las cámaras de comercio y las asociaciones industriales, quiere dialogar con el gobierno y ha ofrecido propuestas de cambio concreto. Sin embargo, según la información de los encuestados, el gobierno parece no estar dispuesto a reunirse con los empresarios y escuchar sus preocupaciones.

Para hacer oír su voz, el sector del transporte y los empleados públicos salen a la calle a protestar. Algunas de estas protestas, como el bloqueo de carreteras, están teniendo un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos. El gobierno no ha reprimido violentamente a los manifestantes, y las protestas sirven de válvula de escape. Al mismo tiempo, el gobierno está optando por negociar individualmente con

diferentes sectores, lo que fragmenta aún más la voz del sector empresarial. Las narraciones en los medios de comunicación tradicionales y sociales procedentes del gobierno y del partido LIBRE siguen satanizando al sector privado. Esta narrativa, combinada con la falta de respuesta del gobierno a las invitaciones al diálogo, profundiza aún más la desconfianza entre los sectores público y privado.

La polarización del país según las líneas de los partidos políticos disminuye el espacio para la colaboración. Los encuestados destacaron la necesidad urgente de encontrar un camino que equilibre el deseo del gobierno de que el sector privado rinda cuentas sin restringir excesivamente el mercado. Si bien esta dinámica repercute en el crecimiento económico, estas divisiones entre el sector público y el privado también tienen un impacto en la cohesión social y la buena gobernanza. Las alianzas entre el sector público y el privado tienen el potencial de avanzar en la lucha contra la corrupción, la adhesión a las mejores prácticas internacionales de derechos humanos en la consulta comunitaria, y la mediación pacífica de las disputas con sectores de la economía hondureña como el transporte, la energía y el sector lechero, todos ellos involucrados en las recientes protestas.

Los encuestados del sector privado señalaron que un entorno empresarial sólido puede servir como medio de rendición de cuentas del gobierno y proporcionar beneficios sociales en las comunidades en las que trabajan. Las innovaciones del sector privado, si se comprometen de forma constructiva, pueden ayudar a los gobiernos a superar desafíos apremiantes como la transparencia y la corrupción. Las ZEDEs fueron muy criticadas por las voces de la oposición durante el anterior gobierno y durante la campaña de 2021; en consecuencia, el Gobierno de Castro actuó inmediatamente para derogar la ley de ZEDEs. Algunas personas describieron las oportunidades de adoptar tecnologías utilizadas por las empresas en las ZEDEs. Estas tecnologías tienen el potencial de ayudar al gobierno a brindar más transparencia y responsabilidad en los procesos de contratación, disminuyendo las oportunidades de corrupción.

#### Perspectivas de los encuestados sobre el sector privado

*Hay una campaña sistemática de los funcionarios de Libre para estigmatizar al sector privado. Algunos funcionarios están atacando a las empresas utilizando las redes sociales. Intentan establecer el sector privado como el enemigo común.*

#### Contexto Regional: Crecientes tensiones entre el sector público-privado

En **Tegucigalpa**, los propietarios de pequeñas empresas y los inversionistas potenciales mencionaron la incertidumbre del entorno empresarial y la creciente hostilidad como razones para llevar sus inversiones más grandes a Guatemala y a Estados Unidos en lugar de invertir en el país. Incluso las empresas que desean contribuir a la responsabilidad social se han encontrado con que el gobierno no está dispuesto a comprometerse con ellos de forma constructiva.

**Olancho** sufre un acceso limitado e inconsistente a la energía. El nuevo gobierno amenaza con nacionalizar y renegociar las condiciones que rigen el sector energético. Los encuestados consideran que esto es especialmente preocupante por las posibles repercusiones en las empresas locales si la energía se vuelve menos fiable y los costes aumentan. Los que no puedan permitirse el aumento de los precios probablemente recurrirán a la madera para obtener energía.

En **Cortés**, particularmente en San Pedro Sula, el sector privado es fuerte y altamente organizado. Apoyan al nuevo gobierno y están dispuestos a trabajar en colaboración, pero el sector privado está cada vez más preocupado por la capacidad del gobierno de crear consenso. Recientemente, el sector privado que representa a diferentes industrias, que tradicionalmente no han trabajado juntas, se está uniendo a las cámaras de comercio para presentar un conjunto concreto de recomendaciones y prioridades.

En **Copán**, existe una fuerte demanda de apoyo gubernamental a los pequeños productores agrícolas mediante el suministro de insumos para la producción. Los encuestados prevén que, si no se apoya la producción de cultivos, es probable que haya escasez de alimentos en los próximos meses.

## FACTORES DE MITIGACIÓN

Los factores mitigantes son elementos que tienen el potencial de reducir la probabilidad de que se produzca la violencia y el conflicto violento. No siempre son elementos que favorecen la paz, sino que amortiguan la violencia. El equipo identificó varios factores atenuantes que deberían ser objeto de seguimiento para el cambio.

### MIGRACIÓN Y REMESAS

Ante las escasas oportunidades de empleo lícito, muchas personas optan por emigrar de las zonas rurales a las grandes ciudades o por abandonar el país. Las remesas que los emigrantes envían a casa alivian la presión sobre el gobierno para proporcionar bienes y servicios básicos. Dado que las remesas representan el 25 por ciento del PIB de Honduras (aproximadamente 5,400 millones de dólares), parece haber pocos incentivos para que el gobierno hondureño reduzca la migración irregular. En la actualidad, la migración y las remesas que regresan a Honduras sirven de válvula de escape que evita el conflicto y alivia las demandas al GOH para que brinde servicios básicos.

Las remesas también mitigan la devaluación de la moneda para los hondureños más pobres. Durante la pandemia, la clase media se redujo y la pobreza aumentó. Las remesas ofrecieron un colchón a las familias que vivían en la pobreza.

### ESPERANZA – PERO NO PARA SIEMPRE

Los hondureños votaron en cifras récord en las elecciones de 2021, con un 68 por ciento de la población acudiendo a las urnas. La elección fue un claro voto por el cambio y una demostración de que muchos hondureños todavía tienen cierto grado de fe en el proceso electoral. Según las promesas de campaña, las expectativas sobre el nuevo gobierno son muy altas. Aunque muchas personas dijeron al equipo de evaluación que 100 días no son suficientes para determinar si el país cambiará, la mayoría expresó su preocupación de que el gobierno no estaba tomando medidas claras para cumplir sus promesas. Los temas que más se plantearon fueron la Ley de Amnistía, el nepotismo y la inexperiencia en los cargos políticos. Otros señalaron que algunas promesas electorales se están cumpliendo, por ejemplo, la derogación de las ZEDES<sup>65</sup> y la ley del salario por hora. Las comunidades indígenas y afrodescendientes expresaron su esperanza de que el Gobierno de Castro cumpla sus promesas de inclusión social tras décadas de marginación.

El equipo escuchó repetidamente que la gente sigue esperando un cambio bajo el nuevo gobierno, pero quiere verlo pronto. Hay una oportunidad para que el gobierno señale claramente hacia dónde se dirige, y para que la presidenta Castro demuestre su liderazgo y autoridad, calmando las preocupaciones de que su marido, Manuel Zelaya, es quien tiene el control. Sin embargo, los encuestados tenían muy claro que esta ventana de esperanza no permanecerá abierta para siempre. Muchos sugirieron que, si los cambios prometidos no se materializan en un año, la gente saldrá a la calle con algunos ofreciendo plazos aún más

---

<sup>65</sup> Las ZEDES son zonas económicas especiales que otorgan a los administradores de zona la libertad de adoptar sus propios sistemas tributarios y regímenes legales, sujetos a la supervisión de un comité nacional. Han sido ampliamente atacados como una amenaza a la soberanía hondureña.

cortos. La duración de la esperanza como factor atenuante depende en gran medida de la capacidad del gobierno para demostrar medidas concretas para cumplir sus promesas de campaña y mejorar las condiciones de vida.

### **MANIFESTACIÓN SIN REPRESIÓN**

El nuevo gobierno ha permitido, y algunos creen que incluso ha alentado, que la gente salga a la calle y proteste. Por ahora, las fuerzas de seguridad no están utilizando técnicas de mano dura para sofocar las manifestaciones, lo que ofrece una válvula de escape y la oportunidad de que la gente haga oír su voz.

### **MARAS (PANDILLAS)**

Si bien las maras surgieron claramente como perpetradoras de violencia, algunas, como la MS-13, también pueden desempeñar una función mediadora en las zonas que controlan. Las maras a menudo quieren evitar actos manifiestos de violencia que atraigan la atención de la policía hacia ellas.

### **EVITAR EL LENGUAJE INCENDIARIO**

El equipo se enteró de algunos medios de comunicación que se esforzaban por evitar un lenguaje específicamente incendiario. Además, personas y medios de comunicación que eran voces de la oposición bajo el gobierno anterior, ahora forman parte del nuevo gobierno, reduciendo las voces críticas.

## **TRAYECTORIAS**

Según los datos recopilados por el equipo, hay algunas dinámicas que tienen el potencial de convertirse en actos de violencia y conflicto específicos o generalizados. Otras dinámicas de conflicto y violencia seguirán existiendo, pero no es probable que conduzcan inmediatamente a actos de violencia generalizados. La escalada incesante de violencia en las familias y comunidades es un problema crónico que se manifiesta en actos de violencia a menor escala, como los abusos domésticos, la extorsión, la violencia sexual, los ataques a poblaciones vulnerables y asesinatos. El resultado es la normalización de la violencia y su aceptación como forma de interacción dentro de las familias y las comunidades, lo que conduce a muchas muertes y lesiones innecesarias.

Una evaluación del conflicto representa una instantánea en el tiempo. Las trayectorias representan la forma en que el equipo prevé que se desarrollará la dinámica del conflicto, la violencia y la paz en el futuro. Las trayectorias incluyen tanto las tendencias como los posibles desencadenantes, que son acontecimientos que pueden avivar los agravios y desencadenar conflictos, o abrir oportunidades para reducir la violencia y los conflictos. Los desencadenantes que se enumeran a continuación representan las posibilidades identificadas por el equipo de evaluación. Los desencadenantes suelen ser difíciles de predecir, y pueden surgir otros desencadenantes imprevistos.

***Trayectoria: El empeoramiento de la polarización ideológica podría convertirse en actos de violencia localizados o generalizados***

Tendencia: Aumento de la polarización política y estigmatización, o incluso criminalización, de las personas y organizaciones que no están de acuerdo con el gobierno de Castro.

Muchos encuestados señalaron la percepción de un aumento de los ciclos de polarización política bajo el nuevo gobierno. Ofrecieron ejemplos de representantes del gobierno y del partido LIBRE que utilizan públicamente un lenguaje altamente divisivo en sus discursos y en las redes sociales. Entre los ejemplos se incluye el calificar de "traidores" a los miembros del partido LIBRE que no votaron por Redondo en el

Congreso Nacional y la intensificación de la retórica hostil contra los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector privado.

La preocupación más frecuente fue la percepción de que este gobierno considera que todo lo anterior es malo, que hay que desechar o criminalizar. Los ejemplos que alimentan este sentimiento incluyen los juicios y extradiciones de miembros corruptos del Partido Nacional, mientras protegen a miembros del partido LIBRE de cargos similares con la aprobación de la Ley de Amnistía.

Desencadenantes potenciales (en secuencia): Desencadenantes potenciales (en secuencia): Estos desencadenantes se consideran acumulativos. Si bien los dos primeros por sí solos probablemente no sean suficientes para desencadenar protestas y violencia en todo el país, el equipo escuchó la preocupación de varias personas de que al permitir que las protestas continúen sin control puede ser el enfoque del gobierno para crear una excusa para la represión y la suspensión de la constitución.

- Particularmente en las áreas urbanas más grandes, la gente está pendiente de las **próximas elecciones para la Corte Suprema, que comienzan en julio, y para el Fiscal General en mayo de 2023**. Los encuestados indicaron que estas elecciones se consideran una prueba de fuego, especialmente en las zonas urbanas, para el gobierno y el compromiso del partido LIBRE con la rendición de cuentas y la transparencia. Las irregularidades percibidas o la interferencia en estas elecciones pueden desencadenar protestas, especialmente en zonas aledañas a la capital y los centros urbanos, erosionando la confianza en el gobierno.
- Si la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) no viene o se percibe como comprometida, podría generar protestas en las zonas urbanas. Como parte de sus promesas de campaña, la presidenta Xiomara Castro prometió trabajar con la ONU para recrear una comisión internacional para investigar la corrupción y la impunidad - similar a la MACCIH, que terminó en 2020. Algunos encuestados expresaron su preocupación por que la solicitud de la CICIH enviada a la ONU no ha sido publicada, lo que les lleva a creer que la solicitud se enmarca de manera que podría comprometer el alcance y la independencia de la comisión, por ejemplo, limitando las investigaciones de corrupción a la última administración

Muchas de las personas que se reunieron con el equipo se preguntaron cuándo se pondría en marcha la CICIH, y algunos sospechan que tal vez nunca se creará. Se especula que el gobierno puede estar ya controlando los daños para apaciguar a los partidarios de la CICIH en el caso de que no haya CICIH, por ejemplo, el reciente fortalecimiento de UFERCO para demostrar la voluntad política de combatir la corrupción internamente.

- **Si el gobierno convoca un referéndum para crear una nueva constitución** – A diferencia de los desencadenantes mencionados anteriormente, la sospecha de que el gobierno no este reprimiendo las protestas con el fin de engendrar suficiente caos para justificar una represión y suspender la constitución fue identificada por muchos como un punto de inflexión en el que las protestas contra el gobierno podrían tornarse violentas.

Tendencia: Narrativas del gobierno y del partido LIBRE que vilipendian al capitalismo y al sector privado

Posible desencadenante: Disminución de la fiabilidad energética y/o aumento de los costos

En lugares como Choluteca, algunos encuestados compartieron la preocupación de que la retórica cada vez más populista procedente del gobierno y del partido LIBRE se utilice para justificar la intromisión en los intereses del sector privado, incluyendo la posibilidad de allanar el camino para la nacionalización en

sectores como la energía. Esto contribuye a la creciente preocupación del sector privado sobre su capacidad para hacer negocios bajo el nuevo gobierno.

**Si las negociaciones de los contratos energéticos no tienen éxito y la energía se nacionaliza**, los consumidores podrían tener una energía menos fiable.

**Trayectoria: La decepción de las expectativas de que el gobierno cumpla las promesas electorales podría desencadenar manifestaciones y contra manifestaciones**

La mayoría de las personas que se reunieron con el equipo coincidieron en que era demasiado pronto para emitir un juicio sobre la actuación del nuevo gobierno, pero muchos plantearon la preocupación de que, con algunas excepciones, como la derogación de las ZEDE y las leyes sobre el salario por hora, el nuevo gobierno no está cumpliendo de forma visible sus promesas de campaña.

Tendencia: Altas expectativas a la espera de que se cumplan las promesas de campaña

Tendencia: Creciente preocupación porque las acciones del gobierno y del partido LIBRE no cumplen con las promesas de campaña.

La presidenta Xiomara Castro fue elegida apelando a los diversos intereses de múltiples grupos de interesados y a los que querían castigar al Partido Nacional. Ahora estos grupos de interesados esperan cambios concretos y visibles prometidos durante la campaña. Esto está creando divisiones dentro del partido LIBRE, pero también creando problemas para el nuevo gobierno, porque los intereses de estos diferentes grupos a menudo son contradictorios, por ejemplo, los de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas que están en oposición a las expectativas del sector privado.

La mayoría de los encuestados señalaron que no están viendo una reducción en la corrupción, y muchos citan ejemplos de prácticas corruptas del pasado que se repiten, por ejemplo, el nepotismo en los nombramientos políticos. Sin embargo, hay que señalar que algunas acciones del gobierno, como la aprobación de la Ley de Amnistía, aunque desagradable para muchos, no sacó a la gente a la calle. Muchas personas siguen esperando ver el cambio por el cual votaron.

Desencadenantes potenciales:

- **Las fuerzas de seguridad reprimen violentamente** a los manifestantes, o se producen otras violaciones de los derechos humanos
- Falta de acción por parte del gobierno para ser más inclusivo con las poblaciones indígenas y afrodescendientes (desencadenante específico aún no evidente)
- Ningún cambio en la agenda de género o **cambios en la agenda de género** que provoquen reacciones y protestas de los grupos conservadores
- Otro **escándalo de corrupción muy publicitado en el sector salud**
- Si las **ZEDEs** actuales no se disuelven.

La presidenta Xiomara Castro prometió luchar por la equidad, reducir los feminicidios y despenalizar el aborto en determinadas circunstancias<sup>66</sup>, y aprobar el uso de píldoras anticonceptivas de emergencia, prohibidas desde el golpe de Estado de 2009. Pero hay algunos intereses políticos muy fuertes que se

---

<sup>66</sup> La presidenta prometió despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto no es viable y en casos de violación.

interponen en el camino de estas reformas. Sólo ocho de los 35 miembros del gabinete, es decir, el 22 por ciento, son mujeres, lo que no difiere del equilibrio de los nombramientos del gabinete en la administración anterior.<sup>67</sup> Asimismo, de las 298 municipalidades de Honduras, sólo 23 (8 por ciento) tienen alcaldesas. Un éxito en la incorporación de más mujeres a la gobernanza ha sido el nombramiento de mujeres en puestos de alto nivel dentro de la Policía Nacional. El 40 por ciento de las direcciones, departamentos y comisarías de la Policía Nacional están dirigidas por mujeres.<sup>68</sup>

La presidenta también se enfrenta a desafíos en su propio gobierno, que incluye al Partido Salvador de Honduras (PSH), más conservador. El decreto para eliminar la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia fue redactado por el equipo de transición inicial. La presidenta Castro podría emitir el decreto por orden ejecutiva, sin embargo, esto requeriría la cooperación del Ministro de Salud Pública.

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes no están viendo el aumento de la inclusión y la participación en el gobierno que se prometió durante la campaña. Se espera que la Dirección de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños sea elevada de departamento a Ministerio. Además, indígenas, afrodescendientes y campesinos esperan que el gobierno les devuelva las tierras. Bajo la reforma agraria de 1997, el gobierno se comprometió a comprar y devolver 15,000 hectáreas de tierra. Se ha devuelto muy poco, incluidas las tierras confiscadas con anterioridad a los narcotraficantes (unas 10,000 hectáreas). En general, los leucos que se reunieron con el equipo tenían una visión más positiva del nuevo gobierno, posiblemente porque el ex presidente Zelaya estaba trabajando en temas de reforma agraria antes del golpe. Al igual que otros grupos indígenas y afrodescendientes, esperan dialogar con el nuevo gobierno.

Las ZEDEs también suponen un problema para el nuevo gobierno. Una de las primeras medidas de este gobierno que recibió un amplio apoyo fue la derogación de las ZEDEs. En la práctica, sin embargo, siguen funcionando, incluida PROSPERA, que está construida en tierras garífunas. Si el gobierno cierra las ZEDEs, es probable que se enfrente a demandas masivas presentadas por empresas internacionales que han invertido sustancialmente en estos proyectos.

***Trayectoria: El deterioro de las condiciones socio-económicas de la mayoría de la población podría conducir a un aumento en las protestas, la violencia, la criminalidad y la migración y disminuir la legitimidad del gobierno.***

Tendencia: Los precios de alimentos, combustibles, insumos agrícolas y otras necesidades están aumentando. Los ciudadanos cuestionan la estrategia del gobierno para gestionar el aumento de precios.

Tendencia: Las manifestaciones están aumentando. Esto podría deberse a muchos factores, como el descontento general, la disminución del miedo a la pandemia y las claras indicaciones del gobierno de que no tiene intención de reprimir a los manifestantes pacíficos.

Tendencia: El empleo en el sector público está muy politizado, dejando a muchos que antes apoyaban al Partido Nacional desempleados y a los actuales funcionarios públicos atados al nuevo gobierno.

Tendencia: La migración a las zonas urbanas y la emigración continuarán mientras la gente tenga dificultades para encontrar trabajo.

El costo total de la canasta básica de alimentos está aumentando, junto con los costos de los insumos agrícolas, como las semillas y los fertilizantes. Las personas que se reunieron con el equipo reconocen que

---

<sup>67</sup> Con el Presidente Hernández, de los 17 cargos de ministros, cinco fueron ocupados por mujeres (29 por ciento)

<sup>68</sup> Hernández, Viena. Marzo 8, 2022. "President Xiomara Castro's Debt to the Women of Honduras."

algunas de estas alzas de precios están relacionadas con la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo, quieren ver una estrategia gubernamental para afrontar lo que muchos creen es una inseguridad alimentaria generalizada que se avecina. El equipo escuchó a muchos agricultores de subsistencia en el Occidente que ya no pueden dedicarse a la producción debido a los altos costos de los insumos. Esto convierte a muchos productores en consumidores, aumentando su vulnerabilidad ante la escasez de alimentos.

A medida que las condiciones socioeconómicas sigan deteriorándose, es probable que aumente la migración desde la Zona Sur. Del mismo modo, el deterioro económico generalizado más allá de Honduras también afectará a Choluteca, ya que los migrantes siguen llegando de Sudamérica, el Caribe y África. Si no aumenta la capacidad de respuesta del Gobierno de Honduras, estos migrantes seguirán siendo especialmente vulnerables a la explotación y al tráfico de personas.

**Desencadenantes Potenciales:** Estas incidencias tienen el potencial de conducir a actos de violencia espontáneos o controlados. Estos factores desencadenantes actúan conjuntamente. Cuantos más se presenten, mayor será la probabilidad de que se produzcan manifestaciones y posiblemente violencia.

- Aumento significativo en el **precio de los alimentos**
- Aumento en el **costo de la energía**. En algunas zonas de Cortés, como Choloma, los encuestados informaron que ya se están dando protestas por los altos costos del combustible y la electricidad.
- La devaluación de la moneda, con la consecuente **reducción del poder adquisitivo**, podría desencadenar la violencia en las zonas urbanas.
- Recortes en los **subsidios de los combustibles**
- Falta de **resolución de los contratos gubernamentales para el empleo del sector público**. Mientras el equipo realizaba el trabajo de campo, se produjeron importantes manifestaciones de simpatizantes de LIBRE exigiendo la renuncia del Ministro de Salud por ser del PSH y no de LIBRE. Al mismo tiempo, hay un descontento generalizado entre los trabajadores de salud porque el gobierno anterior prometió empleos a los que trabajaron en primera línea durante la pandemia, pero están siendo reemplazados en este nuevo gobierno.

**Trayectoria:** La violencia familiar y comunitaria seguirá aumentando sin cesar. La violencia generalizada perpetuará los ciclos de violencia.

**Tendencia:** La violencia intrafamiliar y sexual aumentó durante la pandemia y se percibe que sigue aumentando. Esto incluye un aumento de la violencia contra los niños.

**Tendencia:** Siguen aumentando los ataques violentos contra LGBTQI+

#### La violencia perpetúa los ciclos de violencia

La exposición a la violencia en la infancia y la juventud suele conducir a comportamientos violentos en el futuro. La violencia contribuye a los efectos en la salud mental tanto de la víctima como del agresor. Los problemas de salud mental directos pueden incluir el trastorno de estrés postraumático (TEPT), los trastornos de depresión y ansiedad y los trastornos de adicción. La exposición a la violencia interpersonal también aumenta la vulnerabilidad de por vida a una amplia gama de problemas de salud emocionales, conductuales y físicos, que a su vez afectan indirectamente a las economías al retrasar el desarrollo, aumentar la desigualdad y erosionar el capital humano.

*Detener la violencia juvenil en América Latina:  
Una guía para el sector salud  
USAID. Abril 2021. p. 29*

Tendencia: La violencia se describe como "cultural" o "normal". Es un medio ampliamente aceptado para resolver conflictos familiares, comunitarios e incluso legislativos.

Tendencia: Las poblaciones vulnerables, por ejemplo, los inmigrantes, están siendo objeto de ataques en áreas como Choloma.

Tendencia: Fracaso casi total de los operadores de justicia (policía, Ministerio Público y tribunales) a nivel local, lo que hace que las poblaciones vulnerables queden completamente marginadas y sin acceso a ninguna forma de justicia

Tendencia: La falta de protección y la pérdida de fe en el sistema judicial hacen que las víctimas no quieran denunciar los actos de violencia

La investigación apoya la idea de la violencia cíclica, o de que la violencia engendra ciclos de violencia. Esto es cierto no sólo para las víctimas, sino también para los miembros de sus familias y comunidades que también pueden necesitar apoyo después de eventos violentos. A la llegada de la pandemia del COVID-19, que encerró a los abusadores en el mismo espacio que las víctimas, se le atribuye el aumento de la violencia familiar y sexual. Los altos niveles de violencia en las familias y comunidades y contra las poblaciones vulnerables (migrantes de otros países, LGBTQI+, mujeres y niños) continuarán.

No hay un desencadenante concreto que lleve a una violencia visible generalizada o a un conflicto social, sino que la violencia se produce a todos los niveles, todos los días. La normalización de la violencia y la insensibilización ante el valor de la vida humana perpetúan y agravan este ciclo. La violencia social sostenida provoca un trauma generalizado que se transmite de una generación a otra, afectando la capacidad de las personas para llevar una vida sana y productiva.

***Trayectoria: Los impactos del cambio climático y las tensiones por la escasez de recursos seguirán aumentando.***

Tendencia: Percepción de que no existe una estrategia gubernamental para abordar las preocupaciones inmediatas del aumento de las sequías y la inminente inseguridad alimentaria.

Tendencia: Hay poca inversión para reparar los daños de Eta e Iota, y no se da mantenimiento a los sistemas de mitigación de inundaciones.

El departamento de Cortés se considera ahora aún más vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos que en 2020. Los efectos de Eta y Iota aún se sienten, y la falta de reparaciones en la infraestructura existente para mitigar las inundaciones agrava su vulnerabilidad.

Desencadenantes Potenciales:

- Extensos **daños ocasionados por un evento natural.**
- **Sequía recurrente** sin inversiones gubernamentales en la gestión del agua y soluciones de distribución equitativa.

***Trayectoria: El espacio cívico seguirá cerrándose y continuarán los actos de violencia selectivos contra los defensores de los derechos humanos, los defensores del medio ambiente, los periodistas y otras personas que se manifiestan o actúan en contra de intereses poderosos.***

Tendencia: Percepción de que cualquiera que se pronuncie o actúe contra el nuevo gobierno, el partido LIBRE o intereses poderosos es criminalizado y victimizado. Esto contribuye a aumentar la autocensura de los medios de comunicación y la sociedad civil.

Tendencia: Aumento del uso del espacio digital para dirigirse a los individuos, en particular a las mujeres de alto perfil.

Aunque muchos de los encuestados señalaron que el gobierno ya no reprime violentamente a los manifestantes, el equipo escuchó muchos casos de medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados y obligados a exiliarse o incluso asesinados; los culpables exactos siguen siendo desconocidos.

#### Defensores de los Derechos Humanos carecen de Protección

Honduras es uno de los países más peligrosos de Centroamérica para ser defensor de derechos humanos. Aunque el gobierno creó un Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, en 2015, los activistas denuncian que es ineficaz.

– *Human Rights Watch, Informe Mundial 2021*

Muchos encuestados perciben que el espacio para expresar opiniones que no son pro-LIBRE o pro-gobierno continúa cerrándose. Se trata de una combinación de miedo, autocensura y la disminución del espacio y la capacidad de las ONGs para realizar auditorías sociales y abogar por el cambio. Algunos señalaron que, tras las elecciones, no existe un verdadero partido de oposición organizado a LIBRE. El Partido Nacional todavía se está reorganizando y recuperando de su derrota electoral.

Algunos especulan que, si el gobierno no aborda las crecientes preocupaciones sobre la seguridad, el aumento de los costos y las limitadas oportunidades económicas, la sociedad civil y los medios de comunicación podrían ser más expresivos en sus críticas. La respuesta del gobierno podría incluir tácticas de intimidación adicionales, por ejemplo, la movilización de colectivos de motociclistas en Tegucigalpa y Olancho para amenazar a los críticos.

Desencadenantes Potenciales: Es probable que los factores desencadenantes que se enumeran a continuación contribuyan a actos de violencia selectivos destinados a silenciar a las personas y enviar un mensaje. Estos desencadenantes pueden aumentar el conflicto entre el gobierno y la sociedad civil, pero no necesariamente conducir a una respuesta violenta generalizada.

- Voces más extremas en el Congreso, el gobierno y el partido LIBRE se imponen y **aprueban leyes que restringen cada vez más el espacio cívico**, por ejemplo, leyes que impactan en la libertad de prensa, o restricciones crecientes a las ONG.
- **El aislamiento y la criminalización de los medios de comunicación independientes y de las ONGs** conduce a actos de violencia selectivos y/o al exilio forzoso.
- Aumento del **uso del espacio digital** por parte del gobierno y de las organizaciones criminales para atacar a los periodistas, a las mujeres de alto perfil en el gobierno y a los medios de comunicación.

**Trayectoria:** *La percepción de que la seguridad general está empeorando podría desencadenar protestas y abrir la puerta a más actos de violencia.*

Hay indicios de que la policía está cada vez más politizada. El nuevo jefe de policía destituyó a los funcionarios de alto rango y a los promovidos bajo el gobierno anterior. Aunque se otorgaron responsabilidades adicionales a la policía, como el control de las maras y las prisiones, no hubo un aumento correspondiente en su presupuesto. La reasignación de responsabilidades, unida a la descoordinación de la transición a la policía, ha llevado a la percepción de que existe un "vacío de seguridad" porque los militares ya no están en las calles y la policía se ha visto sobrecargada con nuevas responsabilidades.

Tendencia: Percepción de que la seguridad general está empeorando con el nuevo gobierno.

Tendencia: Muchas de las personas entrevistadas manifestaron su preocupación por el regreso de los antiguos policías depurados al servicio y por la importante rotación de personal en la policía.

Tendencia: Los cambios en el liderazgo de las maras y las disputas con las maras más pequeñas por el territorio y la venta de drogas están provocando un aumento de la violencia.

Algunas personas también señalaron actos de violencia más frecuentes e intensos en áreas que antes se consideraban seguras.

Desencadenantes Potenciales: Los desencadenantes vinculados a la percepción del empeoramiento de la seguridad tienen el potencial de provocar protestas o actos de violencia.

- **Violencia en el sistema penitenciario.** Recientemente, reclusos del Barrio 18 mataron a seis pandilleros dentro de un penal de alta seguridad en Santa Rosa.<sup>69</sup>
- **Asesinato de personal de seguridad** por parte de organizaciones criminales, por ejemplo, los recientes asesinatos de policías en Colón y Olancho
- **Abuso del poder por parte de la policía**, por ejemplo, el asesinato de Keyla Martínez <sup>70</sup> o un escándalo que implique a la policía relacionado con la corrupción o las violaciones de los derechos humanos.
- Aumento de la violencia entre la MS-13 y Barrio 18 y las nuevas maras derivadas debido a la **competencia por el territorio y la venta de drogas**
- **La masacre** podría desencadenar una represalia
- Acto de **violencia que se vuelve viral**

## RECOMENDACIONES

Basándose en la dinámica del conflicto y la violencia y en las trayectorias previstas que se han discutido anteriormente, el equipo de evaluación ofrece las siguientes recomendaciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo (OD) del CDCS de la Misión y con la Estrategia para Abordar las Causas Raíz de la Migración en Centroamérica de la Administración Biden (o Estrategia Causas Raíz - RCS). Aunque las referencias al CDCS y al RCS proporcionan puntos de entrada para la programación, es importante señalar *que muchas de las recomendaciones también pueden abordarse como temas transversales a la programación de la Misión, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la juventud o la adaptación al cambio climático.*

La siguiente matriz ofrece una visión general de las recomendaciones del equipo organizadas por las dinámicas de conflicto y violencia identificadas. En pocas palabras, el propósito de cada recomendación es interrumpir las relaciones que contribuyen al aumento de los conflictos y la violencia o ampliar las relaciones que los contrarrestan. A continuación, se detallan las recomendaciones.

---

<sup>69</sup> [https://www.register-herald.com/region/6-gang-members-killed-in-honduras-prison/article\\_12d1b2e0-b356-5c4e-bddd-c5424fb3cecb.html](https://www.register-herald.com/region/6-gang-members-killed-in-honduras-prison/article_12d1b2e0-b356-5c4e-bddd-c5424fb3cecb.html)

<sup>70</sup> En febrero de 2021, estallaron protestas en toda Honduras después de que la estudiante de enfermería Keyla Martínez muriera bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá. La policía dijo inmediatamente que se había suicidado, sin embargo, la autopsia reveló que Keyla había sido asesinada.

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
<p><b>Clientelismo y cultura de impunidad</b></p>	<p>Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas para disminuir el clientelismo y mejorar el acceso a la justicia.</p> <p>Misión CDCS IR 2.4 e IR 3.1 Gobernanza para reducir la impunidad mejorada</p> <p>RCS Pilar II</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Seguir aprovechando la aceptación de alto nivel y los compromisos del gobierno para combatir la impunidad. Coordinar los mensajes del USG y comprometerse a cambiar los recursos cuando no se cumplan los puntos de referencia acordados en el sector de la justicia y la seguridad.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Promover la divulgación del financiamiento político y aumentar los incentivos y explorar nuevas formas de apoyar la profesionalización de la función pública.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Identificar, reproducir y contextualizar las iniciativas exitosas que promueven el acceso a la justicia, la reducción de la impunidad y el apoyo a la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local.</p>
<p><b>Normalización de la violencia</b></p>	<p>Crear conciencia sobre derechos humanos y el valor de la vida humana mediante intervenciones altamente contextuales, en consulta con las comunidades, incluyendo las poblaciones vulnerables, para fomentar un cambio de comportamiento a largo plazo.</p> <p>Misión CDCS SIR 2.4.4 y SIR 3.1.4 Incremento de la protección de los derechos humanos</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Asociarse con otros organismos del USG para apoyar a la policía en el uso de enfoques centrados en el sobreviviente al responder a incidentes de GBV Identificar oportunidades de programación para prevenir la violencia en relación con la extorsión, especialmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma.<sup>71</sup></p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Trabajar a través de los programas nuevos o existentes de USAID para involucrar a la comunidad escolar -alumnos, profesores, padres y comunidades locales- para crear conciencia sobre los derechos humanos y la protección de la vida humana.</p> <p>Facilitar la sanación de los traumas y otro tipo de apoyo psicosocial a las familias, especialmente a los niños pequeños, para contrarrestar los efectos de haber presenciado y experimentado la violencia en el hogar y en la comunidad.</p> <p>Integrar las consultas dirigidas por la comunidad que involucran a las poblaciones vulnerables en el</p>

<sup>71</sup> Para obtener más información sobre las dinámicas de violencia y extorsión, USAID está completando una evaluación regional de extorsión (Honduras, El Salvador y Guatemala) que estará disponible en agosto de 2022.

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
	RCS Pilar V	<p>diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las actividades.</p> <p>Identificar, reproducir y contextualizar los enfoques de reducción de la violencia que han tenido éxito, así como los modelos que promueven el acceso a los servicios y la protección de las poblaciones en riesgo. Apartarse de los enfoques que se perciben como ineficaces o excluyentes<sup>72</sup>.</p> <p>Apoyar la programación de radio en comunidades remotas y desarrollar una programación en torno a la concienciación sobre la inclusión y el acceso a los derechos de las poblaciones vulnerables. Ampliar los mensajes adaptados al contexto utilizando Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok para llegar a las comunidades específicas con acceso a los medios sociales correspondientes.</p> <p>A medida que se vayan formando los comités de seguridad ciudadana, trabajar con ellos para crear modelos de prácticas y respuestas inclusivas, transparentes, no violentas y responsables a las necesidades locales.</p> <p>Comprender los diferentes papeles que las iglesias pueden desempeñar a nivel local o nacional, como posibles defensores de la paz, pero también en la perpetuación de dinámicas de exclusión y machismo, marginando y alimentando aún más la violencia contra las mujeres, los niños y los LGBTQI+. Hay que tenerlo en cuenta en todos los programas que se realicen con socios religiosos para evitar mensajes contradictorios.</p>
<b>Disputas por la tierra</b>	<p>Evitar que surjan disputas sobre la tierra y aumentar las opciones de resolución pacífica de conflictos.</p> <p>Misión CDCS IR 1.2; IR 2.4 e IR</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Coordinar con otras agencias del USG para integrar mensajes de adhesión al Convenio ILO 169 y de respeto a los derechos humanos cuando se reúnan con sus homólogos hondureños.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar estrechamente con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el Congreso Nacional y otras</p>

<sup>72</sup> Por ejemplo, Ciudad Mujer, gestionada por el GOH, cuenta con programas de GBV para las mujeres, pero se considera que excluye a las víctimas masculinas, a los agresores y a los miembros de la población LGBTQI+, lo que reduce la eficacia general.

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
	<p>3.1 Gobernanza para reducir la impunidad mejorada</p> <p>RCS Pilares II y III</p>	<p>partes interesadas para facilitar la aprobación de una ley de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC) tal y como se establece en la Organización Internacional del Trabajo 169 - Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ILO 169). Involucrar a los actores del sector privado nacional e internacional para que adopten y se adhieran al CLPI.</p> <p>Mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Fortalecer la capacidad de las entidades de titulación de tierras, los organismos de concesión de licencias ambientales, las municipalidades, los defensores del pueblo, los jueces locales, los magistrados y los fiscales para aplicar y hacer cumplir el Convenio ILO 169, incluido el cumplimiento del protocolo del FPIC.</p> <p>Trabajar con empresas, comunidades y autoridades para reforzar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos sobre la tierra y mejorar la educación y la supervisión del cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de las empresas. Apoyar una mayor presencia gubernamental (civil) en las zonas que experimentan un alto índice de disputas por la tierra.</p> <p>Trabajar con las ONGs relevantes para apoyar la auditoría social de resolución de conflictos sobre la tierra y promover la defensa pacífica y el compromiso con los derechos humanos, medioambientales y laborales. En la medida de lo posible, integrar mensajes adecuados al contexto sobre el derecho de las mujeres a poseer tierras.</p> <p>Junto con el sector privado y otros actores, identificar y difundir los modelos de éxito que existen donde las comunidades y el sector privado han impulsado proyectos inclusivos y mutuamente beneficiosos.</p>
<p><b>Adaptación al cambio climático y escasez de recursos</b></p>	<p>Reforzar la preparación y respuesta ante catástrofes.</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Continuar trabajando con la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID y el gobierno de Honduras para desarrollar un plan para las áreas que probablemente experimenten una</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
	<p>Mejorar la gestión de los recursos escasos.</p> <p>Misión CDCS IR 1.3 Disminución de la vulnerabilidad a las principales perturbaciones y tensiones</p> <p>RCS Pilar I</p>	<p>alta inseguridad alimentaria.</p> <p>Reforzar la coordinación entre USAID/DOD para la respuesta y la preparación ante emergencias. Colaborar con los Proyectos de Asistencia Humanitaria (HAP) del DOD con esfuerzos más amplios en preparación para desastres y reducción de riesgos climáticos de USAID.</p> <p>Apoyar los esfuerzos de los donantes para aprobar el reglamento de la Ley del Aguas de 2009<sup>73</sup> y crear instancias para promover su implementación.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) para facilitar el desarrollo de protocolos a nivel operativo en respuesta a situaciones de emergencia bajo el nuevo Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Ayudar a mejorar los sistemas de información relacionados con la hidrología y los suelos con el fin de informar la toma de decisiones nacionales sobre el uso de la tierra.</p> <p>Apoyar los esfuerzos de COPECO para integrar las acciones de riesgo climático como herramienta de prevención, aumentando las capacidades de adaptación de las comunidades.</p> <p><b>Regional:</b> Mejorar la infraestructura de mitigación de inundaciones en el Valle de Sula, donde se necesita urgentemente la restauración, el fortalecimiento y la remodelación.</p> <p><b>Programación a nivel local:</b> Fortalecer las juntas de agua<sup>74</sup> y las autoridades municipales del agua para mejorar la asignación eficiente del agua, mantener la calidad del agua, proteger las fuentes de agua y resolver los conflictos sobre el uso del agua a nivel local.</p> <p>Buscar oportunidades en la programación de la</p>

<sup>73</sup> La Ley General de Aguas de 2009 La Ley General de Aguas de 2009 creó una nueva Autoridad Nacional de Agua, que fue concebida para centralizar la política del agua en Honduras. Sin embargo, la ley de 2009 carece de un reglamento - un documento legal que defina las directrices y los principios de implementación y la creación de la autoridad del agua está pendiente.

<sup>74</sup> Juntas de Agua son asociaciones comunitarias presentes en la mayoría de las comunidades.

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
		Misión para apoyar o crear asociaciones intersectoriales y otros foros para gestionar y mitigar el cambio climático y las tensiones sobre los recursos.
<b>Cierre del espacio cívico</b>	<p>Mejorar la protección estatal y no estatal para los actores bajo amenaza. Cultivar el espacio para las diversas opiniones y voces.</p> <p>Misión CDCS SIR 2.4.4 y SIR 3.1.4 Aumento de la protección de los derechos humanos, y SIR 2.3.3 Sociedad civil y medios de comunicación fortalecidos</p> <p>RCS Pilar III</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Explorar oportunidades para trabajar con el proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia u otros mecanismos regionales anticorrupción para mejorar la capacidad de protección del estado</p> <p>Utilice las conclusiones de la reciente Evaluación del Ecosistema Digital de los Países (DECA) para comprender y fundamentar las respuestas a los patrones de violencia digital y a las brechas digitales.</p> <p><b>Programación nacional y/o a nivel local:</b> Contextualizar y mejorar la protección no estatal para las personas y organizaciones amenazadas por desafiar al poder o documentar sus abusos.</p> <p>Explorar la viabilidad de crear un mecanismo independiente de protección de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones existentes que protegen a las personas bajo amenaza. Ampliar el seguimiento del observatorio de la violencia de las violaciones contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas amenazadas.</p> <p>Apoyar las iniciativas de la sociedad civil para supervisar las normas éticas y el contenido neutral de la cobertura de los medios de comunicación. Integrar la comprobación de hechos en la formación de los periodistas. Facilitar oportunidades para los medios de comunicación emergentes, formar a los periodistas y editores en materia de ética y reforzar el Consejo de Ética del Colegio de Periodistas de Honduras. (CPH).<sup>75</sup></p> <p>Apoyar la promoción y la creación de leyes que protejan contra los daños en los espacios digitales, incluida la GBV. Apoyar a las unidades de respuesta designadas con asistencia técnica y recursos.</p>
<b>Jóvenes Privados de</b>	Involucrar y	<b>Apalancar recursos:</b> Fomentar la inversión del

<sup>75</sup> Todos los periodistas hondureños deben ser miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Este requisito, establecido por ley en 1979. <https://medialandscapes.org/country/honduras/organisations/journalist-associations>

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
<p><b>sus derechos</b></p>	<p>empoderar a los jóvenes en todos los aspectos de la vida social, económica y política.</p> <p>Misión CDCS IR 1.1 Los jóvenes y los niños están mejor educados y son miembros más productivos de la sociedad e IR 3.2 Riesgo de comportamiento delictivo reducido.</p> <p>RCS Pilares I y IV</p>	<p>GOH y del sector privado y las acciones tangibles en la educación formal e informal. Colaborar con la programación de pequeñas subvenciones del DOD para mejorar la infraestructura educativa.</p> <p>Buscar oportunidades para asociarse con otros donantes para crear un enfoque contextualizado de la salud sexual y reproductiva y el abuso de alcohol y drogas. Cuando sea posible, integrar elementos de salud/comportamientos positivos (por ejemplo, no consumir alcohol y drogas) en las actividades existentes.</p> <p><b>Programación a nivel nacional y local:</b> Involucrar a los jóvenes como agentes de su propio cambio. Cultivar a los líderes juveniles e involucrar a los jóvenes como ejecutores, visionarios y supervisores de las actividades centradas en la juventud. Involucrar intencionalmente a las mujeres jóvenes y a las niñas que tienen necesidades especiales y que corren el riesgo de ser explotadas o ignoradas.</p> <p>Trabajar en múltiples niveles de entrada, por ejemplo, la política educativa y la elaboración de presupuestos, la inversión en infraestructura escolar, el trabajo con las familias y las comunidades, etc. para el regreso de los estudiantes a la escuela.</p> <p>Enfocar el desarrollo de la fuerza laboral / actividades de empleo tanto en la colocación laboral con un salario justo como en las habilidades que coincidan con las necesidades y la capacitación del sector privado.</p>
<p><b>Tensiones del sector Público/privado</b></p>	<p>Fomentar las condiciones para el diálogo y apoyar el desarrollo de una agenda común</p> <p>Misión CDCS IR 2.1 Mejora de la eficacia del sector privado</p> <p>RCS Pilares I y II</p>	<p><b>Apalancar recursos:</b> Fomentar los debates entre el GOH y el sector privado para aliviar las tensiones y acordar objetivos comunes.</p> <p><b>Programación a nivel nacional:</b> Trabajar con representantes del sector privado dentro y fuera del gobierno para identificar a los campeones que apoyan la asociación y fomentar la comunicación constructiva entre el sector privado y el Gobierno de Honduras.</p> <p>Identificar un actor internacional neutral con credibilidad para facilitar y mediar en un proceso de</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
		<p>diálogo y en la creación de una agenda común entre los sub-sectores del sector privado. Apoyar la unificación de las exigencias y una agenda común del sector privado.</p> <p>Trabajar con las contrapartes gubernamentales para apoyar las negociaciones.</p> <p><b>Programación a nivel nacional y local:</b>            Buscar oportunidades para ampliar los mecanismos de resolución de conflictos del sector privado para mitigar su fragmentación, apoyar la gestión de los escasos recursos y reducir las posibilidades de violencia.</p> <p>Fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado a nivel local.</p>
<b>Esperanza... pero no para siempre</b>	Aprovechar la esperanza del cambio	<p>Alentar a la presidenta a abordar las altas expectativas de cambio tras su elección.</p> <p>Apoyar el liderazgo de la Presidenta Castro en áreas como la educación, salud, reducción de la pobreza, derechos de la mujer y GBV. Identificar oportunidades para trabajar con la Presidenta Castro en iniciativas clave de lucha contra la corrupción y otros proyectos de alto perfil y combinarlos con una estrategia de comunicación energética del GOH.</p> <p>Crear espacios de diálogo entre el gobierno y las poblaciones indígenas y afrodescendientes, los actores del sector privado y los grupos de defensa de los derechos de la mujer y LGBTQI+.</p>
<b>Migración y Remesas</b>	Seguir el papel que desempeñan la migración y las remesas en la mitigación de la violencia y los conflictos sociales.	<p>Si la política exterior de EE.UU. u otros factores limitan la migración, vigilar los signos de un mayor descontento con el gobierno de Honduras y otras consecuencias imprevistas para informar a la diplomacia y los objetivos de programación. Explorar opciones para diseñar actividades que fomenten la inversión de remesas.</p>
<b>Recomendaciones operativas y de gestión para la Misión</b>	Integrar la sensibilidad ante los conflictos y la violencia en la estrategia de la misión y la cartera de programas	<p>Garantizar la integración de la sensibilidad al conflicto en la programación y los enfoques de la Misión. Utilizar el Centro de Integración Sensible al Conflicto (CSIH), la lista de verificación de la sensibilidad al conflicto para la programación escolar y los mecanismos de seguimiento y evaluación como MESCLA 2.0 para apoyar el diseño sensible al</p>

Dinámica	Objetivo	Recomendaciones
	<p>Misión CDCS Enfoques y principios estratégicos</p> <p>CLA, género e inclusión social, programación integrada</p>	<p>conflicto y el seguimiento continuo de los cambios situacionales.</p> <p>Permitir ajustes a mitad de camino en respuesta a los cambios en la dinámica del conflicto, la violencia y la paz mediante la integración de la sensibilidad al conflicto en los procesos de la Misión en curso, por ejemplo, revisiones de cartera o PMP.</p> <p>Considerar la contratación de un asesor de pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de la USAID, establecer un consejo o grupo asesor de pueblos indígenas, y/o tener un programa de pasantías para pueblos indígenas y afrodescendientes.</p> <p>Insertar lenguaje en el Acuerdo de Objetivos de Desarrollo (DOAG) que identifique acciones clave por parte de las contrapartes gubernamentales en temas prioritarios para mejorar la rendición de cuentas.</p> <p>Garantizar que los socios ejecutores lleven a cabo procesos de diligencia debida cuando se asocien con ONGs y organizaciones de promoción, y no sólo con empresas privadas. Elaborar una orden de Misión sobre la diligencia debida para aclarar a quién apoya realmente USAID y evitar el riesgo de reputación y rendimiento.</p> <p>Mejorar la coordinación entre las actividades de USAID que se desarrollan en las mismas zonas, así como la coordinación entre las actividades de USAID y las de otras organizaciones.</p> <p>Consultar con las comunidades para identificar los objetivos compartidos y apoyar la sostenibilidad. Cuando sea posible, utilizar los recursos disponibles en la comunidad.</p> <p>Considerar horizontes de tiempo de actividad más largos (más de cinco años), y/o un seguimiento y evaluación a largo plazo para los proyectos que buscan crear un cambio sistémico.</p>

A continuación, se ofrece una exploración más detallada de las recomendaciones anteriores. Para cada una de las dinámicas analizadas, el equipo propone una teoría del cambio (TOC) para aclarar los supuestos sobre cómo las acciones específicas reducirán el potencial de violencia y conflicto. La TOC sirve de vínculo

tangible entre el análisis y las respuestas propuestas.

Al igual que la matriz anterior, las recomendaciones están organizadas para facilitar el acceso en relación con dinámicas específicas de violencia, conflicto o paz. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones se entrecruzan y tienen el potencial de influir en más de una dinámica, por ejemplo, las recomendaciones relativas a la normalización de la violencia tienen el potencial de influir también en la dinámica de la seguridad de la tierra, la privación de derechos de los jóvenes y otras.

Tanto en la matriz como en la narración que sigue, las dinámicas de conflicto, violencia y paz y las recomendaciones asociadas se ordenan por:

- **Preocupación inmediata** – estas recomendaciones abordan las dinámicas que tienen más probabilidades de conducir a la violencia o al conflicto a corto plazo, posiblemente de seis meses a un año.
- **Preocupación** – estas recomendaciones abordan dinámicas que no conducirán necesariamente a una violencia o un conflicto generalizado, ya sea porque la violencia es de naturaleza selectiva (cerrando el espacio) o porque existe una válvula de escape que minimiza las posibilidades de escalada.
- **Latente** – estas recomendaciones abordan las oportunidades para mitigar la posible escalada de estas dinámicas.
- **Mitigación** – estas recomendaciones aprovechan las dinámicas que mantienen el conflicto y la violencia bajo control.
- **Operativa** – estas recomendaciones están dirigidas a las operaciones de la Misión y la sensibilidad a los conflictos entre carteras.

Las recomendaciones que se ofrecen a continuación animan a USAID a aprovechar los recursos y desarrollar o integrar actividades sensibles al conflicto en programas nuevos o existentes a nivel nacional y local.

### **DINÁMICA: CLIENTELISMO Y CULTURA DE IMPUNIDAD (PREOCUPACIÓN INMEDIATA)**

**TOC:** *Si la administración pública y los partidos políticos se profesionalizan, Y Si se aumenta la rendición de cuentas del gobierno (a nivel local y nacional), Y Si se presiona a las instituciones de justicia y seguridad para que trabajen juntas y con la sociedad civil, ENTONCES el clientelismo y la impunidad se reducirán Y el acceso a la justicia será más inclusivo.*

#### **Apalancar recursos:**

- 1) **Recomendación - fomentar la voluntad política para combatir la impunidad:** Aprovechar la participación y el **compromiso de alto nivel para combatir la impunidad**. Explorar posibles puntos de **apalancamiento diplomático**, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR), el regreso de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) y oportunidades con la sección consular.
- 2) **Recomendación – mejorar la rendición de cuentas y garantizar las consecuencias:** **Coordinar los mensajes del USG y comprometerse a cambiar los recursos** cuando no se cumplan los puntos de referencia acordados en el sector de la justicia y la seguridad. **Establecer mecanismos de rendición de cuentas en** los programas de desarrollo y otros programas de asistencia.

Un ejemplo de oportunidad para incorporar mecanismos de rendición de cuentas en una actividad próxima es el lanzamiento de la nueva actividad de USAID, *Justicia Efectiva*. Con nuevos fondos para la HPN y/o la Fiscalía General, el USG y las contrapartes pertinentes podrían firmar un Memorando de Entendimiento (MOU) para acordar puntos de referencia clave relacionados con los datos públicos, el acceso a la justicia, la mitigación de la impunidad y otras áreas. El MOU y los puntos de referencia asociados podrían vincular las inversiones específicas del USG de ambas agencias, incluyendo cualquier subvención con organizaciones de la sociedad civil que se asocien con el USG. Esto indicaría la voluntad política y las medidas concretas adoptadas para garantizar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las contrapartes hondureñas.

**Programación a nivel nacional:**

- 1) Recomendación – mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: Utilizar el mecanismo de la ELECCT para **trabajar con el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE)** para promover la divulgación pública de las contribuciones privadas y el cabildeo. Buscar oportunidades en el nuevo proyecto de Acceso a la Justicia para **apoyar a los órganos independientes que llevan a cabo un seguimiento de los avances y hacen que los datos sean más accesibles al público.**
- 2) Recomendación – apoyar la profesionalización de la administración pública: Aumentar los incentivos relacionados con los procesos y la protección de la administración pública para apoyar la profesionalización. **Dar prioridad a las instituciones que tienen una relación directa con los factores de violencia y conflicto.** Por ejemplo, el Instituto de la Propiedad a nivel nacional y local (relacionado con la tenencia de la tierra), COPECO (relacionado con el cambio climático, la gestión y mitigación de desastres naturales y la escasez de recursos), entre otros. Utilizar estos modelos para poner a prueba los enfoques y aprender para su futura réplica.

Según lo observado por el equipo durante la recopilación de datos, en Honduras es habitual que cuando un nuevo partido político gana la presidencia, despida al personal de la administración anterior que trabaja en las oficinas públicas para crear plazas y recompensar a los simpatizantes del partido con puestos de trabajo. Esta administración no sólo está despidiendo a personal administrativo y de gerencia con experiencia, sino también a aquellos con profundos conocimientos técnicos. Esta dinámica perpetúa que la capacidad institucional pública se agote cada vez que un nuevo partido político llega al poder. Para USAID y otros, esto implica pérdidas significativas de capacidad institucional y relaciones de confianza forjadas a lo largo del tiempo.

El equipo también se enteró de la deducción automática del 3 al 5 por ciento de los salarios de los empleados públicos que va directamente al partido político, perpetuando los ciclos de clientelismo. En el momento de la recogida de datos, los empleados recibían avisos sobre el importe de las deducciones de sus sueldos.

**Programación a nivel local:**

- 1) Recomendación – ampliar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas: Identificar, replicar y contextualizar **el acceso exitoso a la justicia, reduciendo la impunidad y apoyando los programas de transparencia y rendición de cuentas a nivel local**

Entre los ejemplos de éxitos que podrían contextualizarse para su aplicación local se encuentran los siguientes:

- Lecciones de los **observatorios de la violencia** a nivel nacional y local para aumentar la coordinación, el intercambio de datos y la capacidad técnica entre la policía, los Ministerios Públicos y los actores de la justicia. El modelo también fomenta el intercambio de información y la colaboración con el mundo académico y la sociedad civil.
  - Repetir los modelos de responsabilidad social que han tenido éxito, adaptando estrategias de comunicación similares y una mayor capacidad técnica a los contextos locales. Por ejemplo, la campaña del **CNA's de "¿Dónde está el dinero?"**. Este enfoque se centra en temas específicos de corrupción para aumentar la rendición de cuentas y transmitir el mensaje anticorrupción de una manera que repercute en la vida cotidiana de las personas.
  - Elementos del modelo **EuroJUSTICIA que han tenido éxito con la inclusión**, señalando que el modelo podría hacer más para involucrar e impulsar a los responsables de la toma de decisiones de alto nivel a actuar.
- 2) [Recomendación – explorar las oportunidades de aplicación de la ley de carrera municipal y fortalecer los consejos municipales de transparencia](#): Ampliar la práctica de contratación y retención de personal calificado de acuerdo con la ley de carrera municipal para crear modelos de gobernanza sostenibles que puedan ser duplicados a nivel nacional.

### **DINÁMICA: NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA (PREOCUPACIÓN INMEDIATA)**

**TOC:** Si se aumenta la comprensión de los derechos y el acceso para exigirlos, Y se aumenta la capacidad de respuesta del Estado, y la visibilidad de una mejor respuesta Y Si se aumenta el respeto por el valor de la vida humana y los derechos humanos (a través de las instituciones formales e informales - familias, escuelas, iglesia) ENTONCES se reducirá la cultura de la impunidad Y disminuirá la violencia de género, doméstica, comunitaria y contra los grupos de riesgo.

#### **Apalancar recursos**

- 1) [Recomendación – apoyar a la policía en la respuesta a la GBV](#): Apoyar los **enfoques integrales dentro de la policía para responder a la GBV** utilizando el enfoque centrado en la sobreviviente, especialmente en las zonas donde no hay MAIE o *Ciudad Mujer*. Esto también podría integrarse en la formación básica de la Academia de Policía.
- 2) [Recomendación – aprovechar el poder de la voz del USG](#): **Llamar la atención sobre los casos que destacan el comportamiento misógino**, en particular los que se producen en el gobierno nacional, con la intención de fomentar un cambio de comportamiento a largo plazo.

A pesar de la reciente elección de la primera mujer presidenta en Honduras, los comportamientos violentos y misóginos se reproducen en los niveles más altos del gobierno. Antes de que Xiomara Castro tomara posesión de su cargo, se produjeron altercados físicos muy publicitados en el Congreso Nacional entre facciones rivales del partido LIBRE. Desde entonces, varias diputadas han presentado denuncias contra colegas masculinos<sup>76</sup> mientras que otras han sido objeto de campañas de difamación y amenazas contra ellas y sus hijas.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> La Prensa (2022). "Diputada del PN denunciara a Bartolo Fuentes por violencia contra mujer." <https://www.laprensa.hn/honduras/diputada-del-pn-denunciara-a-bartolo-fuentes-por-violencia-contra-la-mujer-BE8336506>

<sup>77</sup> Contra Corriente (2022). "Acuerdos en el Congreso hechos por hombres retratan la exclusión de mujeres y violencia política." <https://contracorriente.red/2022/02/15/acuerdos-en-el-congreso-hechos-por-hombres-retratan-la-exclusion-de-mujeres-y-violencia-politica/>

## **Programación a nivel local**

- 1) Recomendación – reforzar los derechos humanos y el valor de la vida humana: Trabajar a través **de la comunidad escolar** -alumnos, profesores, padres y comunidades- **para concienciar sobre los derechos y sobre cómo actuar para salvaguardar y valorar la vida humana.** Adoptar un enfoque integral y de múltiples interesados para fomentar el **cambio de comportamiento desde una edad temprana.** Construir mecanismos de protección en la comunidad escolar para hacer frente a la violencia contra los niños, las mujeres, los LGBTQI+ y otras poblaciones vulnerables.

En muchas entrevistas, la normalización de la violencia se describió como "cultural", requiriendo un cambio a largo plazo de actitudes y comportamientos profundamente arraigados. Muchos señalaron las fallas del sistema educativo, pero también consideraron que un enfoque basado en las escuelas es la mejor opción para fomentar este cambio.

El equipo escuchó opiniones encontradas sobre el programa GREAT (Educación y formación sobre la resistencia a las maras). El programa GREAT es implementado por la HPN y hace que los oficiales de policía acudan a las escuelas para impartir planes de estudio diseñados para reducir la violencia juvenil y evitar que los jóvenes se unan a las maras.

Algunos encuestados en el Occidente querían más recursos para poder ampliar GREAT a otras escuelas. Sin embargo, en el Norte, donde las maras están más generalizadas y controlan muchos aspectos de la vida cotidiana, el equipo escuchó la preocupación de que GREAT etiqueta a los miembros de las maras como "malos", estigmatizando así a los niños relacionados con los miembros de las maras. Sería beneficioso evitar este tipo de etiquetas cuando se habla al público de estas zonas. Es necesario ajustar los mensajes de un enfoque criminal a uno social, reconociendo que los miembros de las maras son una parte integral de estas comunidades. Son miembros de la familia, amigos y vecinos. También pueden proporcionar seguridad física y económica y servir de gobierno de facto. Involucrar intencionadamente a las personas que podrían no participar activamente y evitar estigmatizar a los hijos de los miembros de las maras, profundizar en las divisiones de la comunidad y reducir la legitimidad tanto de las escuelas como de la policía. Los encuestados también sugirieron replantearse los programas de reducción de las maras y de prevención de la violencia diseñados específicamente para la población de mayor riesgo, incluidas las unidades familiares, lo que ayudaría a llegar a las personas más directamente vinculadas a las maras.

Muchos jóvenes lamentaron que los parques creados bajo el gobierno anterior ya no son seguros para ellos. Algunos incluso describieron este hecho como un incumplimiento del contrato social. Resultaría beneficioso un apoyo adicional en las comunidades mediante la recuperación o la creación de espacios seguros donde los niños y los jóvenes puedan recibir servicios y disfrutar de su tiempo libre de forma segura. Aunque esto se hace principalmente a través de la comunidad internacional de donantes, a efectos de sostenibilidad es fundamental reducir los costos operativos de dichos espacios y ampliar las alianzas con actores locales permanentes. Explorar nuevas ubicaciones potenciales para el modelo de Centros de Extensión (OC) financiados por USAID en la región occidental.

- 2) Recomendación – Facilitar la recuperación del trauma: Además de **mejorar los mecanismos de protección** para las poblaciones vulnerables, **facilitar el acceso a la superación de los traumas y a otro tipo de apoyo psicosocial** para las familias, especialmente para los niños pequeños, con el fin de contrarrestar los efectos de haber presenciado y sufrido la violencia en sus hogares y comunidades.
- 3) Recomendación – contextualizar todas las intervenciones de la programación: En toda la cartera

de la Misión, las intervenciones deben estar muy contextualizadas, por ejemplo, teniendo en cuenta la profunda violencia doméstica en Occidente, o la violencia contra los migrantes en Choluteca, y **basándose en una comprensión comunitaria diversa y tolerante de la violencia.**

Integrar las consultas dirigidas por la comunidad que involucren a las poblaciones vulnerables en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las actividades. Incluir intencionadamente a las poblaciones vulnerables y reconocer que las maras y sus familias forman parte de muchas comunidades. Revisar los resultados del *Estudio sobre la Desvinculación de las Maras*<sup>78</sup> e integrar el aprendizaje y las recomendaciones en la próxima programación. Reconocer que las maras son una identidad y que centrarse únicamente en la desvinculación podría no ser eficaz.

- 4) Recomendación – ampliar el aprendizaje y las buenas prácticas: Identificar, duplicar y contextualizar los **enfoques exitosos de reducción de la violencia** y los modelos que promueven el **acceso a los servicios y la protección de las poblaciones en riesgo** (mujeres, niños y LGBTQI+) en las zonas rurales. Retirar los enfoques que no son efectivos.

Cuando surjan problemas de implementación, tomar medidas correctivas. Por ejemplo, la Misión proporciona apoyo técnico a Ciudad Mujer, un programa para mujeres implementado por el GOH. Recientemente se ha descubierto que Ciudad Mujer excluye a miembros de la comunidad LGBTQI+, a hombres y a quienes se considera que tienen una afiliación política diferente a la del partido en el poder. Esto hace que las intervenciones sean menos efectivas y que sea poco probable que se produzca un cambio de comportamiento a largo plazo.

Durante las entrevistas, el equipo también se enteró de que existe una considerable competencia en la financiación de la GBV. Los socios ejecutores deben tener en cuenta esta dinámica a la hora de conceder subvenciones. Los beneficiarios deben demostrar enfoques sistemáticos con inclusión significativa de LGBTQI+ y hombres. El equipo escuchó durante el trabajo de campo en San Pedro Sula y La Ceiba que no se debe asumir que las organizaciones que defienden a las mujeres comparten necesariamente una agenda con las que defienden los derechos de las personas LGBTQI+.

En base a lo aprendido, priorizar la ubicación de nuevos Centros Integrados de Justicia Penal (CEIN) en zonas con recursos y voluntad política limitados.

- 5) Recomendación – difundir mensajes de cambio de comportamiento contextualizados: Utilizar mensajes **adecuados al contexto, a través de los medios de comunicación tradicionales y sociales, para llegar a diversas audiencias.** El acceso digital, la geografía y el perfil demográfico de la audiencia deseada pueden ser factores para tener en cuenta a la hora de adaptar los mensajes. **Invertir en equipamiento, registro y programación de radios comunitarias en Occidente.** Asociarse con la industria, por ejemplo, las maquiladoras en el Norte, para promover mensajes sobre los derechos laborales y mitigación de la violencia, especialmente la GBV.

Adaptar tanto los mensajes como el modo de comunicación para llegar al público objetivo. Por ejemplo, en Occidente, fuera de las zonas urbanas, las comunidades remotas dependen de la radio comunitaria para obtener información. Incluso cuando hay acceso digital, lo utilizan principalmente los jóvenes, quienes mencionaron repetidamente el uso de Facebook e Instagram. Unas pocas organizaciones que se reunieron con el equipo en el Occidente tienen algunos equipos de radio, pero no pueden transmitir por diversas razones, como la falta de acceso, personal y recursos. Muy pocas personas dicen ver televisión. Apoyar a

---

<sup>78</sup> USAID (2020). A Study of Gang Disengagement in Honduras. [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00X9GP.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X9GP.pdf)

las radios comunitarias de Occidente para que elaboren y emitan una programación en torno a la inclusión y los derechos de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad con el objetivo de ayudar a los oyentes a comprender y exigir sus derechos y reducir la estigmatización de los grupos vulnerables.

En el Norte, la gente tendía a confiar en las cadenas de televisión locales por encima de las noticias nacionales. El equipo se enteró de una mayor penetración de los medios sociales en las zonas urbanas del Norte y en los alrededores de Tegucigalpa. Muchos utilizan WhatsApp para la mensajería y sus plataformas favoritas para recopilar información son Facebook, Instagram y TikTok, con la salvedad de que la necesidad de acceder a los datos de los usuarios puede disuadirlos. Utilizar el análisis de datos para rastrear su uso.

Buscar oportunidades para trabajar con el sector privado en campañas de derechos laborales y prevención de la violencia, con un enfoque específico en la GBV.

- 6) Recomendación – trabajar con los comités de seguridad ciudadana: A medida que se vayan formando comités de seguridad ciudadana, trabajar con ellos **para crear modelos de prácticas y respuestas inclusivas, transparentes, no violentas y responsables** a las necesidades locales.

Los primeros comités de seguridad ciudadana se están formando en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Existe la oportunidad de trabajar con estas entidades nuevas para establecer modelos positivos de inclusión, transparencia y rendición de cuentas que puedan duplicarse.

- 7) Recomendación – contextualizar el papel de la iglesia: Comprender los diferentes papeles que puede desempeñar la iglesia, como **defensora potencial de la paz**, pero también en la **perpetuación de dinámicas de exclusión y machismo**, marginando y alimentando aún más la violencia contra las mujeres, niños y LGBTQI+. Tener esto en cuenta en todos los programas que se realicen con socios religiosos para evitar mensajes contradictorios.

## **DINÁMICA: DISPUTAS POR LA TIERRA (PREOCUPACIÓN INMEDIATA)**

**TOC:** *Si las comunidades, incluidas las poblaciones indígenas, las instituciones administrativas y legales del gobierno, el sector privado y otros actores, respetan y hacen cumplir los títulos de propiedad de la tierra, Y si se fortalecen las capacidades de los jueces, magistrados y fiscales para que actúen con independencia en la ejecución de la ley, incluido el Convenio 169, ENTONCES disminuirán las disputas violentas por la tierra, la usurpación de tierras y los abusos contra la tierra y los derechos humanos, PORQUE los derechos a la tierra se harán cumplir de manera transparente, justa y responsable.*

### **Apalancar recursos:**

- 1) Recomendación – integrar los mensajes de adhesión al Convenio ILO 169: Coordinar con otras agencias del USG para integrar mensajes de adhesión al Convenio ILO 169 y de respeto a los derechos humanos **al reunirse con las contrapartes hondureñas**.

### **Programación a nivel nacional:**

- 1) Recomendación – Aprobación de la Ley de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC): **Facilitar la aprobación de una ley sobre el FPIC** en estrecha colaboración con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el Congreso Nacional y otras partes interesadas. **Involucrar a los actores del sector privado nacional e internacional** para que adopten y se adhieran al FPIC.

Honduras ratificó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ILO 169) en 1995. Como signatario, el

Convenio está integrado en la legislación hondureña. A pesar de esto, el marco no se está cumpliendo, y muchas personas que se reunieron con el equipo hablaron de la importancia de desarrollar reglamentos específicos al requisito del FPIC, y la claridad de lo que constituye el cumplimiento del mandato del FPIC. En muchas situaciones, el requisito del FPIC se ignora por completo, o las municipalidades utilizan un foro municipal como medio para satisfacer el requisito, lo cual no ocurre.

- 2) Recomendación – mejorar las protecciones: Reforzar la protección de los defensores de los **derechos humanos y del medio ambiente.**

En la actualidad no existen protecciones efectivas para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Incluso cuando solicitan protección, a menudo no se les proporciona (véanse las recomendaciones de *Cierre del Espacio Cívico para mejorar los mecanismos de protección estatales y no estatales.*)

**Programación a nivel local (en caso de surgir oportunidades, algunas de estas intervenciones de programación también pueden ser apropiadas a nivel nacional):**

- 1) Recomendación – fortalecer la capacidad de los interesados para aplicar el Convenio ILO 169: Trabajar con una amplia gama de partes interesadas, por ejemplo, entidades de titulación de tierras, municipalidades, defensores, jueces locales, magistrados y fiscales para **aplicar y hacer cumplir el Convenio 169.** Prestar especial atención al cumplimiento significativo del FPIC.
- 2) Recomendación – apoyar la resolución pacífica de disputas territoriales: Trabajar con las empresas, las comunidades y las autoridades para **reforzar los mecanismos de resolución pacífica** de conflictos territoriales y mejorar la educación y la vigilancia del **cumplimiento empresarial de las normas de derechos humanos.** Mejorar la presencia civil del gobierno en las zonas con altos índices de disputas por la tierra.

Buscar oportunidades para facilitar el acceso a la justicia a través de mecanismos formales e informales de resolución de conflictos para las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Trabajar con las Cámaras de Comercio y las autoridades locales para gestionar y resolver enfrentamientos, incluidos los relacionados con proyectos turísticos y ZEDEs. Utilizar la auditoría social y otros mecanismos para crear una base de evidencias en torno a las disputas territoriales que pueda ser utilizada por las organizaciones de sociedad civil para incidir en el gobierno.

- 3) Recomendación – promover la defensa pacífica por parte de las ONG: Trabajar con las ONG pertinentes para apoyar la **auditoría social** de la resolución de disputas territoriales y promover la **defensa pacífica y el involucramiento** con los derechos humanos, medioambientales y laborales. En la medida de lo posible, integrar mensajes adecuados al contexto sobre el **derecho de las mujeres a poseer tierras.**

Trabajar con la sociedad civil para defender y promover la rendición de cuentas sin estimular la confrontación. Estudiar la posibilidad de vincular a las organizaciones que se ocupan de temas similares para desarrollar redes y unificar la promoción. Fomentar, especialmente en las zonas rurales, la defensa inclusiva de los derechos sobre la tierra de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y de las mujeres.

- 4) Recomendación – ampliar los modelos de colaboración entre la comunidad y el sector privado: En colaboración con el sector privado y los agentes comunitarios, identificar y difundir modelos de **iniciativas inclusivas de éxito que beneficien mutuamente al sector privado y a las comunidades**

## **DINÁMICA: CAMBIO CLIMÁTICO Y ESCASEZ DE RECURSOS (PREOCUPACIÓN INMEDIATA / PREOCUPACIÓN)**

**TOC:** Si el gobierno aplica enfoques transparentes, oportunos y técnicamente dirigidos para promover la adaptación y mitigación del clima y la respuesta ante emergencias Y SI se reducen las decisiones por motivos políticos, ENTONCES la respuesta será más eficaz Y se mejorará la gestión de los recursos.

### **Apalancar recursos**

- 1) Recomendación (preocupación inmediata) – planificar para una inminente inseguridad alimentaria: Trabajar con la BHA y el gobierno de Honduras para desarrollar un plan para las zonas que puedan experimentar una alta inseguridad alimentaria.

Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la gente habló de la escasez de alimentos debido al aumento en los precios de la comida, el combustible, los insumos agrícolas y otras necesidades. Existe una percepción generalizada de inseguridad alimentaria inminente.

- 2) Recomendación (preocupación inmediata) – fortalecer la preparación y respuesta interinstitucional: Fortalecer la coordinación con la **respuesta y la preparación de emergencia de USAID/DOD**. Seguir coordinando con los Proyectos de Asistencia Humanitaria (HAP) del DOD para una preparación más amplia ante las catástrofes y los esfuerzos de reducción del riesgo climático de la USAID.
- 3) Recomendación (preocupación) – apoyar la aprobación del reglamento de la ley del agua: Participar en los esfuerzos de los donantes para aprobar el reglamento de la ley del agua de 2009. Crear oportunidades para promover su implementación.

### **Nivel-nacional**

- 1) Recomendación (preocupación inmediata) – mejorar la infraestructura de mitigación de inundaciones en el Valle de Sula: Se necesita urgentemente la restauración, el refuerzo y la restauración de la infraestructura de mitigación de las inundaciones en el Valle de Sula.

Al trabajar en Cortés, el equipo escuchó repetidamente la preocupación de que la destrucción causada por Eta e Iota no ha sido reparada, dejando a Cortés aún más vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos que en 2020. Las infraestructuras existentes para mitigar las inundaciones también necesitan repararse con urgencia. Dadas estas condiciones, los nuevos fenómenos naturales tendrán un mayor impacto en las poblaciones ya vulnerables, pudiendo desencadenar conflictos sociales y violencia.

- 2) Recomendación (preocupación) – apoyar los protocolos operativos y la toma de decisiones: Trabajar con la *Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)* para facilitar el desarrollo de protocolos de nivel operativo en respuesta a situaciones de emergencia con el nuevo *Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)*. Ayudar a mejorar los sistemas de información para informar las decisiones tomadas a nivel nacional sobre el uso de la tierra, la hidrología y los suelos.

Brindar apoyo a Red Humanitaria para documentar lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones sobre la respuesta a situaciones de emergencia bajo el nuevo SINAGER. La información derivada de los ejemplos de Eta, Iota, COVID-19 y otras emergencias puede informar el desarrollo de los protocolos de nivel operativo. Fortalecer la capacidad del SINAGER para evaluar daños y responder a emergencias de manera oportuna.

- 3) Recomendación (preocupación) - integración de la reducción del riesgo climático: Apoyar los esfuerzos de COPECO para integrar la reducción de riesgos climáticos como herramienta de prevención, aumentando la capacidad de adaptación de las comunidades.

### **Nivel-local**

- 1) Recomendación (preocupación) – apoyar la resolución de conflictos sobre el agua: Fortalecer las juntas de agua y las autoridades municipales del agua para mejorar **la asignación informada del agua, mantener su calidad y proteger las fuentes de agua** para garantizar los recursos hídricos en el futuro, y resolver las disputas sobre el agua a nivel comunitario.
- 2) Recomendación (preocupación) – fomentar alianzas para la gestión de los recursos naturales: Buscar oportunidades en la programación de la Misión para apoyar o crear alianzas intersectoriales y otros foros para gestionar y mitigar el cambio climático y las tensiones sobre los recursos.

Apoyar a las municipalidades y a las OSC en la protección de los ecosistemas para la adaptación climática. Las particularidades de las tensiones serán diferentes de un lugar a otro.

### **DINÁMICA: CIERRE DEL ESPACIO CÍVICO (PREOCUPACIÓN)**

TOC: SI se adoptan medidas de protección inclusivas y eficaces para apoyar a los defensores de los derechos humanos, las voces disidentes en los medios de comunicación y otros actores independientes, Y SI se mantiene la independencia de estas medidas, ENTONCES se abrirán oportunidades para que las voces críticas ejerzan sus libertades y exijan la rendición de cuentas y la democracia.

### **Apalancar recursos:**

- 1) Recomendación – fortalecer los mecanismos de protección del estado: Explorar las oportunidades de trabajar en el marco del proyecto **regional de FUPAD o del mecanismo Regional Anticorrupción** para mejorar las capacidades estatales existentes para supervisar y proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente y otras personas bajo amenaza.
- 2) Recomendación - Utilizar los hallazgos de la Evaluación del Ecosistema Digital de los Países (DECA) para comprender e informar sobre las respuestas a los patrones de violencia digital y las brechas digitales.

### **Programación a nivel nacional y local:**

- 1) Recomendación – reforzar los mecanismos de protección no estatales y crear una base de evidencias: Contextualizar y mejorar la protección no estatal de las personas y organizaciones amenazadas por desafiar al poder o ser testigos de abusos de poder.

Las oportunidades pueden incluir el suministro de recursos y apoyo a las organizaciones que protegen a los medios independientes y a las organizaciones que auditan a actores poderosos. Explorar el trabajo a través de la Asociación de la Prensa de Honduras para proporcionar formación sobre seguridad y asistencia legal a los periodistas bajo amenaza.

En caso de déficit en la capacidad de protección, explorar la viabilidad de crear un mecanismo independiente de protección de la sociedad civil para atender las denuncias, proporcionar asistencia

jurídica, ofrecer litigios gratuitos, apoyar la ciberseguridad y ofrecer servicios psicosociales (o referir a terceros).

Crear una base de evidencia centralizada de abusos contra los derechos humanos ampliando el alcance del Observatorio de la Violencia para incluir el seguimiento de las violaciones contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas bajo amenaza.

- 2) **Recomendación – apoyar la profesionalización de los medios:** Apoyar las iniciativas de la sociedad civil para **supervisar las normas éticas y el contenido neutral** de la cobertura mediática. Explorar las buenas prácticas de comprobación de hechos en los medios de comunicación tradicionales y sociales en las zonas urbanas. Integrar la **verificación de los hechos en la formación de periodistas**.
- 3) **Recomendación - alimentar las voces de los medios de comunicación independientes:** Facilitar **oportunidades para los medios emergentes** y formar a los periodistas y editores en materia de ética. Fortalecer el Consejo de Ética del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para que pueda realizar una **supervisión significativa de la ética de los medios**.

Por ley, los periodistas hondureños están obligados a pagar una cuota mensual y a afiliarse al CPH. En principio, la organización se encarga de mantener la contratación profesional y las normas éticas en el periodismo. Sin embargo, las afiliaciones políticas profundamente arraigadas entre los periodistas han limitado su eficacia a la hora de aplicar y hacer cumplir las normas éticas.<sup>79</sup>

- 4) **Recomendación – apoyar un espacio digital seguro:** Apoyar los esfuerzos para defender y crear una legislación que **proteja contra los daños en los espacios digitales, incluida la GBV**. Apoyar a las unidades de respuesta designadas con asistencia técnica y recursos.

### **DINÁMICA: JÓVENES PRIVADOS DE SUS DERECHOS (PREOCUPACIÓN)**

**TOC:** SI los jóvenes reciben oportunidades socioeconómicas mayores, significativas, apropiadas al contexto y dignas, Y SI los jóvenes experimentan menor estigmatización, criminalización y victimización en las instituciones y la sociedad, Y SI los jóvenes se comportan de manera saludable, ENTONCES la participación de los jóvenes en la economía informal, la economía criminal y la migración disminuirá PORQUE los jóvenes experimentarán mayor confianza y esperanza en su futuro en Honduras.

#### **Apalancar recursos:**

- 1) **Recomendación – fomentar la inversión en educación:** Animar al Gobierno y al sector privado a **augmentar la inversión y las acciones tangibles en la educación formal e informal**. Colaborar con el programa de pequeñas subvenciones del DOD para mejorar la infraestructura educativa.

El plan de desarrollo del GOH, recientemente publicado, prioriza el acceso y la permanencia en el sistema educativo<sup>80</sup>. En la actualidad, se calcula que 2 millones<sup>81</sup> de niños y jóvenes hondureños siguen sin ir a la escuela.

<sup>79</sup> Media Landscapes (2022). Honduras. <https://medialandscapes.org/country/honduras/organisations/journalist-associations>

<sup>80</sup> Secretaría de Planificación Estratégica. Prioridades de Gobierno 2022-2026. Mayo 2022

<sup>81</sup> Transformemos Honduras (2021). “Dos millones de estudiantes son excluidos del sistema educativo por causa de la pandemia.” <http://transformemoshonduras.com/org/2021/10/12/honduras-dos-millones-de-estudiantes-son-excluidos-del-sistema-educativo-por-causa-de-la-pandemia/>

- 2) Recomendación – dirigirse a los jóvenes con programas de comportamientos saludables: Buscar oportunidades para asociarse con otros donantes para abordar un **enfoque contextualizado de la salud sexual y reproductiva y el abuso de alcohol y drogas**. Cuando sea posible, integrar elementos de salud/comportamientos positivos (por ejemplo, no consumir alcohol y drogas) en las actividades actuales de USAID.

### **Programación a nivel nacional y local:**

- 1) Recomendación - involucrar a los jóvenes en todos los aspectos de la programación: **Cultivar líderes juveniles e involucrar a los jóvenes como ejecutores, visionarios y en el seguimiento de las actividades**. Tener en cuenta las necesidades especiales de los jóvenes, en particular de las niñas y las mujeres jóvenes, para que puedan participar de manera significativa.

Muchos jóvenes están animados y quieren ser agentes de su propio cambio. Algunos de ellos, que se reunieron con el equipo, describieron las actividades de USAID como diseñadas y ejecutadas por adultos, percibiendo que los jóvenes eran vistos sólo como un indicador para tener en cuenta. Solicitaron a USAID un cambio hacia actividades centradas en los jóvenes, diseñadas, ejecutadas, supervisadas y evaluadas por ellos mismos.

Muchos jóvenes no trabajan ni van a la escuela. La mayoría de ellos son niñas. Comprender y tener en cuenta las necesidades especiales de los jóvenes, en particular de las niñas y las mujeres jóvenes, que corren el riesgo de ser ignoradas y tienen un mayor riesgo de sufrir abusos y trata. El equipo escuchó repetidamente sobre mujeres y niñas que se quedan embarazadas a temprana edad, algunas desde los 9 años, y muchas a los 16.

Los jóvenes pueden vivir en hogares encabezados por jóvenes y, si los padres han emigrado o no están disponibles por otros motivos, las niñas y mujeres jóvenes suelen asumir las responsabilidades del cuidado de los niños y los ancianos. Crear actividades que sean sensibles al contexto de los jóvenes. Por ejemplo, disponer de servicios de guardería y ofrecer otro tipo de apoyo para facilitar la participación de las niñas y los jóvenes.

- 2) Recomendación – hacer que los niños y jóvenes regresen a la escuela: Integrar el trabajo en múltiples niveles de entrada para que los estudiantes regresen a la escuela. Esto puede incluir el trabajo en la **política educativa y la elaboración de presupuestos, la difusión de información, el trabajo con las familias, los maestros y las comunidades, y la inversión en la infraestructura escolar** (véase el apalancamiento de recursos arriba).

Considerar becas para jóvenes de poblaciones marginadas para apoyar su regreso a la escuela. Incorporar las lecciones aprendidas de las actividades de becas anteriores y establecer salvaguardias y procesos que apoyen la transparencia en el proceso de otorgamiento.

- 3) Recomendación – centrarse en la colocación y los salarios justos: Cuando se trabaje con jóvenes, hay que centrarse en la colocación y los salarios justos tanto como en la formación. Ofrecer incentivos, por ejemplo, explorar opciones con el cumplimiento de los derechos humanos, a los empleadores para que contraten a los jóvenes. **Establecer vínculos entre el desarrollo de la fuerza laboral, la prevención de la violencia y las actividades para la creación de empleo**.

El equipo escuchó constantemente a los jóvenes hablar de la falta de oportunidades de empleo. Los

obstáculos al empleo incluyen la politización de la contratación, por ejemplo, en función de la afiliación a un partido, y los empleadores que exigen experiencia, lo que hace casi imposible que alguien con un título universitario encuentre un puesto. Otros obstáculos incluyen la estigmatización de los jóvenes si viven en los barrios equivocados, y una escasez general de oportunidades.

Algunos jóvenes planean quedarse y seguir buscando trabajo en Honduras. Otros esperan que una formación o un título universitario les permita tener más posibilidades de empleo cuando emigren. Varios jóvenes mencionaron la brecha existente entre la formación laboral y la obtención de un empleo con un salario justo. A la hora de diseñar las actividades de desarrollo de la fuerza laboral, hay que centrarse tanto en asegurar el empleo de los alumnos con un salario justo como en la capacitación misma.

### **DINÁMICA: TENSIONES ENTRE LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS (PREOCUPACIÓN)**

**TOC:** Si los sectores público y privado pueden acordar condiciones y principios mínimos para el diálogo, ENTONCES podrán establecer un nivel de confianza y acercarse a una agenda común PORQUE el entendimiento mutuo es necesario para acordar los beneficios compartidos de la estabilidad económica.

#### **Programación a nivel nacional:**

- 1) **Recomendación – identificar a los campeones del cambio:** Trabajar con representantes del sector privado dentro y fuera del gobierno para identificar **campeones que apoyen la alianza y fomenten la comunicación constructiva** entre el sector privado y el GOH.
- 2) **Recomendación – preparar el escenario para el diálogo:** Invertir recursos para identificar un mediador neutral y preparar el escenario para el diálogo.

Si en Honduras no hay nadie considerado como un mediador creíble y neutral por ambas partes, encuentre un mediador internacional. Organizaciones como el Centro para la Empresa Privada Internacional tienen amplia experiencia trabajando para identificar el valor compartido entre la buena gobernanza en los sectores público y privado en una variedad de contextos y pueden servir como un recurso útil para explorar posibles puntos de acceso.

- 3) **Recomendación – facilitar un proceso de diálogo:** Utilizar el actor neutral con credibilidad para facilitar y mediar en un proceso de diálogo, comenzar a **trabajar dentro del sector privado para crear una agenda unificada entre los sub-sectores**. Utilizar esta agenda del sector privado, trabajar con el sector privado y las contrapartes gubernamentales para negociar demandas y propuestas.

Antes de entablar negociaciones con el gobierno, trabajar con el sector privado, altamente fragmentado, para desarrollar una agenda del sector privado compartida. Una vez aclarado esto, apoyar la mediación entre el sector privado y el gobierno.

Si la Misión ha realizado una Evaluación del Panorama del Sector Privado (PSLA) o estudios similares, puede ayudar a informar cómo USAID puede utilizar su poder de convocatoria de manera más eficaz para apoyar un compromiso más constructivo. Esta información también podría ser útil para facilitar un papel más activo del sector privado en el alivio de las tensiones sociales y el cumplimiento de las normas internacionales.

#### **Programación a nivel nacional y local:**

- 1) Recomendación – apoyar la resolución de conflictos en el sector privado: Buscar oportunidades para hacer crecer los mecanismos de resolución de conflictos del sector privado para **abordar la fragmentación del sector privado, apoyar la gestión de recursos escasos y reducir las posibilidades de violencia**.

Algunas cámaras de comercio a nivel nacional y departamental han creado mecanismos para resolver conflictos del sector privado con diferentes niveles de éxito, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Olancho ha contratado un abogado para mediar en los conflictos laborales. A pesar de estos esfuerzos, el sector privado sigue estando muy fragmentado y afronta disputas sobre la mano de obra, la tierra y los recursos. Ofrecer apoyo a los mecanismos creíbles de resolución de conflictos y buscar oportunidades para reproducirlos.

- 2) Recomendación – crear oportunidades para la colaboración público-privada a nivel local: Fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado a nivel local.

Los temas de colaboración pueden incluir la gestión del agua, las oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral y las consultas comunitarias. Aunque esta recomendación se ofrece desde el punto de vista de las tensiones entre el sector público y el privado, tiene la oportunidad de influir también en otras dinámicas, abordando la falta de oportunidades para los jóvenes y otras personas mediante el desarrollo de la fuerza laboral y la gestión de recursos escasos como la energía y el agua.

### **DINÁMICA: ESPERANZA... PERO NO PARA SIEMPRE (MITIGANTE)**

- 1) Recomendación – alentar a la Presidenta Castro y a su Administración a hacer frente a las altas expectativas de cambio tras su elección: **Apoyar el liderazgo de Castro** en áreas como la educación, salud, pobreza, reducción, derechos de la mujer y GBV. Identificar oportunidades para trabajar con la presidenta en iniciativas clave de lucha contra la corrupción y otras de alto perfil, **acompañadas de una enérgica estrategia de comunicación**.

Las expectativas sobre el nuevo gobierno siguen siendo muy altas. Aunque muchas personas dijeron al equipo que 100 días no son suficientes para ver el cambio, la mayoría planteó su preocupación por que el gobierno no parece estar actuando en línea con las promesas hechas durante la campaña. De hecho, muchos consideran que la presidenta Xiomara Castro ni siquiera tiene el control del gobierno, sino que es su marido, Manuel Zelaya, quien toma las decisiones.

La gente quiere ver el cambio por el cual votó con la Presidenta Castro, pero no va a esperar indefinidamente. Hay una ventana de oportunidad para que el gobierno y el partido LIBRE den una señal clara de que la presidenta Castro está cumpliendo sus promesas electorales, pero esa ventana ya muestra señales de cerrarse. El equipo escuchó con frecuencia a personas que señalaban la marca de un año como un umbral, lo que significa que, si el gobierno no demuestra los cambios prometidos, la gente saldrá a las calles.

Además de la percepción de que Manuel Zelaya tiene el poder en lugar de Xiomara Castro, el equipo escuchó muchas preocupaciones sobre la repetición de administraciones pasadas, especialmente en relación con la corrupción y el nepotismo en los nombramientos políticos. Algunos de los temas que la gente observa con atención en las zonas urbanas son las próximas elecciones del Fiscal General y de los Magistrados de la Corte Suprema, y los avances en los derechos de las mujeres, como la legalización de la PAE.

- 2) Recomendación – crear espacios para el diálogo: Trabajar para **abrir espacios de diálogo entre**

*el gobierno y las poblaciones indígenas y afrodescendientes, los actores del sector privado y los grupos de defensa de los derechos de la mujer y LGBTQI+* para demostrar la inclusión y la participación prometidas durante la campaña.

En las zonas rurales, el equipo escuchó de las poblaciones indígenas y afrodescendientes que la inclusión prevista en el nuevo gobierno no se está materializando. Las esperanzas están puestas en las consultas con la presidenta y en la devolución de tierras ancestrales.

### **DINÁMICA: MIGRACIÓN Y REMESAS (MITIGANTE)**

- 1) *Recomendación – monitorear la migración en busca de signos de cambio:* Si la política exterior de EE.UU. u otros factores limitan la migración, vigilar que no haya signos de mayor insatisfacción con el gobierno de Honduras y otras consecuencias no deseadas. Explorar opciones para diseñar actividades que fomenten la inversión de las remesas.

A pesar de ser extremadamente peligrosa, la migración irregular se percibe como una de las pocas oportunidades económicas disponibles para la mayoría de las personas. Las remesas que se envían de vuelta se utilizan principalmente para el consumo, pero hasta cierto punto alivian la presión sobre el gobierno para proporcionar bienes y servicios básicos.

### **RECOMENDACIONES OPERATIVAS**

Además de las recomendaciones de programación y políticas, el equipo de evaluación ofrece las siguientes recomendaciones operativas a USAID/Honduras.

- 1) *Revisar, actualizar e implementar la Orden de la Misión sobre Sensibilidad al Conflicto.* Permitir ajustes a mitad de camino en respuesta a los cambios en la dinámica del conflicto, violencia y paz, incorporando la sensibilidad al conflicto en los procesos en curso de la Misión.

Revisar la sensibilidad al conflicto en los procesos en curso de la Misión, por ejemplo, revisiones de la cartera o de gestión del desempeño. En caso de cambios significativos en el contexto, programar una revisión independiente del análisis de conflictos y violencia y actuar sobre las implicaciones para la programación.

- 2) *Integrar un diseño, una ejecución, un seguimiento y una evaluación que tengan en cuenta los conflictos en toda la cartera de la Misión.* El **Centro de Integración Sensible al Conflicto (CSIH)** y los **mecanismos de seguimiento y evaluación** de la Misión pueden ayudar con un **diseño sensible al conflicto** y a monitorizar continuamente el contexto.
- 3) *Para apoyar la inclusión de diversas voces y perspectivas, considere la posibilidad de contratar a un asesor de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de USAID, establecer una junta o grupo asesor, y/o crear un programa de pasantías para los pueblos indígenas y afrodescendientes.*
- 4) *Insertar en los DOAG un lenguaje que identifique las acciones clave de los interlocutores gubernamentales relevantes en temas prioritarios para mejorar la rendición de cuentas.*
- 5) *Garantizar que los socios ejecutores lleven a cabo procesos de diligencia debida cuando se asocien con ONGs y organizaciones de defensa, no sólo con empresas privadas. Desarrollar una orden de la Misión sobre la diligencia debida para aclarar a quién está apoyando realmente USAID y evitar el riesgo de reputación y rendimiento.*

Algunas ONGs y organizaciones de defensa de los derechos en Honduras están profundamente politizadas y no siempre representan a las poblaciones que dicen representar. Con quién trabaja USAID puede enviar

importantes mensajes de apoyo y legitimidad.

- 6) Mejorar la coordinación entre las actividades de USAID que realizan en las mismas zonas y la coordinación entre las actividades de USAID y las de otras organizaciones.
- 7) Consultar con las comunidades para identificar objetivos compartidos y apoyar la sostenibilidad. Cuando sea posible, utilizar los recursos disponibles dentro de la comunidad.
- 8) Considerar horizontes de tiempo más largos (más allá de cinco años) y/o un seguimiento y evaluación a más largo plazo para los proyectos que buscan un cambio sistémico.

# ANEXO A: FOTOGRAFÍAS DEPARTAMENTALES

## Atlántida

### INTRODUCCIÓN

Atlántida se encuentra en el extremo sur del Caribe, en la costa norte de Honduras; limita con los departamentos de Cortés (oeste), Yoro (sur) y Colón (este). Atlántida tiene ocho municipios en su área de 4.251 kilómetros cuadrados, incluyendo dos puertos críticos en La Ceiba, su capital, y Tela. La economía del departamento, y la de La Ceiba y Tela, gira principalmente en torno al turismo. Al ser la cuarta ciudad más grande del país, La Ceiba sirve como centro regional de servicios gubernamentales para los departamentos vecinos como Islas de la Bahía (el único departamento insular de Honduras), Colón, Yoro y partes de Olancho.

A solo dos horas de distancia en automóvil de las ciudades del Valle de Sula, Tela es un destino pequeño pero popular que atrae a una población diversa de viajeros de fin de semana y vacaciones. Tela tiene varias grandes comunidades afrodescendientes dentro de sus límites: Triunfo de la Cruz, La Ensenada, Miami, San Juan y Tornabé. Con poco más de 106,000 habitantes, Tela depende en gran medida de la jurisdicción de La Ceiba para muchos de sus servicios gubernamentales. Tela experimentó un aumento en las tasas de homicidio entre 2016-2019 a medida que una mara urbana, la MS-13, ganó lentamente el control de ciertas áreas periurbanas de la ciudad, y más importante, del turismo relacionado con la playa de Tela. Con más presencia de maras en esta ciudad costera y dada su ubicación en un notorio corredor norteño de drogas, Tela ha experimentado no solo un aumento de la delincuencia y la violencia, sino también un incremento del consumo de drogas entre sus jóvenes. Sin embargo, el control de una mara sobre la mayoría de las actividades delictivas en Tela produce una percepción de menor inseguridad en comparación con las percibidas en La Ceiba.

La Ceiba, a sólo dos horas en automóvil de Tela y a un total de cuatro horas de la interconexión del Valle de Sula por la carretera CA5, tiene el doble de población que Tela. La Ceiba experimentó un crecimiento desestructurado en sus zonas periurbanas tras la devastación del huracán Mitch en 1999. La Ceiba también alberga dos importantes comunidades afrodescendientes, Sambo Creek y Corozal. A pesar de tener solo una quinta parte de la población de San Pedro Sula, en 2016 La Ceiba tenía una tasa de homicidios similar, de 120 por cada 100,000 habitantes; en 2019 se redujo a 56.6. La delincuencia y la violencia que ocurren en La Ceiba se derivan de la presencia de dos grandes maras-MS13 y Barrio 18. Además, es una ciudad conectada con Colón y Gracias a Dios, una ruta de tráfico de drogas; su ubicación en esta ruta explica una parte de la violencia en La Ceiba atribuida al control territorial entre las redes de narcotraficantes. La Ceiba también ha sido escenario de casos de alto perfil relacionados con la violencia de género (GBV) en los últimos tres años. Por ejemplo, un caso de agresión sexual contra una joven en 2019 impulsó protestas presenciales y campañas en redes sociales ([Todas Somos Alejandra](#)) contra la impunidad en los casos de GBV.

**Percepciones del USG y USAID.** En general, los encuestados de Atlántida tienen una percepción positiva del trabajo que realiza USAID. Sin embargo, tienen menos claridad sobre la cohesión de las intervenciones y la coherencia entre la diplomacia pública y el trabajo de desarrollo que realiza el USG en general. Existen algunas críticas sobre el carácter tenue de algunas de las intervenciones, en particular las relacionadas con la generación de empleo, el trabajo contra la GBV y el apoyo policial. El equipo escuchó a personas que esperaban acceder a los fondos de USAID y que criticaban los frecuentes cambios en los requisitos de información y reglamentación, así como la competitividad por el dinero de las subvenciones que generaba la concesión de estas para la región, lo que obligaba a que parte del trabajo se realizara en asociación con

organizaciones con visión y enfoques diferentes, lo que contribuye a que los resultados sean tensos. En cuanto al cumplimiento, se criticó a USAID por no apoyar el desarrollo organizativo de la sociedad civil en una región donde, para empezar, hay pocas organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las OSC luchan por conseguir oportunidades financieras de los donantes internacionales; sin embargo, muchas de ellas aún tienen dificultades para cumplir los múltiples requisitos para acceder a los fondos. En un caso, se describió que las intervenciones de USAID no reflejaban los objetivos y aspiraciones de la comunidad. Algunos representantes del sector privado comentaron la dispersión de las actividades entre múltiples ejecutores que buscan información de ellos y luego no proporcionan resultados concretos ni transmiten los resultados; también fueron muy críticos con el enfoque de los ejecutores de USAID en indicadores que no reflejan la sostenibilidad que necesitan estas intervenciones para fomentar el desarrollo en estas ciudades. Algunas personas consideraron que USAID excluyó a los participantes mayores de sus programas de desarrollo de mano de obra.

## **DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO**

**Clientelismo y cultura de impunidad.** El equipo escuchó repetidamente que los gobiernos municipales ignoran por completo las necesidades de estas dos ciudades y sus comunidades específicas. Por ejemplo, el exalcalde de Tela no quería comprometerse con los donantes internacionales o las diferentes juntas comunitarias conocidas como *patronatos*. Los residentes de una comunidad tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender su título comunal porque los empleados municipales registraron ventas de tierras específicamente prohibidas por dicho título. En el caso de La Ceiba, cuando la sociedad civil criticó la forma en que la municipalidad estaba administrando el albergue para mujeres, específicamente apropiándose de un automóvil donado por USAID para el albergue, la reacción fue cerrar la Oficina Municipal de la Mujer, afectando así directamente a las sobrevivientes de la GBV.

**Normalización de la violencia.** Tela y La Ceiba tienen una alta incidencia de violencia intrafamiliar, violencia doméstica y violencia contra personas LGBTQI+. Los encuestados mencionaron importantes dificultades para presentar una denuncia ante las autoridades policiales, lo que a menudo resulta en la revictimización del sobreviviente, el abandono del proceso penal, y/o el descrédito de la situación por parte de los equipos de emergencia y la policía. En los casos en que el sobreviviente se auto identifica como transgénero, la policía y la policía militar suelen ser los agresores, lo que invalida el derecho de la víctima a buscar justicia. Además, los servicios para los sobrevivientes en Tela son aún más difíciles, ya que tienen que buscar servicios (por ejemplo, de Medicina Forense) en La Ceiba, a dos horas de viaje en automóvil o cuatro horas en autobús.

El equipo escuchó sobre la violencia, la intimidación y el lenguaje agresivo utilizado por los miembros de los medios de comunicación impresos al entrevistar e informar sobre noticias relacionadas con la comunidad LGBTQI+. Muchas trabajadoras del sexo transgénero recurren a pagar a delincuentes para que las protejan de las maras que las obligan a vender drogas para ellas y describieron cómo la policía es cómplice de estas actividades delictivas. Muchos de los encuestados mencionaron el aumento de la violencia en el departamento y la impotencia o complicidad de la policía. Por ejemplo, el equipo oyó hablar de un individuo que era acosado por la mara en su barrio y de los pocos recursos que tenía para evitar ser reclutado por la fuerza o asesinado; tenía la clara intención de emigrar ilegalmente a España para escapar de esta situación.

La violencia en el departamento se percibe como algo normal; se acepta especialmente como algo cotidiano en los territorios que se disputan entre las maras. Esta percepción es generalizada y a menudo no reconocida por los encuestados cuando se les pregunta, la violencia se acepta como moneda de cambio, como consecuencia de las disputas territoriales y como resultado de la infracción de las medidas de control

impuestas por las maras. La posibilidad de una vida libre de violencia parece estar excluida en la percepción de los encuestados.

**Disputas por la tierra.** Muchos de los conflictos por la tierra en Atlántida involucran a comunidades afrodescendientes, comúnmente denominadas comunidades garífunas. Estas comunidades se rigen por títulos comunales ancestrales que a menudo restringen la venta de parcelas a los "ladinos" (personas no garífunas). Las disputas surgen cuando se presentan múltiples títulos de propiedad sobre el mismo terreno en las oficinas locales y las municipalidades venden tierras a empresas privadas del sector turístico. Cuando la comunidad busca una solución institucional a estas situaciones, se enfrenta a la indiferencia, la negligencia y/o la colusión, lo que les obliga a elevar sus quejas por la tierra a autoridades internacionales.

Las disputas por la tierra son menos conflictivas, pero igualmente desconcertantes, cuando la tierra es tomada por el crimen organizado; en estos casos, las víctimas no solicitan reparación institucional o legal debido a que temen de manera creíble por sus vidas. Varias de las organizaciones que se reunieron con el equipo expresaron su desconfianza hacia el gobierno y su marco de derechos humanos. Creen que el gobierno es cómplice de las desapariciones de los defensores de derechos humanos de la tierra, y negligente ante los reproches de estos grupos. La impunidad en torno a las disputas por la tierra y los casos no resueltos de los defensores genera entonces más invasión de tierras y resentimiento por parte de estas comunidades.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** El mercado laboral de Atlántida se centra en la industria del turismo. Con una economía en crisis durante y después de la pandemia del COVID-19, muchos jóvenes no pueden conseguir trabajo. Además, los jóvenes que residen en zonas periurbanas controladas por las maras son objeto de discriminación por parte de los empleadores y de criminalización por parte de la policía. La educación pública es deficiente, lo que se ha visto agravado por la pandemia. Los empleos a los que pueden acceder los jóvenes con pocos años de escolaridad más allá del sexto grado son empleos mal pagados y con alto riesgo o condiciones difíciles (por ejemplo, empresas de seguridad privada con turnos de 24 horas); este tipo de empleos no satisface las necesidades y las aspiraciones de los jóvenes, como señaló uno de los encuestados. Además, en sus comunidades, los niños y jóvenes son reclutados activamente por las maras, las organizaciones criminales y las redes de narcotráfico; la mayoría de las veces no tienen muchas opciones para negarse, impulsados por la desesperación o por las amenazas de que ellos y sus familias serán asesinados. La migración se convierte en la única opción para los jóvenes en esa situación.

## FACTORES MITIGANTES

En Atlántida, muchas familias dependen de las remesas para sobrevivir. Con uno o más familiares en Estados Unidos, España o México el envío de remesas a su familia en Honduras aporta un alivio económico en una zona donde la economía del turismo fue la más afectada por la pandemia del COVID-19, donde muchos negocios se vieron obligados a cerrar. Los encuestados mencionaron los altos precios del gas, el aumento en las facturas de electricidad, el elevado costo de la canasta básica y la pérdida de puestos de trabajo como las principales razones para considerar la emigración, que muchos ven como la única opción viable que les queda. Algunos encuestados mencionaron que podrían emigrar tan pronto como en los próximos cuatro meses.

Una abrumadora mayoría de los encuestados mencionó cómo su esperanza de un futuro mejor en Honduras había dependido del resultado de las recientes elecciones. Con la llegada de la presidenta Castro al poder, muchas de estas expectativas se han quedado muy cortas, ya que muchas de las promesas de campaña no parecen tener prioridad y muchas de las prácticas corruptas criticadas por LIBRE en otras administraciones se están repitiendo. Un sector de los encuestados expresó una gran preocupación por lo que denominaron "malas señales de advertencia" de la actual administración Castro, lo que aumenta su

frustración a corto plazo. Muchos de ellos citaron tan sólo cuatro meses, y hasta seis, para que su paciencia se mantuviera. Unas pocas organizaciones llegaron a mencionar que estaban dispuestas a luchar contra el gobierno de Castro en las calles si las promesas seguían sin cumplirse. Señalaron que ya habían protestado en las calles y que estaban dispuestos a hacerlo de nuevo.

## Choluteca

### INTRODUCCIÓN

Choluteca es el departamento más al sur de Honduras, con una costa en el Pacífico y una frontera compartida con Nicaragua. Desde el punto de vista socioeconómico, se caracteriza por un alto nivel de desempleo, la perpetua disputa por la tierra y la competencia por los limitados recursos hídricos y minerales. La intensidad de la competencia por el agua disminuye en la temporada de lluvias, pero el conflicto por la tierra está presente constantemente. La dinámica de la zona está marcada en gran medida por la presencia de grandes inversiones empresariales, como la minería de oro, el cultivo de camarones, la agroindustria a gran escala y la producción de energía (solar), así como la Zona Económica Especial Orquídea (ZEDE) en San Marcos de Colón. La ZEDE es una fuente de agua clave para la producción del valle y el consumo humano en los municipios costeros. Los principales centros de desarrollo comercial en la zona son San Marcos de Colón, El Corpus, Namasigue y Pespire. La ubicación geográfica de Choluteca la convierte además en un punto de tránsito de mercancías lícitas e ilícitas hacia El Salvador, Nicaragua y Catacamas, Olancho.

Choluteca es un punto de entrada crucial en Honduras para los migrantes de Haití, Cuba, Venezuela, África y Asia que están en tránsito hacia la frontera sur de los EE.UU., lo que también lo convierte en un centro de contrabando humano y trata de personas. Algunos lugareños participan en estas actividades, mientras que la policía local no dispone de recursos suficientes para responder eficazmente a la afluencia de inmigrantes, dejando a algunos expuestos a la explotación, el secuestro y la agresión sexual.

**Percepciones del USG.** Tradicionalmente, Choluteca no ha sido prioritario como receptor de la ayuda externa de EE.UU., y los encuestados compartieron la percepción de que Choluteca sólo está en el radar de la comunidad internacional tras los desastres naturales o los eventos migratorios importantes. Los encuestados conocían los beneficios de las alianzas de USAID en otras partes del país, y veían a la Zona Sur como un área con enormes recursos, potencial y capacidad humana. Los encuestados identificaron las necesidades locales en torno a las opciones de empleo significativo y las oportunidades educativas.

### DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

**Aseguramiento de la tierra.** La principal fuente de conflicto social de la que hablaron los encuestados en Choluteca fue la disputa por las tierras de producción agrícola entre las empresas y los miembros de las comunidades locales. Estos conflictos crecen hasta implicar a funcionarios del Estado (policía, administración y órganos judiciales) y a organizaciones no gubernamentales locales y a veces nacionales de defensa del medio ambiente o de los derechos humanos. Los encuestados identificaron enfrentamientos con la mayoría de las industrias presentes en Choluteca, destacando las confrontaciones por la minería del oro, la agroindustria, la energía/solar, el cultivo de camarón y la Zona Económica Especial del departamento.

Estos conflictos se manifiestan de diversas maneras. En algunos casos, las empresas pueden comprar tierras productivas o ampliar sus operaciones en zonas donde viven los agricultores locales y/o trabajan la tierra, de la que pueden ser propietarios o no. En otros casos, los agricultores pueden trasladarse a tierras productivas para cultivarlas cuando se considera que no están en uso. Las empresas pueden desalojarlos

con ayuda de seguridad privada o de la policía, ofrecerles pagos o llevarlos a los foros administrativos o legales locales para resolver sus disputas. Los encuestados señalaron que los procesos administrativos y legales a menudo se deciden rápidamente a favor de las grandes empresas, y los agricultores locales son desalojados o quedan atrapados en un limbo legal. Los encuestados comunicaron que los agricultores que interponen demandas contra las grandes empresas experimentan importantes retrasos en la justicia en comparación con ellas. La posibilidad de que las empresas paguen para evitar los procesos administrativos y legales incentiva a los “invasores profesionales” a buscar urbanizaciones planificadas para ocuparlas, lo que contribuye a aumentar la tensión y la desconfianza entre los funcionarios, el sector privado y los agricultores locales. Se llama a la policía para evacuar a las personas que han invadido.

Los encuestados comunicaron las tensiones de la comunidad por la percepción de un acceso desigual a la justicia y otras experiencias comunitarias de contaminación y trato explotador por parte de las empresas. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos que tratan de promover la rendición de cuentas aumentan inadvertidamente estas tensiones, a veces con la participación de los medios de comunicación, ya que organizan enfrentamientos entre la comunidad y las empresas consideradas culpables.

Durante la evaluación, el equipo se enteró de que existe una directriz de no utilizar la fuerza policial y tratar de mediar en los enfrentamientos. Este esfuerzo se ha visto incrementado por una fuerza laboral adicional traída desde Tegucigalpa. En general, los encuestados creen que la transición gubernamental ha contribuido a un aumento en las invasiones de tierras (por ocupantes ilegales) y a un aumento de la extorsión, ya que los oportunistas tratan de aprovecharse de la percepción de una disminución de las respuestas policiales contundentes.

**Cierre del espacio cívico y la normalización de la violencia.** La violencia se percibe como un elemento fijo del activismo cívico en Choluteca, especialmente para los activistas medioambientales y los que se enfrentan a intereses privados por violaciones de los derechos activistas. Los activistas medioambientales se enfrentan a amenazas y asesinatos selectivos por su trabajo (por ejemplo, el homicidio de Marvin Damián Castro Molina, un joven activista medioambiental en Pespire en 2020). El activismo cívico en Choluteca también sigue siendo polémico en sí mismo dentro de muchas comunidades. Las familias de estas comunidades dependen de las oportunidades de empleo creadas por la agroindustria y las corporaciones mineras, y las comunidades están fragmentadas sobre cómo responder a los daños ambientales y sociales creados por las empresas y su uso de tierras productivas. Se percibe que las élites locales se benefician al limitar la efectividad del activismo cívico y mantener este statu quo.

**Explotación de migrantes.** El crimen organizado en Choluteca se centra en gran medida en los esfuerzos por sacar provecho del flujo de migrantes desde la frontera nicaragüense, ya sea mediante la trata de personas o el contrabando. Esta población también está sujeta a un mayor riesgo de extorsión y violencia sexual, aunque en algunos casos el riesgo se ve atenuado por la necesidad de los traficantes de proteger su reputación una vez que los migrantes entran a su cuidado. Los más vulnerables a la trata y la explotación son los inmigrantes que no hablan español, como los procedentes de Haití, África o Asia.

**Oportunismo criminal.** La delincuencia tradicional no es un problema importante en comparación con las ciudades del norte de Honduras, pero se percibe un aumento en la extorsión y el narcotráfico, que suele coincidir con los envíos de productos falsificados y las redes de trata de personas. Los encuestados no mencionaron la frecuencia de las masacres en la región, lo que sugiere que la delincuencia organizada es más sofisticada y que hay menos guerras territoriales entre grupos. Los encuestados de Choluteca compartieron rumores sobre la llegada de mareros salvadoreños que buscaban esconderse en Choluteca

tras las declaraciones de política antimaras del presidente Nayib Bukele, pero éstas no estaban acompañadas de informes sobre el aumento de la delincuencia en el momento de las entrevistas.

**Clientelismo y cultura de impunidad.** El alcalde de Choluteca se encuentra actualmente en su cuarto mandato consecutivo, y los encuestados indicaron que esto se debe en gran medida a una fuerte clientela procedente de zonas marginadas de la ciudad con infraestructuras y servicios públicos deficientes. Los encuestados también comunicaron que la policía local a veces sirve de seguridad privada para las empresas, y que se considera que los procesos judiciales y administrativos locales operan en gran medida a favor de las grandes empresas.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los jóvenes de Choluteca se enfrentan a un elevado desempleo y están muy preocupados por la falta de oportunidades de movilidad social. Muchos jóvenes recurren a la migración como la única oportunidad que proporciona seguridad económica, aunque la fuerza de la economía ilícita en Choluteca también se considera una oportunidad para muchos jóvenes y desempleados.

**Tensiones latentes entre el sector público/privado.** Las empresas de Choluteca, en particular los productores de energía y la Zona Económica Especial de San Marcos de Colón, se enfrentan a una mayor incertidumbre con la postura más restrictiva del gobierno hacia el sector privado. El sector privado de Choluteca incluye inversión nacional e internacional, y los encuestados identificaron múltiples casos de inversionistas que se marcharon debido a los desafíos del entorno propicio para los negocios.

**Impactos del cambio climático y la escasez de recursos.** El acceso al agua es un desencadenante crítico del conflicto. Choluteca depende en gran medida de la agricultura y el gobierno central tiene poca capacidad para aplicar la política de gestión del agua. Incluso cuando hay suficiente agua, la forma en que se distribuye prioriza los intereses del sector privado (producción) a expensas del consumo humano. Las continuas sequías seguirán empujando a la gente a las ciudades y a los Estados Unidos. Los grupos ecologistas locales han luchado para frenar los supuestos daños al medio ambiente local por parte de las empresas, incluida la contaminación de las limitadas fuentes de agua. La industria de la energía solar de Choluteca representa una oportunidad para integrar la energía verde en la planificación energética.

## FACTORES MITIGANTES

La migración y las remesas constituyen un importante factor de mitigación de quejas contra el gobierno ante la falta de oportunidades económicas significativas y de prestación de servicios públicos. Además, la capacidad del sector privado para influir en los resultados locales y generar oportunidades económicas también es un factor mitigante; sin embargo, la influencia del sector privado es polémica cuando no logra involucrar a las comunidades de forma constructiva. Los encuestados citaron a la empresa camaronera FundeSur como ejemplo de una empresa que estableció efectivamente una relación positiva con la comunidad local.

## Colón

### INTRODUCCIÓN

Trujillo es la principal ciudad del departamento de Colón, situado en la costa caribeña del país. Las principales actividades económicas del departamento son el turismo y las grandes plantaciones, como la de aceite de palma, así como la minería y la ganadería. El departamento limita con Olancho, Yoro, Gracias a Dios y Atlántida. El departamento cuenta con 10 municipios, seis de ellos con acceso a la costa del Caribe. Es rico en recursos naturales, con 304,603 habitantes y 8,276 kilómetros cuadrados. La densidad

poblacional es baja, aproximadamente. 29.9 personas por kilómetro cuadrado. Se estima que más del 50 por ciento de la población vive en la pobreza y, según el Informe de Desarrollo Humano 2022, tiene una de las tasas más altas de abandono escolar junto con Yoro, Atlántida, Islas de la Bahía y Cortés.

La infraestructura pública en el departamento es limitada. La carretera que conecta La Ceiba, departamento de Atlántida, y Trujillo, principal ciudad de Colón, se terminó durante los años de 1980. Durante décadas, las actividades económicas se orientaron hacia el puerto de Trujillo, pero debido a la insuficiente infraestructura, el turismo se convirtió en la principal actividad de la región. Tocoa, municipio fronterizo de Trujillo, es un centro comercial del departamento. La reforma agraria de los años 70 distribuyó grandes porciones de territorio a cooperativas de agricultores con el objetivo de activar y diversificar la agricultura en el norte del país. Esto provocó una migración interna desde otras partes del país en busca de tierras. Los cambios en la ley de reforma agraria de los años 90 permitieron a las cooperativas de agricultores y a los municipios vender tierras a particulares, empresas nacionales e internacionales. Esto llevó a familias y empresas prominentes a acumular grandes propiedades de tierra, la mayoría de ellas dedicadas al cultivo de aceite de palma. También fue un periodo en el que las élites económicas consolidaron sus vínculos con el poder político tanto a nivel nacional como local; se caracterizó por el uso de las fuerzas de seguridad, especialmente las militares, para ejercer el control sobre los territorios.

El departamento también es un territorio estratégico para el tráfico internacional de drogas. Carteles nacionales vinculados a organizaciones internacionales de la droga controlan el departamento de Colón y sus conexiones con Gracias a Dios, Olancho, Atlántida y Cortés. Las luchas por la recuperación de tierras colectivas, la resistencia a los proyectos mineros e hidroeléctricos y la creciente presencia de grandes proyectos turísticos en tierras indígenas, junto con el control de los cárteles de la droga, han producido varios episodios de violencia en el departamento. A diferencia de otros departamentos, en Colón la violencia no está relacionada con la actividad de maras como la MS-13 y Barrio 18, por lo que no se han reportado extorsiones ni venta callejera de drogas en este departamento. Sin embargo, la violencia producida por los conflictos, entre y dentro de las comunidades, la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la participación de grupos criminales y empresas de seguridad privada son comunes. En 2014 se registraron 257 homicidios. Esta cifra disminuyó a 140 en 2017 y volvió a aumentar a 164 en 2019. El aumento de los homicidios reportados desde 2017 puede estar relacionado con un aumento de los conflictos socio-ambientales en la región. El departamento de Colón es altamente vulnerable a eventos naturales como huracanes y tormentas tropicales.

**Las percepciones de USAID son diversas.** Las comunidades garífunas de Trujillo perciben que los beneficios de los proyectos de USAID no están llegando a la comunidad porque USAID sólo trabaja con la municipalidad, que tiene objetivos diferentes a los de las comunidades. Las autoridades municipales, por su parte, esperan que USAID aumente sus inversiones en la región, ya que su presencia se redujo en los últimos cuatro años. El sector privado de Trujillo criticó la excesiva burocracia en los proyectos de USAID y la excesiva inversión en gastos de administración que parecen reducir los beneficios esperados para la población, en su opinión. Algunos encuestados perciben que los programas de USAID funcionan mejor cuando la financiación se entrega directamente a las organizaciones de sociedad civil. Expresaron su preocupación de que los recursos, debido a la corrupción, puedan perderse cuando se asignan a instituciones públicas. Algunos señalaron que la auditoría social promovida por los programas de USAID ha ayudado a identificar y reducir las dinámicas corruptas en el municipio. En general, USAID es bien vista y se espera que aumente su presencia en Trujillo. Esta percepción también fue compartida por las comunidades indígenas que nunca se han beneficiado de los programas de USAID.

## DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Los encuestados perciben que la corrupción y el clientelismo en Trujillo continuarán sin cambios. Esto afecta especialmente a las comunidades garífunas e indígenas al reducir el acceso a la justicia en lo que respecta a los conflictos por la tierra y el acceso a los servicios sociales y al aumentar la estigmatización y la criminalización. Por ejemplo, una comunidad se ha enfrentado a la represión de las fuerzas de justicia y seguridad en relación con los conflictos por la tierra; además, la comunidad está estigmatizada como violenta e insegura. Aunque las comunidades garífunas apoyaron al nuevo gobierno, no sienten que sus necesidades estén siendo atendidas y no se consideran parte del partido LIBRE. En consecuencia, se sienten utilizados y excluidos. La comunidad Pech compartió esta misma percepción debido a los altos niveles de exclusión política y social persistentes. Por ejemplo, mientras el equipo finalizaba el trabajo de campo, tuvo lugar una protesta liderada por Miriam Miranda, de la *Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)*; centrándose en la indiferencia del gobierno y del Ministerio Público ante lo que esta organización garífuna calificó como trato racista hacia las poblaciones indígenas. La protesta exigía acciones en contra de los asesinatos y desapariciones de líderes garífunas en los últimos dos años.

Algunos representantes del sector privado mencionaron que el clientelismo y la corrupción son las principales fuentes de conflictos actuales en el departamento y que las poderosas estructuras corruptas serán difíciles de combatir y cambiar. Un factor principal es la fuerte influencia de las organizaciones de narcotraficantes en la política local, ya que se esfuerzan por mantener el control territorial. El clientelismo también está produciendo conflictos dentro del partido político. La percepción general es que la corrupción y el clientelismo no serán reducidos por el nuevo gobierno porque están repitiendo las mismas prácticas clientelistas del gobierno anterior.

**Cierre del espacio cívico.** Las comunidades Garífunas y Pech de Trujillo no sienten que el nuevo gobierno esté cambiando la exclusión a la que se han enfrentado durante décadas. Perciben que, durante las elecciones, la campaña de Castro escuchaba a todos los grupos, pero después de las elecciones no hubo más comunicación con la presidenta. Los representantes de estas comunidades consideran que el nuevo gobierno utilizó a las comunidades indígenas para ganar las elecciones, pero no tiene capacidad ni interés en atender sus necesidades. Como declaró un líder garífuna, “sólo nos invitaron a bailar como parte de un festival cultural”. Para ambos grupos, la resistencia es la única forma de sobrevivir y eso incluye resistir y luchar contra el nuevo gobierno si no se satisfacen sus demandas.

**Normalización de la violencia.** Mientras que la violencia relacionada con la delincuencia es baja debido al control del crimen por parte de las organizaciones de narcotraficantes, otras formas de violencia (represión, enfrentamientos armados, asesinatos de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos) se perciben como algo normal debido a la intensidad de los conflictos de larga duración entre comunidades, empresas privadas y autoridades locales. Un líder de un movimiento campesino describió cómo el miedo a la represión y la violencia han cambiado todos los aspectos de la vida; ahora sienten que es una búsqueda diaria para protegerse a sí mismos y a la tierra. Las comunidades Pech mencionaron que tienen que estar preparadas, utilizando su propio comité de seguridad, para hacer frente a cualquier amenaza que llegue a su gente y a sus territorios. Estos “mecanismos alternativos de protección” están presentes tanto en las comunidades Garífunas como en las Pech, debido a la falta de presencia policial, acceso a la justicia y la existencia de grupos violentos (organizaciones criminales y empresas de seguridad privada) involucrados en los conflictos por la tierra. Los conflictos entre comunidades producidos por la fractura social también crean la percepción de que la autoprotección es la única alternativa en territorios altamente conflictivos.

**Aseguramiento de la tierra.** Las disputas por la tierra en Colón involucran a varios actores: Comunidades Garífunas, agricultores (locales y de otros departamentos), comunidades indígenas (Pech), empresas

nacionales propiedad de miembros de familias poderosas y adineradas, y empresas internacionales (minería, turismo). Según los líderes Garífunas y Pech, el respeto a los títulos de propiedad de la tierra está en el centro de todos los conflictos. Los líderes Garífunas de Cristales y Río Negro describieron conflictos entre los miembros de la comunidad y entre la comunidad y las empresas internacionales que desarrollan proyectos turísticos. Los líderes Garífunas explicaron que la mayoría de los conflictos son creados por miembros de la comunidad que venden terrenos a los “ladinos” (forasteros no Garífunas) que llegan a Trujillo. Los Garífunas creen que los “ladinos” que llegan a Trujillo están huyendo de sus problemas y traen consigo acciones ilícitas, delincuencia y violencia. Sin embargo, también sienten que estos forasteros son protegidos por la policía y las autoridades locales porque comparten motivaciones similares: el racismo contra los Garífunas y el deseo de sus tierras. Estos sentimientos son compartidos por la comunidad Pech.

Otros conflictos implican a las cooperativas de agricultores contra las poderosas empresas de aceite de palma. Asimismo, estos conflictos se originaron en los años 90 tras la reforma de la Ley Agraria y se han prolongado por un ciclo de invasión de tierras y desalojos violentos; estos desalojos han dado lugar a asesinatos de líderes campesinos, lo que ha llevado a una nueva generación enfurecida a invadir de nuevo las tierras. Un dirigente, que estuvo en prisión durante siete años, describió la complicidad de las instituciones de justicia y de las fuerzas de seguridad con empresas nacionales propiedad de prominentes familias adineradas. Las organizaciones campesinas tienen un poder limitado frente a estos fuertes intereses, y los dirigentes sufren las consecuencias de la impunidad de los delitos cometidos contra ellos y los casos de cooptación de la justicia.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los jóvenes Garífunas y Pech se enfrentan a limitaciones para dedicarse a la agricultura en sus propias comunidades, sobre todo por el escaso acceso a la tierra y los beneficios limitados del sector agrícola; estas circunstancias hacen que la agricultura sea menos atractiva para los jóvenes. Esto hace que aumente la migración entre los jóvenes. Los participantes mencionaron que el creciente consumo de drogas está afectando a los jóvenes y reduce las expectativas de obtener un empleo y permanecer en la escuela. El desempleo entre los jóvenes se considera uno de los principales desencadenantes de la migración. Los altos niveles de estigmatización y criminalización de los jóvenes Garífunas influyen en la decisión de emigrar, ya que a menudo no pueden acceder a puestos de trabajo y educación en Trujillo. Los representantes del sector privado coincidieron en que el desempleo es el problema más importante para los jóvenes de Trujillo. Además, las empresas privadas de la industria del turismo informan de las dificultades para encontrar jóvenes cualificados en la región.

## **FACTORES MITIGANTES**

La migración y las remesas eliminan la presión sobre el gobierno para proporcionar bienes y servicios. Sin embargo, al mismo tiempo reducen la motivación popular para reclamar estos servicios. Por ejemplo, cuando los jóvenes se enfrentan a obstáculos para acceder a la justicia, la educación u otros servicios, prefieren emigrar en lugar de exigir al gobierno que mejore los servicios. La migración es también la solución a los problemas creados por los altos niveles de impunidad, y las limitaciones para acceder a la tierra o a la justicia relacionadas con las violaciones de los derechos laborales. Los representantes del sector privado también mencionaron que, una vez que los jóvenes empiezan a recibir remesas, dejan de trabajar.

Todavía hay esperanzas de cambio tras la elección de un nuevo gobierno. Sin embargo, las comunidades Garífunas se sienten utilizadas y esperan señales de respeto y reconocimiento por parte del nuevo gobierno. Las comunidades Pech son aún más escépticas respecto a las promesas del nuevo gobierno y a la existencia de voluntad política para atender sus reclamaciones históricas en materia de derechos étnicos; sin embargo, consideran el cambio de gobierno como algo positivo y necesario. Las comunidades Pech y

Garífuna están bien organizadas y dispuestas a establecer un diálogo basado en el respeto y el reconocimiento de sus derechos. Este es un factor mitigante si hay voluntad política por parte del gobierno para buscar el diálogo y atender sus demandas. Sin embargo, si persiste la indiferencia, estas comunidades podrían lanzar fuertes protestas contra el nuevo gobierno.

## Copán

### INTRODUCCIÓN

El departamento de Copán tiene una superficie de 3,242 kilómetros cuadrados con una población de 412,927 habitantes, subdividida en 23 municipios. Su capital departamental es Santa Rosa de Copán. En el departamento también se encuentra el Sitio Arqueológico Ruinas de Copán, que alberga una de las ciudades mayas más importantes de la antigüedad, atrayendo a muchos turistas cada año.

En todo el departamento hay mucho tránsito de personas y sustancias ilícitas por la frontera con Guatemala. La principal fuente de empleo es la agricultura. Se cultiva tabaco para la exportación, mientras que la población rural produce granos básicos, maíz y frijoles para el autoconsumo, así como hortalizas y café para comercializar fuera de la región. En Santa Rosa hay mucho comercio y en Copán Ruinas la industria turística está impulsada por el parque arqueológico, al que se calcula que llegan 200,000 turistas al año, aunque el turismo se vio muy afectado por el COVID-19.

En el departamento de Copán y especialmente en Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas, existen importantes asentamientos de indígenas Maya Chortís, especialmente en la zona fronteriza con Guatemala, que sirve como zona de migración irregular y tráfico de personas. En Copán viven unos 5,000 Maya Chortí (frente a los 55,000 de Guatemala). En Honduras, a diferencia de Guatemala, los Maya Chortí han perdido en gran medida su lengua y su vestimenta tradicional.

En las zonas remotas de Copán, hay una falta de presencia estatal y altos niveles de violencia doméstica e intrafamiliar, incluyendo incesto y violación. Los recursos para los sobrevivientes de la violencia son limitados y no se acepta a las personas LGBTQI+ ni a los pueblos indígenas. También hay una marginación extrema de las mujeres, especialmente en las comunidades más rurales.

Además, hay problemas de seguridad territorial por la titulación de tierras, la venta de tierras comunales, el narcotráfico y el incumplimiento del Convenio ILO 169. La gente sufre el aumento en los precios de los alimentos y el costo de los insumos agrícolas, como las semillas y los fertilizantes, lo que provoca inseguridad alimentaria. Ante la falta de oportunidades económicas, la gente emigra a ciudades más grandes como San Pedro Sula o se va directamente a los EE.UU.

**Percepciones de USAID.** El equipo de evaluación tuvo la oportunidad de reunirse con personas de los tres municipios más importantes del departamento: Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y La Entrada. La mayoría de los encuestados conocían el trabajo de USAID y su contribución al desarrollo del departamento, como proyectos de agua y riego, incluyendo diferentes tipos de capacitación y educación. Tanto los líderes comunitarios como los alcaldes acogieron con satisfacción la ayuda de USAID y expusieron ejemplos de programas que han apoyado el desarrollo. Sin embargo, destacaron la importancia de una mejor coordinación entre USAID y otras ONGs internacionales y pidieron que los recursos pasen por sus expertos técnicos en lugar de contratar y traer consultores externos. También solicitaron que USAID aproveche los recursos disponibles en las *mancomunidades* y alcaldías, incluyendo personal que conoce bien las necesidades de la población y tiene la formación académica y la experiencia para emprender proyectos. Dijeron que es preferible utilizar los recursos de la comunidad que contratar a consultores externos para realizar el trabajo.

Los encuestados señalaron que la comunicación y la coordinación entre los proyectos de USAID y los municipios son esenciales. Ya existe un plan estratégico de desarrollo en los municipios que se debe seguir para hacer un uso más eficiente de los recursos que cada vez son más escasos. Cuando los consultores vienen, traen sus objetivos, que a veces son contrarios a los de los municipios. Los encuestados citaron un proyecto de crecimiento económico que asignaba L. 2,000 por emprendedor; en su opinión, esta cantidad era demasiado pequeña para hacer algo significativo. Los encuestados subrayan que los fondos deben invertirse en procesos y no en proyectos.

El seguimiento de los proyectos por parte de USAID es otro tema relacionado con la sostenibilidad de las intervenciones. Los encuestados señalaron que este tema podría abordarse utilizando las estructuras sociales existentes (juntas existentes, etc.) internas a la comunidad.

En el pasado, USAID ha realizado importantes contribuciones a proyectos de agua, riego, seguridad alimentaria y agricultura. USAID también proporcionó ayuda humanitaria en casos de emergencia para la compra de alimentos y suministros médicos, y ha trabajado con los gobiernos municipales de Copán Ruinas y Santa Rosa de Copán. Muchos de los encuestados consideran que, si USAID hubiese transferido los fondos directamente a las comunidades o a los gobiernos municipales, habría habido más sostenibilidad.

Por último, hay poca participación de las mujeres en los diferentes proyectos y programas no sólo de USAID sino también de otras organizaciones porque sus esposos no las dejan participar.

## **DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO**

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Debido al clientelismo político, existe inseguridad laboral para los empleados estatales que trabajaron bajo los anteriores gobiernos nacionalistas. También se percibe que la reintegración de los policías depurados puede provocar más violencia.

Los encuestados señalaron que ha habido una reciente división del partido LIBRE, donde 20 diputados han expresado su malestar con la coordinación del partido y han decidido formar un grupo dentro del congreso que no seguirá la línea del partido, lo que podría provocar inestabilidad en la corte y el ministerio público, y por lo tanto en el país. En este contexto, casi la totalidad de los encuestados cree que la corrupción y la impunidad continuarán en el país, así como el saqueo de las instituciones públicas.

Muchos señalaron que el sistema de justicia no está funcionando, a menos que se tenga influencia. Debido a la falta de investigaciones y operaciones policiales, y a la ausencia casi total de presencia policial, se informó de que el consumo, venta y distribución de drogas está aumentando en la zona y contribuye al incremento de la violencia.

**Cerrando el espacio cívico.** Muchos de los encuestados caracterizaron a Copán como un lugar con una cultura conservadora. Como resultado, hay un espacio limitado para las voces de las poblaciones indígenas, las poblaciones LGBTQI+, las mujeres y los niños. Aunque algunos señalaron que la iglesia puede desempeñar un papel en la participación de las mujeres y los niños, también desempeña un papel en el mantenimiento de la cultura conservadora. El carácter conservador de Copán también puede impedir que muchos niños reciban información sobre salud sexual y reproductiva, ya que rara vez se habla de ello en las escuelas o en las familias.

La mayoría de los encuestados sobre la población LGTBQI+ en todo el Occidente de Honduras señalaron que existe una negación de su existencia, y también comentaron que esta población no está organizada de ninguna manera.

**Normalización de la violencia.** Se describieron dos relaciones diferentes entre las maras y la delincuencia organizada transnacional. En algunos casos, el equipo escuchó que las maras prestan servicios

a los narcotraficantes, por ejemplo, protección, sicarios, etc.; otros describieron situaciones en las que los miembros de las maras eran asesinados por los narcotraficantes tan pronto se organizaban. En general, se coincide en que las maras no tienen el mismo impacto en Copán que en otras partes del país.

A pesar de ello, la extorsión sigue siendo un problema. Dada la desconfianza en los operadores de justicia, muchos propietarios de negocios no denuncian las extorsiones por miedo a las represalias. En algunos casos, los negocios que no pueden pagar la extorsión cierran o se trasladan.

Existe un sentimiento generalizado entre los encuestados de que el sistema de justicia (policía, ministerio público y poder judicial) ha fracasado. Incluso cuando se presenta una denuncia, no hay respuesta, investigación o procesamiento. Cuando hay respuesta, los procesos judiciales se describen como lentos, con mucho retraso.

Según los encuestados, el consumo excesivo de alcohol es uno de los principales factores de violencia. Los encuestados afirman que contribuye a la violencia doméstica, a los altos índices de embarazo en adolescentes, violaciones, pedofilia, estupro e incesto, así como a los casos de secuestro de niñas.

**Aseguramiento de la tierra.** La ubicación del departamento de Copán es estratégica para el crimen organizado por su proximidad a las rutas fronterizas de Guatemala que son utilizadas para el tráfico de drogas. Los encuestados dieron el ejemplo de los negocios de lavado de dinero utilizados por los cárteles de la droga que socavan los negocios preexistentes. No obstante, también señalaron que las empresas establecidas con fines de lavado de activos ofrecían puestos de trabajo y construcción en las comunidades; sin embargo, estos puestos de trabajo se han perdido debido a las recientes extradiciones. También se informó de que la presencia de cárteles de narcotráfico había hecho subir drásticamente los precios de la tierra y la presión para venderla, especialmente la situada en las zonas fronterizas. En los casos en que los propietarios se negaron a vender, fueron objeto de acoso y amenazas de muerte.

Dirigentes de organizaciones indígenas señalaron que en la zona habitada por el pueblo indígena Maya Chortí, un acuerdo firmado por el Consejo Nacional Indígena Maya Chortí con el Estado, representado por el presidente Carlos Roberto Reina, establece que el Estado se compromete a entregar al pueblo Maya Chortí 15,000 hectáreas de tierra. Sin embargo, hasta la fecha sólo han recibido unas 5,000 hectáreas. Actualmente, los dirigentes tienen acceso a las autoridades de gobierno, y confirman que exigirán que se cumpla el compromiso del Estado con las comunidades.

Existe una narrativa dominante entre las poblaciones no indígenas, particularmente en la zona de Copán Ruinas, según la cual las poblaciones indígenas han recibido tierras del gobierno, pero en lugar de trabajarlas, las arriendan o las revenden. En particular, el equipo escuchó múltiples referencias que describían a los Maya Chortí como faltos de ambición y desinteresados en trabajar.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** El equipo observó a muchos niños Maya Chortí, en su mayoría niñas, deambulando por las calles de Copán Ruinas, entrando en restaurantes y hoteles vendiendo muñecos de tuza y collares de semillas hechos por sus madres. Al no poder vender las muñecas y joyas a los precios originales debido al regateo de los turistas, ofrecen un descuento más la cortesía de cantar el himno nacional hondureño en Maya Chortí. En lugar de asistir a la escuela, los niños pasan el día vendiendo a los turistas, lo que los expone a un mayor riesgo de trata de personas y otros abusos. Las oportunidades educativas son muy limitadas para los jóvenes indígenas, y no reflejan la lengua y la cultura local.

Existe un cierto descontento entre la población debido a que los precios se han disparado ante el aumento de los derivados del petróleo y la disminución del poder adquisitivo de las familias, acompañado de la escasez de oportunidades de trabajo y la alta ocupación, todo ello en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes, que suelen trabajar en sectores

diferentes a su área de estudio y muchos optan por emigrar a otras ciudades de Honduras o emigrar a otro país.

**Tensiones latentes entre el sector público/privado.** Desde el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, varias organizaciones y grupos han comenzado a protestar por temas propios de sus misiones, incluyendo las demandas de derechos laborales y otros aumentos salariales, los productores de lácteos por un aumento de la leche y los transportistas por un aumento del suministro de combustible, entre otros. Algunas de las medidas adoptadas por los manifestantes son el bloqueo de carreteras, paralizando el transporte de personas y mercancías, afectando al suministro de bienes y repercutiendo en los ingresos de quienes participan en la cadena de suministro. Los encuestados del sector privado informaron que esta forma de protestas, cuando son constantes, pueden disminuir la inversión, llevando a una disminución del empleo disponible.

Como resultado de la pobreza endémica en las comunidades rurales, existe una fuerte demanda de acción gubernamental para apoyar a los pequeños productores agrícolas mediante el suministro de insumos para la producción, especialmente ahora que el precio de los fertilizantes ha subido. Los encuestados informaron de que, si no se apoya la producción de cultivos, podría haber escasez de alimentos en los próximos meses debido a la falta de producción, lo que provocaría protestas generalizadas.

Las organizaciones indígenas no creen que las reformas y las promesas de campaña del nuevo gobierno vayan a mejorar su situación, ya que dicen que el país está en quiebra moral y financiera. Estas organizaciones denuncian relaciones conflictivas con sus respectivos alcaldes, y por ello han solicitado una reunión con la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta a su solicitud.

## FACTORES MITIGANTES

Entre los encuestados de los indígenas Maya Chortí, expresaron su esperanza de tener una mayor participación con el nuevo gobierno, y que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Esto supondría una diferencia con respecto a gobiernos anteriores, como el de Juan Orlando Hernández. Ya se han reunido con algunos ministros del gobierno, entre ellos los del Instituto Nacional Agrario, con quienes han discutido la posibilidad de asignarles las tierras incautadas a los narcotraficantes. Asimismo, los pueblos indígenas del occidente del país esperan que se les devuelvan las tierras incautadas por los narcotraficantes. Sin embargo, esto no sucederá de la noche a la mañana, ya que deberá seguir los procedimientos de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) y esperar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

## Cortés

### INTRODUCCIÓN

San Pedro Sula es la segunda ciudad más grande y el principal centro económico de Honduras; Choloma, La Lima y El Progreso son ciudades satélites de San Pedro Sula que contribuyen a la fuerte economía industrial de la zona. El área metropolitana de San Pedro Sula, también conocida como área metropolitana del Valle de Sula (que incluye San Pedro Sula y otros 17 municipios) contribuye a alrededor del 60 por ciento del PIB del país y al 50 por ciento de las exportaciones (sobre todo en el sector industrial/textil y la agroindustria). El área tiene 2,2 millones de habitantes que viven en su mayoría en zonas urbanas. La zona se encuentra en las tierras bajas de dos ríos, el Ulúa y el Chamelecón, bordeados por la sierra del Merendón. El departamento tiene un clima cálido y húmedo y una temperatura media anual de 26 grados centígrados. El departamento de Cortés se vio afectado por los huracanes Eta e Iota en 2020, lo que provocó la pérdida de inversiones industriales y agrícolas y la disminución de viviendas.

San Pedro Sula y los municipios vecinos como Choloma y La Lima tienen algunas de las tasas de homicidio más altas de Honduras. Choloma, en particular, también fue una fuente de protestas masivas y movimientos sociales después de las elecciones de 2017 y el movimiento anticorrupción. En el marco de su CDCS 2015-2020, USAID realizó un amplio trabajo para mejorar la seguridad ciudadana en las zonas de San Pedro Sula, La Lima, Choloma y Chamelecón.

**Percepciones de USAID.** La mayoría de los encuestados tenían algún conocimiento sobre las actividades de USAID en la zona. Algunos de ellos han sido o son actualmente adjudicatarios o beneficiarios de las intervenciones de USAID; en otros casos, al menos han oído hablar de algunas intervenciones de USAID. La percepción general del trabajo de USAID en la zona es bastante positiva. Los encuestados destacan el trabajo de USAID y de otros donantes como un paliativo y un apoyo ante la falta de capacidad del gobierno municipal y local. Sin embargo, en las entrevistas también se destaca la percepción de falta de coordinación entre las actividades de USAID y se discuten temas relacionados con la sostenibilidad de las intervenciones tanto en la mejora de la seguridad ciudadana como en la reducción de la pobreza. Asimismo, las entrevistas destacan la necesidad de que las actividades que se realicen con los jóvenes sean diseñadas, implementadas y dirigidas por ellos.

## **DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO**

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Roberto Contreras fue elegido alcalde de San Pedro Sula en noviembre de 2021. Era un conocido empresario sin experiencia política previa que llegó al cargo como producto de una coalición entre su movimiento independiente, LIBRE y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Según destacan los encuestados, esta situación ha provocado conflictos con la coalición para controlar los 13 departamentos del gobierno municipal con el fin de asegurar los puestos de trabajo de sus seguidores. En general, los encuestados perciben una falta de claridad y de gobernanza en el municipio que afecta a la capacidad de éste para funcionar y cumplir con sus electores.

La impunidad fue percibida como la principal limitación para reducir la violencia en la zona. Los encuestados mencionaron repetidamente que cuando la gente se atreve a presentar denuncias, esos casos no se resuelven, en parte por la falta de recursos para llevar a cabo una investigación exhaustiva y también porque los operadores de justicia no consideran el acceso a la justicia como un servicio. Algunos encuestados mencionaron que se sienten más seguros al no presentar una denuncia, ya que a veces se sienten acosados por el proceso cuando se presentan. Así, la gente ha perdido completamente la fe en el sistema.

Existe una creciente percepción de que los delitos menores están creciendo en San Pedro Sula, afectando ahora a los propietarios de pequeños negocios y emprendedores. Algunos pequeños negocios y emprendedores informaron constantemente del aumento en la extorsión, lo que llevó al cierre de micro y pequeños negocios. La gente se inclina más por seguir trabajando de manera informal y discreta para evitar la extorsión.

Los encuestados coinciden en que la mayor parte de la violencia en la zona es perpetrada por las maras. El crimen organizado también se percibe como muy influyente en la zona. La zona de San Pedro Sula se utiliza para el lavado de activos a través de la construcción, las inversiones en nuevos negocios y otras iniciativas. También existe una percepción generalizada de que las actuales masacres en la zona pueden atribuirse a una reorganización de las organizaciones del crimen organizado; además, los encuestados consideran que las maras se benefician de la percepción de una reducción de la vigilancia de seguridad para reclamar y/o ampliar territorios.

**Cierre del espacio cívico.** Contreras ha impulsado una política de puertas abiertas para su gobierno y celebra audiencias públicas semanales (todos los viernes). A pesar de este esfuerzo tan público, los encuestados dijeron que no hay un interés real por realizar verdaderas auditorías sociales. Los defensores del colectivo LGTBQ+ han manifestado tener muy poco o ningún apoyo del alcalde, sobre todo debido a sus creencias religiosas. Los encuestados destacaron continuamente la percepción de caos en el gobierno municipal.

La percepción generalizada entre los encuestados es que los medios de comunicación independientes son cada vez más escasos. La mayor parte de los medios de comunicación que antes estaban en la oposición son ahora pro-gobierno, y algunos periodistas y personas muy influyentes son ahora funcionarios públicos. Los controles y equilibrios que deben provenir de los medios de comunicación son más débiles para la actual administración. Por ejemplo, el equipo escuchó varios casos de periodistas que habían sido críticos de la nueva administración en Choloma y fueron contratados recientemente por la municipalidad. Los encuestados compartieron abiertamente cómo esta estrategia de intentar "contratar" a los que critican se estaba aplicando a las organizaciones de la sociedad civil y a las defensoras de las mujeres en Choloma para silenciar sus protestas contra el incremento en los ataques a mujeres en el municipio. Al equipo le resultó evidente que esta estrategia se está empleando de forma generalizada para neutralizar las críticas contra la nueva administración.

**Normalización de la violencia.** La normalización de la violencia en San Pedro Sula sigue siendo uno de sus retos más destacados y graves. Existe una percepción generalizada entre los encuestados de que hay una falta de respeto por la vida, que permite y normaliza la violencia en toda la sociedad. Por ejemplo, los encuestados mencionaron cómo se puede quitar la vida (homicidio) por muy poco dinero (a veces como un favor personal); también se mencionó una minimización generalizada de los homicidios como un hecho cotidiano que debe denunciarse. Este "vacío de valores" se habilita en la familia debido a que la violencia intrafamiliar y el maltrato conyugal son prácticas generalizadas.

Otro aspecto que permite la normalización de la violencia es la falta de conocimiento y capacidad de la población hondureña para hacer valer sus derechos. La gente cree que no tiene derechos y cuando entiende que los tiene apenas sabe cuándo y cómo reclamarlos. Esto se ve en la trayectoria migratoria, pero también aquí, como señalaron los encuestados, la gente simplemente se encoge de hombros y espera que las cosas sucedan.

Según los encuestados, también hay una alta incidencia de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica y violencia contra los jóvenes y miembros del LGBTQI+ que queda impune. Los encuestados piensan que los miembros de la comunidad LGBTQI+ se ven obligados a vender drogas y prestar servicios sexuales a las maras y, en ocasiones, grupos policiales.

**Aseguramiento de la tierra.** La invasión de tierras en el Valle de Sula no es tan común como en otras zonas del país. El área alberga vastas plantaciones de caña de azúcar y plátano y tiene parques textiles e industriales. Los encuestados no identificaron la seguridad de la tierra como un factor de conflicto en la zona. Se refirieron sobre todo a las zonas en la costa norte como ejemplos de este tipo de desencadenante.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los jóvenes de estas zonas se enfrentan a una situación especialmente difícil. No pueden encontrar un "buen" trabajo remunerado (lo que implica algo más que un trabajo pagado), que incluye el acceso a prestaciones y un sentido de realización. Cuando los jóvenes no pueden encontrar un "buen" trabajo, buscan un empleo informal, optan por la emigración o se unen a la economía

ilegal. Los jóvenes también se enfrentan a la estigmatización y a menudo se unen a grupos juveniles como barras o maras para lograr un sentimiento de pertenencia. La estigmatización y criminalización de los jóvenes a menudo conduce a una disminución del acceso a los puestos de trabajo y a otros servicios, lo que aumenta la frustración y la necesidad de encontrar alternativas como emigrar y/o unirse a grupos delictivos. Cuando los padres emigran, muchos niños se quedan con familiares mayores, hermanos mayores o parientes lejanos, lo que hace que los niños crezcan sin una supervisión cercana y, por lo general, estén más expuestos a las maras y otros grupos que proporcionan un sentido de pertenencia.

**Tensiones latentes entre el sector público/privado.** El sector privado es muy fuerte y altamente organizado en Cortés, particularmente en San Pedro Sula. Este ha apoyado a la nueva administración y ha acogido favorablemente el cambio. Están dispuestos a trabajar juntos y se han puesto en contacto con los funcionarios del gobierno para apoyar el análisis de la nueva legislación, proporcionar opiniones técnicas sobre las acciones del gobierno y evaluar los posibles impactos en la creación de empleo, etc. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre la capacidad del nuevo gobierno para crear consenso y fomentar realmente la paz. Esto se debe, en parte, a la falta de tolerancia y madurez de ciertos sectores para mantener debates públicos y construir conjuntamente hacia el progreso en beneficio del país.

Los encuestados destacan que el sector privado está cada vez más unido. Sub-sectores que tradicionalmente han trabajado de forma independiente unos de otros, por ejemplo, los ganaderos, se están uniendo a las cámaras de comercio para presentar al gobierno un conjunto concreto de recomendaciones y prioridades. Estos actores están dispuestos a trabajar con el gobierno y a darles hasta un año antes de empezar a presionar para obtener resultados, siempre y cuando se den pasos positivos en el ínterin.

A pesar de que se percibe que este gobierno tiene un mayor grado de tolerancia que el anterior, hay muy pocos mediadores o interlocutores creíbles. En general, los encuestados creen que el alto grado de polarización de la sociedad hondureña hará aún más difícil que el nuevo gobierno logre el consenso y avance. Esto puede indicar que el progreso será lento o incluso se detendrá, lo que a su vez puede aumentar la frustración de la gente y dar lugar a conflictos sociales e incluso a la violencia.

**Impactos del cambio climático y la escasez de recursos.** Los efectos de Eta e Iota aún se sienten en Cortés, donde la gente aún no ha regresado por completo a sus casas en algunas zonas. También se percibe un aumento de la vulnerabilidad, ya que no se ha restablecido la infraestructura de mitigación dañada en la temporada de lluvias de 2020. Los encuestados reportaron haber perdido extensas áreas de cultivo de plátano debido a los huracanes y la falta de apoyo al sector para recuperarse de estos golpes.

Aunque no hay percepción de escasez de agua y otros recursos en la zona, los encuestados coinciden en la importancia de conservar los bosques y el agua, basándose en los problemas que se enfrentan en zonas como Tegucigalpa. Los encuestados también son conscientes de la relación entre la conservación de áreas como el Merendón para mitigar las altas temperaturas en las ciudades.

## **FACTORES MITIGANTES**

La migración es el mayor factor de mitigación en la zona. El departamento de Cortés es percibido como el receptor de la migración interna de las zonas rurales cercanas. También es el lugar donde la gente suele conseguir un trabajo temporal para ahorrar dinero y así poder emigrar a Estados Unidos o a España.

Las maquiladoras y otras industrias crean la oportunidad de empleos básicos y no cualificados en la zona.

En algunas zonas controladas por las maras, éstas han impuesto una norma libre de violencia para disuadir de que se preste atención a sus territorios. En particular, las zonas controladas por la MS-13 son más tranquilas, no tienen extorsiones y la mara les proporciona servicios de seguridad hasta el punto de que sus miembros son mediadores en los conflictos.

## Intibucá

### INTRODUCCIÓN

El departamento de Intibucá está situado en la región centro-occidental del país. Tiene un territorio de 531.3 km y una población total de 65,923 habitantes, de los cuales 25,572 viven en zonas urbanas. La mayoría de la población se identifica como pueblo indígena Lenca (77 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)). La población se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia, como el cultivo de cereales básicos, hortalizas (especialmente papas) y fresas. Intibucá está subdividida en 20 aldeas (comunidades) y 127 caseríos. El 60 por ciento de la población tiene un sexto grado de educación y los niveles de pobreza son altos.

**Percepciones de USAID.** En general, el trabajo de USAID en Intibucá es bien recibido, pero muchos encuestados querían una mayor consulta con las comunidades y la participación de actores locales con experiencia técnica en lugar de traer consultores internacionales. Señalaron que, a pesar de las importantes inversiones, los proyectos no eran sostenibles porque no tomaban adecuadamente en consideración las prioridades de las comunidades locales. Los miembros de la comunidad quieren ser consultados cuando se desarrollen los proyectos para que se reflejen sus aportes y el contexto cultural de la región.

Algunos argumentaron que los proyectos de USAID a veces contribuyen a contaminar el medio ambiente, por ejemplo, el número de vehículos y pesticidas utilizados. Los encuestados también mencionaron barreras para la participación en los proyectos de los donantes en general, sobre todo para los hogares encabezados por mujeres y/o los hogares en los que las adolescentes, especialmente las jóvenes, ya son madres. Las obligaciones familiares y domésticas pueden prohibir la participación de mujeres y niñas.

Todos los encuestados indicaron que el apoyo del gobierno de EE.UU. es importante y necesario para las comunidades, y que el trabajo de USAID en Intibucá ha beneficiado a la población. Algunos señalaron que cuando los proyectos trabajan con los alcaldes, corren el riesgo de politizarse o de que los recursos se dirijan sólo a miembros del mismo partido político.

### DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

Durante su estancia en Intibucá, el equipo escuchó repetidamente la falta de confianza en la policía y una cultura de impunidad donde la policía no responde y la justicia no funciona. La mayoría de la gente consideraba que presentar una denuncia no sólo era inútil, sino que podía ser contraproducente.

Los temas del consumo de alcohol y drogas surgieron repetidamente en las entrevistas. Mientras estuvieron en Intibucá, no era raro ver personas desmayadas en las calles durante todo el día, y hubo una serie de asesinatos de alcohólicos en las calles. El número variaba, pero los encuestados indicaron que entre 12 y 17 personas habían sido asesinadas en las últimas dos semanas. También se mencionó con frecuencia que el alcohol contribuía a la escalada de violencia en el hogar y en la comunidad.

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Prácticamente todos los encuestados hablaron del fracaso del sistema de justicia, que contribuye a una cultura de impunidad en Intibucá. La mayoría indicó que no presentaría una denuncia ante la policía porque nunca se haría caso de ella y podría exponer al denunciante a represalias. El equipo escuchó repetidamente sobre la falta de capacidad, voluntad política y coordinación

entre la alcaldía, el ministerio público y los operadores de justicia. Muchos expresaron el sentimiento de que la corrupción siempre existirá porque la justicia es sólo para los que tienen dinero. Algunos, al referirse a la extradición del ex presidente Hernández, dijeron que indicaba que Honduras no puede lograr la justicia por sí sola y necesita la intervención del gobierno de los Estados Unidos.

En las zonas más remotas del departamento, no hay presencia de seguridad ni de justicia, y quienes quieren presentar denuncias tienen que recorrer largas distancias, lo que a menudo resulta económicamente prohibitivo. La falta de voluntad o la incapacidad de las personas para denunciar los delitos refuerza aún más la cultura de la impunidad.

Aunque se supone que existen sistemas para gestionar las denuncias por GBV, quienes las presentan se ven a menudo revictimizados al tener que narrar repetidamente a múltiples personas los abusos que sufrieron. Según los encuestados, los sistemas existentes no funcionan como es debido. La policía y los miembros de la comunidad también pueden intentar convencer a alguien a no presentar una denuncia, especialmente en los casos de abuso doméstico. Muchas víctimas de violencia doméstica son completamente dependientes económicamente de sus parejas. En general, la tierra se registra a nombre del hombre, lo que deja a las mujeres sin tierras ni garantías para acceder al crédito. La pareja también puede amenazar a la mujer con echarla de casa o hacerles daño a los hijos. Esto hace que las víctimas queden completamente marginadas y sin recurso a través de cualquier canal formal o informal.

En el ámbito comunitario, el equipo escuchó con frecuencia que las maras, especialmente las grandes como la MS-13 y Barrio 18, no son un gran problema en Intibucá. Los habitantes de las comunidades se conocen entre sí, y cuando detectan a alguien que no pertenece a su comunidad, actúan por su cuenta.

**Cierre del espacio cívico.** En relación con los temas de seguridad de la tierra (véase más adelante), el equipo escuchó a defensores del medio ambiente y los derechos humanos que se sentían amenazados. Algunos encuestados reflexionaron sobre el asesinato en 2016 de Berta Cáceres en la comunidad de Río Blanco, donde se estaba construyendo una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, sagrado para los Lenca.

Algunas personas perciben que dichos conflictos por la tierra y los recursos se han agravado en los últimos diez años, especialmente en torno a los proyectos hidroeléctricos y extractivos. Esto da lugar a más protestas, que exponen a activistas, defensores, líderes comunitarios y periodistas de medios impresos y sociales al acoso, la criminalización, la cooptación y la violencia.

También se señaló que ha habido amenazas contra periodistas, entre ellas la del periodista que cubrió el caso de Keyla Martínez.

**Normalización de la violencia.** Cuando se les preguntó sobre los factores que más contribuyen a la violencia, muchas personas dijeron que el aumento de la violencia familiar y comunitaria estaba siendo alimentado por la cultura del machismo y la alta disponibilidad de alcohol y drogas. En Intibucá, parte del alcohol que se consume en las comunidades es suministrado por intermediarios o coyotes que compran cosechas de alimentos y pagan con alcohol en lugar de efectivo. Algunos encuestados indicaron que la cosecha de café, cuando llegan personas de diferentes zonas trayendo consigo drogas y alcohol, abre oportunidades para la violencia y la GBV que pueden dejar a las mujeres e incluso a las niñas embarazadas y maltratadas.

Los encuestados destacaron constantemente los altos niveles de violencia familiar, incluyendo el incesto y las violaciones que dejan embarazadas a niñas de hasta 12 años. El equipo escuchó repetidamente que no hay población LGBTQI+. Para protegerse, los miembros de la comunidad LGBTQI+ emigran o se vuelven invisibles. Muchos temen el rechazo de sus familias y de la sociedad y se convierten en blanco de la violencia.

Para comunidades remotas, la radio es la única opción de comunicación. Ha habido intentos de programar y difundir mensajes sobre las experiencias de las mujeres con la violencia doméstica, pero en un caso, la iglesia católica, que apoyaba a la emisora en cuestión, le retiró el apoyo, dejando a la organización sin medio de transmisión. En las zonas donde hay conectividad, las redes sociales y la mensajería son los medios y las aplicaciones de comunicación preferidos, especialmente Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp.

**Aseguramiento de la tierra.** El equipo escuchó con frecuencia que el derecho a la consulta previa y libre bajo el Convenio ILO 169 no se respeta y que no hay mecanismos formales para buscar compensación si la tierra es tomada. Esto se ha convertido en una fuente perpetua de conflictos sobre quién tiene derecho a las tierras y a los recursos que hay en ellas, especialmente en el caso de las tierras de propiedad colectiva de las poblaciones indígenas.

Cuando surgen proyectos de desarrollo, la municipalidad suele utilizar una reunión en la alcaldía para presentar el proyecto a la comunidad y luego indicar que se han realizado consultas. Sin embargo, una reunión en la alcaldía no cumple con las consultas exhaustivas contenidas en el Convenio ILO 169, lo que provoca conflictos con la población indígena.

En algunos casos, individuos o empresas inician proyectos de desarrollo o se apropian de tierras colectivas. En otros, los Lenca, de manera individual, venden sus tierras, lo cual no está permitido ni es válido en situaciones de propiedad colectiva. Las disputas por la tierra y la falta de resolución han provocado la fragmentación de la comunidad Lenca. Las organizaciones que dicen representar a los Lenca se han dividido por diferencias personales o filosóficas. Así, han surgido nuevas organizaciones que dicen representar a los Lenca, siendo las más conocidas: ONILH, COPINH, MILH, FHONDIL y CGL. Estas organizaciones también reconocen que ninguna organización representa plenamente a todo el pueblo Lenca.

Varios encuestados hablaron del aumento del costo de la canasta básica de alimentos al mismo tiempo que el costo de los insumos agrícolas se dispara, en parte debido a la guerra en Ucrania. Esto está llevando a algunos agricultores de subsistencia a dejar de cultivar porque ya no es económicamente viable. En consecuencia, los encuestados prevén una inseguridad alimentaria.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los jóvenes no pueden acceder a la educación más allá del noveno grado sin trasladarse a otra ciudad y tienen pocas oportunidades de estudiar y trabajar. En su mayoría, incluso los que terminan sus estudios no pueden encontrar un trabajo en el sector formal que satisfaga sus necesidades económicas y sus aspiraciones. Los jóvenes son menos proclives a dedicarse a la agricultura. Algunos pierden la esperanza y optan por emigrar a las grandes ciudades o emigrar, a menudo a Estados Unidos o España, en busca de una vida mejor.

## **FACTORES MITIGANTES**

La esperanza de cambio bajo la nueva presidenta sigue siendo un factor mitigante en Intibucá. El equipo escuchó repetidamente que 100 días es demasiado pronto para esperar un cambio y la gente, en general, sigue esperando que las cosas mejoren. En particular, los encuestados destacaron la esperanza en la mejora de los derechos de las mujeres y en una mayor inclusión de las poblaciones indígenas, incluida la aplicación del Convenio ILO 169. El gobierno llegó al poder prometiendo reforzar la protección de la naturaleza en el territorio Lenca, pero hasta la fecha no se han tomado medidas visibles y las organizaciones que representan al pueblo Lenca no han podido reunirse con la presidenta.

Algunos señalan que la presidenta ya ha cumplido algunas promesas de campaña, como la derogación de la ley ZEDES. Sin embargo, también señalan las decisiones que parecen ir en contra de las promesas de reducción de la corrupción en el gobierno, por ejemplo, la ley de amnistía y el nepotismo en los nombramientos políticos.

La migración, tanto interna como externa, y las remesas, también parecen mantener bajo control la frustración por la falta de oportunidades laborales. El envío de remesas es un factor que mitiga la violencia porque reduce la presión sobre el Estado.

## Lempira

### INTRODUCCIÓN

Lempira tiene una superficie de 4,228 kilómetros cuadrados y una población de 319,861 habitantes, según el Censo del INE de 2015. La economía del departamento de Lempira se basa en la agricultura. El café, el maíz, el arroz y el tabaco son algunos de los principales productos, así como una parte fundamental de las actividades diarias de este departamento. En los últimos años ha habido un impulso del turismo, centrado en el canopy de La Campa, un sitio natural protegido ubicado en el Parque Nacional Montaña de Celaque.

Lempira está dividido en 28 municipios. El departamento cuenta con un 44.8 por ciento de población indígena perteneciente al pueblo Lenca, la mayoría de los cuales viven en comunidades rurales donde se dedican a la agricultura de subsistencia y aún conservan muchas costumbres ancestrales. Estas comunidades son conocidas por la alfarería, que incluye diferentes tipos de utensilios y adornos de barro.

**Percepciones del USG y USAID.** No todos los informantes claves encuestados individualmente y en grupos focales en Lempira conocían la contribución de USAID al desarrollo del país. Sin embargo, los que estaban al tanto de la ayuda dijeron que ha contribuido a mejorar la agricultura, los servicios de salud y las auditorías internas en los municipios. Recuerdan proyectos como Fintrac, Gobernanza Local y Procelaque, que describen como buenos proyectos. En términos generales, la percepción de USAID es positiva, aunque también hay aspectos que, según algunos informantes clave, deberían mejorarse. Esto coincide con las percepciones de otros departamentos en Occidente visitados. Los informantes clave identificaron como áreas de crecimiento la mejora de la comunicación con las organizaciones indígenas, el aumento de la participación de las comunidades para que puedan recibir los beneficios de los proyectos que USAID financia, la consulta con las comunidades antes del inicio de los proyectos y la contratación de consultores locales. Este último punto tiene un doble beneficio, ya que permite que la cultura y las prioridades locales se reflejen en los proyectos y, al mismo tiempo, proporciona salarios a los miembros de la comunidad local a través de los proyectos de USAID, especialmente porque muchos informantes clave señalaron que USAID gasta un gran porcentaje de los fondos de los proyectos en sueldos y salarios. También destacaron el hecho de que quieren recibir asistencia técnica de USAID y mejorar los canales de comunicación entre USAID y las comunidades.

Los informantes clave mencionaron que el Comando Sur de EE.UU. ha apoyado otras áreas con proyectos de infraestructura, pero a pesar de que el apoyo ha sido solicitado y ofrecido, no se ha materializado. No se mencionó ningún grupo especial que se haya beneficiado de los proyectos de USAID, pero se destacó que la mayoría de los beneficiarios eran hombres. En relación con el apoyo de EE.UU., se mencionó que han aportado recursos, pero en algunos casos, no está claro qué ocurre con los fondos. Se dio un ejemplo de un proyecto centrado en el control de la migración, y se dijo que, a pesar del proyecto, la migración ha aumentado. Esto hizo que algunos se preguntaran dónde se habían invertido los fondos del proyecto.

### DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

Desde el punto de vista de los encuestados, en el departamento de Lempira hay una serie de factores que contribuyen a la generación de violencia y conflictos, como el consumo excesivo de alcohol -que muchos consideraron que contribuye a la violencia doméstica-, los altos índices de embarazo adolescente, violación, pedofilia, estupro e incesto. Los encuestados estiman que el 90 por ciento de los hombres

golpean a sus parejas. Dado que el municipio depende en gran medida de las transferencias del gobierno central, es poco probable que dejen de vender alcohol porque es una fuente de ingresos fiscales locales.

**Clientelismo y cultura de impunidad.** El departamento de Lempira ha estado estrechamente relacionado con el Partido Nacional, en gran medida porque JOH es oriundo de Gracias. Muchos encuestados expresaron su preocupación de que, con un partido político diferente en el poder, los que trabajaron bajo el gobierno de Hernández pierdan sus puestos de trabajo.

La mayoría de los informantes señalaron que el crimen organizado sigue presente y algunos temen que, después de haber sido protegidos durante tantos años por la familia Hernández de grandes conflictos, exista el riesgo de que la violencia empeore. Algunos sugirieron que los operadores de justicia están cooptados por el crimen organizado. Varios de los encuestados coincidieron en que la corrupción se aprende como forma de vida a temprana edad.

Dado que se trata de una zona montañosa, las autoridades informan sobre la existencia de laboratorios clandestinos de coca, así como de plantaciones de marihuana, en el departamento. Los encuestados insinuaron que los agricultores han dejado de producir cultivos normales para "diversificar" su producción hacia las plantas de coca y marihuana. Se percibe que la producción de drogas da lugar a extorsiones, consumo de drogas, delitos ambientales y usurpación de tierras.

Debido a una cultura generalizada de impunidad, la mayoría de las personas no denuncian los actos de violencia a la policía. Si presentan una denuncia, es posible que las autoridades no respondan y no hay protección, por lo que muchos temen represalias contra ellos mismos y sus familias. Los detenidos salen rápidamente de la cárcel, muchas veces por influencia de autoridades como los alcaldes. Algunos encuestados señalaron que muchos miembros de la comunidad tienen dificultades económicas. En estas situaciones, la gente recurre cada vez más a opciones alternativas para obtener dinero, lo que contribuye a un aumento de los índices de corrupción y delincuencia.

**Normalización de la violencia.** Algunos encuestados atribuyeron el aumento de la delincuencia a la falta de presencia policial. El departamento de policía de Gracias, la capital del departamento, cubre 28 municipios. Debido a la falta de recursos, incluidos los vehículos, las comunidades más alejadas no tienen acceso a la policía. Si alguien de una de estas comunidades quiere presentar una denuncia, tiene que pagar para viajar a una ciudad cercana, lo que disuade de presentarla. Si bien hay mujeres en la policía, todas se encuentran en la ciudad de Gracias porque ninguno de los municipios tiene instalaciones policiales que puedan albergar a las mujeres. La mayoría de los puestos en las zonas rurales están ubicados en casas deterioradas que pertenecen a la comunidad o a un miembro de la comunidad. En algunos casos, cuando se producen dos o más sucesos simultáneamente, la policía tiene que priorizar los casos más graves para brindar atención debido a la falta de recursos para movilizarse. Los vehículos policiales sirven tanto para responder a los delitos como de ambulancias para transportar heridos o enfermos.

El Centro de Detención de Gracias, que alberga a miembros de maras de otros departamentos, se considera otro factor que contribuye a aumentar los niveles de violencia y la presencia de maras. Los familiares de los presos suelen trasladarse a Gracias desde otras ciudades, lo que aumenta la presencia de las maras y, según sospechan algunos, ordenan delitos desde la cárcel. Algunos señalaron también que algunos mareros han llegado desde El Salvador para escapar de la represión de Nayib Bukele contra las maras. En estas situaciones, como en muchas otras comunidades de Occidente, la comunidad se ve "obligada a tomarse la justicia por su mano" y a expulsar a los extranjeros mediante la amenaza o la fuerza.

La mayoría de los encuestados señalaron que las altas tasas de consumo de alcohol contribuyen de forma sustancial a la violencia doméstica. Existe la percepción de que las tasas de embarazo en las niñas están aumentando. Algunos indicaron que las niñas se quedaban embarazadas por violación y/o incesto desde los nueve años.

**Cierre del espacio cívico.** En el Occidente del país, la población LGTBQ+ es invisible. Aunque algunos encuestados reconocen que la población LGTBQ+ existe, muchos niegan su existencia. Si son visibles, son intimidados y acosados. Como respuesta, algunos se suicidan o se trasladan a centros urbanos para escapar. Algunos informaron de que la iglesia niega el acceso y el apoyo a la comunidad LGBTQI+.

La violencia es habitual en torno al tema de la tierra. Los encuestados citaron el asesinato del líder indígena y activista de los derechos humanos Pablo Hernández, que recibió nueve disparos en San Marcos de Caiquín. Nadie ha comparecido ante la justicia por su muerte, y algunos sospechan que fue asesinado por sicarios.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los jóvenes expresaron su preocupación por la falta de oportunidades de empleo en la zona una vez que se gradúan de la universidad. Explicaron que la primera pregunta que suele hacerse en una entrevista de trabajo es: "¿Por quién votaste?". Muchos jóvenes que terminan sus estudios universitarios emigran a Tegucigalpa o San Pedro Sula en busca de oportunidades laborales. En otros casos, intentan abandonar el país. Los encuestados señalaron que cuando estos jóvenes regresan a sus comunidades, traen consigo un estilo de vida diferente que a menudo no es posible mantener en sus comunidades de origen, lo que desvincula aún más a los jóvenes del resto de la población.

**Aseguramiento de la tierra.** Todos los pueblos indígenas que se reunieron con el equipo destacaron que el sistema judicial no reconoce el Convenio ILO 169. Del mismo modo, muchos informaron que los alcaldes han vendido tierras indígenas, embolsándose las ganancias, y a menudo utilizan las reuniones abiertas como forma de consulta, aunque esto no sea culturalmente apropiado para consultar a los pueblos indígenas. La falta de respuesta de las autoridades a nivel municipal ha llevado a algunos miembros de los pueblos indígenas a vender sus tierras a terceros, complicando aún más el problema de la tenencia de la tierra.

Otros comentaron el caso de familias poderosas asociadas al Partido Nacional que cultivan café en terrenos del parque nacional que pertenecen al municipio.

**Impactos del cambio climático/escasez de recursos.** Varias personas señalaron que los costos de los alimentos aumentan al mismo tiempo que los insumos agrícolas se encarecen, por ejemplo, el costo de los fertilizantes debido a la guerra en Ucrania. Algunos agricultores han dejado de cultivar por completo porque ya no es viable desde el punto de vista económico. Los agricultores expresaron su preocupación por la inminente inseguridad alimentaria.

## **FACTORES MITIGANTES**

Muchos de los indígenas encuestados pertenecientes al pueblo Lenca afirmaron estar esperanzados en que la situación de sus comunidades mejore con el nuevo gobierno, recordando el Programa Nuestras Raíces y la implementación de otros proyectos. Desde entonces, han sido marginados, pero tienen esperanzas de cambio. Hay grandes expectativas de que el gobierno de la presidenta Castro sea positivo para el país e incluya a las poblaciones indígenas, tras su llamamiento para que todos los miembros del gobierno actual tengan en cuenta las necesidades de los indígenas. Estas esperanzas se ven un tanto atenuadas por las acciones del nuevo gobierno y la percepción de que, aunque la gente votó por Xiomara Castro, es su marido, Mel Zelaya, quien tiene el control.

Los encuestados también señalaron que, con el nuevo gobierno, cuando protestan pacíficamente, ya no los rocían con gases lacrimógenos.

La migración, tanto interna como externa, y las remesas, también parecen mantener bajo control la frustración por la falta de oportunidades laborales.

## Olancho

### INTRODUCCIÓN

Olancho es el departamento más grande de Honduras y comparte frontera con Nicaragua, así como el departamento menos accesible de Honduras, Gracias a Dios. Aunque la capital del departamento es Juticalpa, la ciudad de Catacamas, al este, es la ciudad más violenta de Olancho y la ciudad natal de la presidenta Xiomara Castro y del ex presidente Manuel Zelaya. Históricamente, Olancho ha tenido poca presencia del Estado, y la gente está acostumbrada a resolver los problemas por sus propios medios, que incluyen venganzas y masacres. Olancho es también el hogar principal del grupo indígena Pech. Este grupo, con unos 9,000 miembros, vive en 10 comunidades repartidas por Olancho y los departamentos vecinos.

La región es conocida por sus extensas haciendas lecheras y ganaderas, pero también es un importante punto de tránsito para la tala ilegal, la cocaína y la fauna en peligro de extinción de la biosfera del Río Plátano. La visita del equipo coincidió con un conflicto entre los productores de leche y los fabricantes de queso, crema y otros productos lácteos que, en última instancia, controlan los precios del mercado. Además, aumentan las protestas por la falta de agua debido a la mala gestión y la invasión de tierras.

**Percepciones del USG y USAID.** Olancho no ha sido tradicionalmente prioritario como receptor de la ayuda exterior de EE.UU., pero el alcalde de la ciudad y los jóvenes esperan con interés el proyecto "Creando mi Futuro Aquí", financiado por USAID y ejecutado por la DAI, que pretende abordar la migración a través del emprendimiento y la capacitación.

### DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

**Exclusión de grupos indígenas (Pech).** El grupo indígena Pech de Olancho se enfrenta a barreras estructurales, culturales y sociales para acceder a los servicios, así como a una participación significativa en los procesos políticos y cívicos. Sus comunidades luchan por el acceso a los servicios, incluyendo: salud, educación y electricidad. Se enfrentan a la discriminación de los vecinos mestizos y de los proveedores de servicios. El grupo también se enfrenta a la explotación de sus tierras por parte de las organizaciones de tráfico de drogas (DTO) y los ganaderos. Las barreras lingüísticas y educativas hacen que los miembros de la comunidad Pech tengan dificultades para ser representados adecuadamente en los procesos legales del Estado, incluso para buscar reparación de agravios con las fiscalías cuando se violan los derechos de los miembros de la comunidad.

**Economías ilícitas y crimen organizado.** Los principales problemas subyacentes que desencadenan el conflicto son los precios no regulados de los productos lácteos, las disputas entre los productores de leche y los servicios logísticos, y el lavado de dinero y los envíos de contrabando hacia El Salvador. Esto contribuye a la inflación de los precios y al dumping. La región se enfrenta a una importante actividad de tala ilegal, narcotráfico y explotación/exportación ilegal de queso a El Salvador. Si bien los grupos delictivos organizados y los narcotraficantes participan activamente en estas actividades, los encuestados destacaron que en Olancho y Catacamas hay mucha menos presencia de maras o delitos de menor escala en comparación con otras partes del país porque los grupos delictivos organizados no toleran la competencia.

**Normalización de la violencia.** La narco-cultura y la narco-violencia se consideran cada vez más normalizadas en Olancho, incluso en la forma en que los niños perciben y están expuestos al tema. En las comunidades, los narcos mantienen la paz, proporcionan seguridad y no toleran los robos ni los delitos menores. Esta nueva cultura hace que las comunidades sean más tolerantes con su presencia y permite a los narcos servir como fuente de seguridad ante un Estado ausente. Se percibe que las DTO colaboran con la policía para controlar la delincuencia común, expulsar a las maras de la ciudad y matar a los

miembros de las maras o a los delincuentes que pretendan adentrarse en su territorio. Los encuestados destacaron que algunos comerciantes han sido asesinados por su participación en el lavado de dinero y otras economías ilícitas. El equipo también escuchó que hay sicarios a la venta y activos en varias ciudades de Olancho, particularmente en Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Los encuestados destacaron fuertes patrones de patrocinio y clientelismo en la configuración de la dinámica de poder en Catacamas. A pesar de la fuerza de estas redes de patrocinio, los encuestados también comunicaron que los funcionarios recién elegidos están limitados en el uso de estas redes, alegando la justificación de su uso debido a la falta de recursos. La falta sostenida de recursos producirá probablemente una pérdida de confianza y participación ciudadana, además de limitar la colaboración con las nuevas autoridades. Los periodistas que se atreven a cubrir la participación clientelista en negocios ilícitos, como la tala ilegal o el narcotráfico, se enfrentan a amenazas y asesinatos. Los asesinatos de periodistas como el de Pedro Arcángel Canelas en Dulce Nombre de Culmí suelen quedar impunes, y dos años después no se han detenido a los responsables de su asesinato.

**Cierre del espacio cívico.** Los periodistas se enfrentan a un mayor riesgo por investigar delitos relacionados con la tala ilegal de árboles o el tráfico de drogas y practican la autocensura como estrategia de protección. El equipo descubrió que el nuevo gobierno estaba organizando nuevas iniciativas de seguridad ciudadana con expectativas de participación ciudadana en los comités de seguridad. La estructura y la transparencia en torno a estas entidades parecían estar aún por definirse, y los encuestados se mostraron entusiastas, pero también desconfiados ante la posibilidad de que estos espacios fueran cooptados para objetivos políticos y de vigilancia.

**Impactos del cambio climático y la escasez de recursos.** Los principales problemas de gestión de los recursos naturales de Olancho tienen su origen en la tala de árboles, la deforestación, las dificultades para gestionar y proteger sus cuencas hidrográficas y la gestión de la generación y distribución efectiva de energía. Olancho obtiene su energía de la presa hidroeléctrica Patuca III y ha sufrido un acceso inconsistente a la energía. Los encuestados expresaron su preocupación por que su acceso continuado a la energía se vea afectado negativamente por el cambio climático. La elevada tasa de tala ilegal también promete afectar las cuencas hidrográficas y las iniciativas agroforestales lícita. Los encuestados se mostraron especialmente interesados en explorar cómo la región puede cambiar a opciones agrícolas alternativas más ecológicas, como los cultivos que conservan mejor el agua. La falta de acceso al agua en las zonas urbanas, incluidas Catacamas y Juticalpa, contribuye a los conflictos y a la presión sobre los gobiernos locales.

**Aseguramiento de la tierra.** Los encuestados destacaron un aumento percibido en la disputa de tierras debido a la invasión de DTO y la compra de tierras de ganado para su uso como pistas de aterrizaje clandestinas. Los ganaderos se apropian constantemente de tierras forestales, muchas de las cuales están protegidas como parte de las reservas naturales. La comunidad Pech, con unos 9,000 miembros de la tribu, es vulnerable a la invasión y la violencia de las organizaciones criminales. Tienen pocos medios económicos y legales para responder y se enfrentan a barreras estructurales para acceder a recursos legales. La seguridad de las tierras indígenas se ve agravada por las respuestas incoherentes del Instituto de Bosques y Conservación (ICF), responsable de fijar los límites de las tierras ancestrales. En el caso de la comunidad Pech, se entregaron concesiones de tierras al ICF que en realidad incluían propiedad privada.

**Tensiones latentes entre el sector público/privado (vinculados a la escasez de recursos).** Las tensiones entre los sectores público y privado giran especialmente en torno a las tensiones del sector energético. Olancho no es un productor neto de energía y sufre de un acceso energético limitado e inconsistente (proporcionado por la presa Patuca III). El nuevo gobierno ha amenazado con nacionalizar y

quiere renegociar las condiciones que rigen la operación del sector energético, una decisión que probablemente afectará a las empresas locales que dependen completamente de la red energética y que los encuestados consideraron especialmente preocupante. Muchas empresas están considerando la posibilidad de instalar paneles solares, pero no todas pueden permitírselo y prevén un aumento en los costos de la energía producida por la presa Patuca III. Los que no pueden permitirse el aumento de los costos energéticos probablemente recurrirán a la leña para obtener energía, pero esto también tiene efectos perjudiciales en la capacidad de los productores de leche para refrigerar sus productos. Al momento de esta evaluación, las tensiones entre el sector público y el privado también se agudizaban debido a la manipulación de los precios en el mercado de productos lácteos. Algunas empresas privadas pidieron al gobierno que mediara en las negociaciones sobre el precio de la leche, pero estas iniciativas se vieron limitadas por la falta de organización de los productores de leche, así como por el intencional dumping de precios.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Los encuestados señalaron el aumento del riesgo entre los jóvenes debido a la falta de servicios y educación en materia de salud reproductiva. En concreto, los encuestados destacaron un aumento en las muertes de adolescentes embarazadas debido al tratamiento legal que se les da. Una vez que las adolescentes menores de edad dan a luz, el sistema de justicia las obliga a participar en investigaciones judiciales por violencia sexual, proceso que las estigmatiza o en el que temen participar y buscan evitar. En consecuencia, las adolescentes embarazadas suelen evitar las revisiones médicas o deciden no acudir al hospital para tener a sus hijos, lo que provoca complicaciones mortales.

## FACTORES MITIGANTES

La ciudad de Olancho cuenta con un abogado contratado para ayudar a resolver pacíficamente los conflictos laborales fuera de la Cámara de Comercio de Juticalpa. Si es necesario, las disputas se elevan a los tribunales, pero esto rara vez ocurre. Lo más común es que los asuntos se resuelvan en las oficinas de las empresas que son parte de las disputas.

La esperanza de cambio fue particularmente pronunciada en Catacamas debido a sus conexiones con la familia de la Presidenta Castro. Los encuestados estaban entusiasmados y albergaban grandes expectativas.

## Tegucigalpa

### INTRODUCCIÓN

Tegucigalpa es la capital de Honduras. Se encuentra en el departamento de Francisco Morazán y es el epicentro de los conflictos sociales y la violencia en Honduras. Al ser la sede del gobierno (Honduras está muy centralizada en la toma de decisiones y la asignación de presupuestos), la política define gran parte de la narrativa nacional, incluyendo las ideologías e intereses que compiten entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Tegucigalpa es también el área metropolitana más grande del país, con una población de 1.2 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en comunidades empobrecidas controladas por maras donde la violencia y la extorsión son habituales. La ciudad también está sometida a factores de tensión naturales, ya que su topografía montañosa la hace muy vulnerable a las inundaciones en la temporada de lluvias y a los incendios forestales en la temporada seca.

Esta evaluación examinó la dinámica del conflicto y la violencia en Tegucigalpa en dos niveles de análisis: los niveles nacionales/institucionales y la dinámica local del centro urbano. Como centro nacional e institucional del país, Tegucigalpa enfrenta una complicada transición ejecutiva y legislativa caracterizada por una renovada polarización entre partidos y sectores políticos y una desmilitarización de su enfoque de seguridad. A nivel local, los barrios urbanos de Tegucigalpa mostraron expresiones particulares de

violencia debido a la actividad de las maras y la competencia territorial, así como una violencia particularmente intensa dirigida al sector del transporte.

**Percepciones del USG y la Política Externa del USG.** La mayoría de los encuestados comunicaron percepciones positivas del apoyo del USG, consideran que el USG es el principal socio de desarrollo en el país, con algunos matices y críticas. Los encuestados fueron claros al señalar las políticas contradictorias del USG en Honduras, incluyendo las respuestas inconsistentes al golpe de estado contra el ex presidente Mel Zelaya, los referendos constitucionales, la reelección de Juan Orlando Hernández y la posterior extradición de JOH. Los encuestados también consideraron que la narrativa de la política del USG hacia Honduras, centrada en la antinmigración, es irreal, y percibieron contradicciones en las inversiones del USG en los esfuerzos antidroga, mientras que se percibe poca acción dirigida a frenar la demanda en los Estados Unidos. Varios encuestados destacaron además que, si bien la extradición de Juan Orlando Hernández era un paso positivo hacia la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, también se deducía que si el USG tenía suficientes pruebas para acusar al hombre que estaba en la cúspide, también tenía los detalles sobre el resto de la red mucho más amplia y está optando por no perseguir la rendición de cuentas si ésta no refuerza sus objetivos políticos.

**Percepciones de USAID.** Los encuestados tenían percepciones, en gran medida positivas, de la asistencia para el desarrollo de USAID, pero expresaron sus críticas sobre la forma en que se entrega y señalaron varias limitaciones clave para su eficacia. Una de las críticas más comunes fue que una gran parte de la ayuda al desarrollo se considera que beneficia a las organizaciones internacionales contratadas para llevar a cabo las actividades en lugar de beneficiar directamente al sistema local, las organizaciones locales y las comunidades, mientras que otros señalaron que se han realizado grandes inversiones durante muchos años sin que se traduzcan en cambios estructurales significativos. Los encuestados destacaron que, sin cambios estructurales más profundos en las instituciones gubernamentales asociadas, las normas de transparencia y las reformas del servicio civil, es poco probable que la asistencia continua se traduzca en un cambio sistémico.

## **DINÁMICAS DE VIOLENCIA Y CONFLICTO**

**Polarización institucional nacional e ideologías en competencia.** Los ataques retóricos del Partido LIBRE a todo lo relacionado con su predecesor, el Partido Nacional, y su llamamiento a movilizar al pueblo de Honduras contra cualquier indicio de "explotación", crean desafíos institucionales y sectoriales para una colaboración constructiva entre partidos y sectores. Los encuestados de múltiples sectores expresaron tanto su sorpresa como su pesar por el grado de polarización de las instituciones del nuevo gobierno. Esta polarización se complica aún más por el hecho de que el nuevo partido de la oposición sigue desorganizado y no está posicionado para abogar de manera efectiva en el Congreso. Las ONG y las agencias de cooperación internacional siguen esperando decisiones en áreas clave como la seguridad, educación, salud y política económica, mientras que en el horizonte siguen existiendo grandes oportunidades para que la polarización política se intensifique en forma de elecciones pendientes a la Corte Suprema y nombramientos del nuevo Fiscal General.

**Desmilitarización de las respuestas de seguridad.** El cambio de política hacia un enfoque de seguridad desmilitarizado presenta nuevos desafíos. Aunque sugiere una menor tolerancia a las respuestas de seguridad de mano dura y los abusos de los derechos humanos, la falta de recursos adecuados, pautas claras de traspaso o experiencia en liderazgo policial deja a las instituciones de seguridad mal equipadas para manejar los importantes desafíos de seguridad que aún enfrentan el país y la ciudad. Numerosos encuestados identificaron el aumento de la extorsión y la delincuencia a medida que las maras y los delincuentes tratan de aprovecharse de una transición institucional visiblemente deficiente, mientras que otros encuestados destacaron pasos en falso desconcertantes en la coordinación interinstitucional

necesaria para la transición efectiva de las responsabilidades, incluida la falta de intercambio de información crítica entre los militares y la policía responsable de la cartera de Anti-Maras y Pandillas.

**Violencia urbana y competencia por el control del territorio rentable.** Las maras urbanas, principalmente la MS-13 y Barrio 18, desempeñan un papel tanto en la violencia como en su reducción. Sin embargo, una mayor sofisticación por parte de estos grupos implica el uso de diferentes tácticas para operar, desde la propiedad de autobuses y taxis en la economía lícita hasta el subarriendo de territorio para que las maras más pequeñas extorsionen a cambio de una cuota. Los encuestados destacaron la aparición de dos maras especialmente problemáticas y violentas, la MI y los Illuminati, que se han dedicado a extorsionar y cometer actos de violencia contra el sector del transporte. El sector del transporte, constituido por los conductores de autobuses, conductores de autobuses interurbanos, taxistas y moto taxistas, se ha convertido en la profesión más vulnerable a la delincuencia en Honduras, con más de 2,000 asesinatos de conductores profesionales. Este grupo sigue particularmente expuesto a la violencia debido a la repetida amenaza de extorsión, ya que los conductores atraviesan múltiples territorios y se enfrentan a extorsiones y amenazas en cada uno de ellos. Esta violencia está muy marcada por el género. Todas las víctimas son hombres, lo que deja a las familias y esposas de las víctimas sin apoyo ni organización significativa, y muchas de ellas optan por emigrar a Estados Unidos. Las respuestas policiales y nacionales han sido de alcance limitado e ineficaz. La falta de seguridad, junto con el aumento de los precios de la gasolina, impulsó las recientes huelgas de transporte en la capital durante gran parte de abril y mayo de 2022.

**Incumplimiento de necesidades básicas y prestación de servicios.** Los encuestados destacaron con frecuencia la elevada proporción de residentes que viven en la extrema pobreza, así como su falta de acceso a servicios públicos básicos como el agua, la electricidad, la educación y la salud. El equipo se encontró con fuertes críticas a los escasos fondos e infraestructura de estos servicios, así como a la mala gestión y la corrupción en estos sectores, como prueba del incumplimiento por parte del gobierno de su responsabilidad de atender a los ciudadanos de la ciudad y del país.

**Clientelismo y cultura de impunidad.** Los encuestados citaron señales contradictorias en la disposición de la nueva administración para combatir el clientelismo y la corrupción. Criticaron el nombramiento de miembros de la familia de la presidenta Castro en puestos clave y la aprobación de la Ley de Amnistía, pero también elogiaron la derogación de la Ley de Secretos y el mayor acceso a la información pública que se espera que tengan instituciones como el Ministerio Público como resultado. En general, los encuestados se mostraron escépticos en cuanto al deseo de la administración de que la lucha contra la corrupción se traduzca en reformas estructurales significativas, creyendo en cambio que los esfuerzos anticorrupción se dirigirán a los últimos años del gobierno anterior. Los encuestados vieron estos hechos como expresiones naturales de una normalización de la política basada en las concesiones -un patrón que, según los encuestados, ha fragmentado al partido LIBRE en el Congreso, produciendo inestabilidad política y debilitando la eficacia del gobierno de la presidenta Castro.

El equipo escuchó que se espera que los futuros conflictos sociales dependan de la medida en que la nueva administración cumpla con las promesas de la campaña para hacer frente a la corrupción. Una decisión clave es la elección del nuevo Tribunal Supremo, que indicará la voluntad o no de las nuevas autoridades de combatir la impunidad y reforzar el Estado de Derecho. Otras promesas críticas de la campaña incluyen promesas a las asociaciones de profesores, a funcionarios públicos y a trabajadores de la salud, que ya han participado públicamente en las protestas. Los encuestados esperan pocos resultados de los intentos del gobierno de combatir la extorsión, que se espera que aumenten las muertes en el sector del transporte y produzcan más protestas. Los niveles de impunidad en Tegucigalpa también estarán dictados por la voluntad política y las capacidades técnicas de los sistemas policial y judicial, así como por los intereses

contrapuestos de las figuras clave dentro de las instituciones para investigar y perseguir los delitos contra los grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, LGBTQI+).

**Cierre del espacio cívico.** Los encuestados se mostraron cautelosos ante la creciente polarización política y el aumento de la desconfianza entre los ciudadanos y el gobierno. El nuevo gobierno ha contratado a miembros de la sociedad civil y personalidades de los medios de comunicación; algunos encuestados indicaron que esto es para cooptar o silenciar las voces progresistas críticas. Los encuestados de la sociedad civil identificaron que perciben un aumento en la marginación de los grupos de sociedad civil a medida que el gobierno busca estar más directamente conectado con la gente. Los encuestados citaron las discusiones sobre la nueva legislación (como la legislación para controlar la desinformación) que también crearía aperturas para controlar a los periodistas y las libertades de prensa. El equipo también tuvo conocimiento de otros esfuerzos bien intencionados que podrían producir consecuencias adversas para la sociedad civil y los grupos marginados. En concreto, los grupos conservadores atacan a los grupos LGBTQI+ cada vez que el movimiento demuestra avances en la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en la región o recibe declaraciones públicas de apoyo.

El liderazgo de las OSC está madurando sin que todavía haya una transición de responsabilidades y acceso a profesionales más jóvenes, lo que crea desconexiones en áreas clave. Las OSC se enfrentan a retos como la falta de financiamiento para la protección de los derechos humanos y la supervisión de la sociedad civil.

**Normalización de la violencia.** La violencia determina directamente las pautas de vida en Tegucigalpa, especialmente en los barrios más pobres de la ciudad, donde la presencia de las maras y la fragmentación son más fuertes. Los encuestados de un barrio destacaron que el toque de queda informal (el punto a partir del cual la gente ya no se siente segura al salir de sus casas o caminar por sus barrios) se redujo de las 7 pm a las 5 pm. Los comerciantes, conductores de autobús y taxistas se enfrentan a extorsiones periódicas y amenazas de violencia si no pagan. El perfil de los autores de la violencia sigue evolucionando. Cada vez es más frecuente ver a mujeres miembros de maras cometiendo extorsiones, participando como sicarias o desempeñando funciones de apoyo en las maras. Las maras también presionan a los ciudadanos normales para que se pongan al servicio de ellas vendiendo drogas, amenazándoles con la violencia si no actúan en su nombre. Los encuestados aclararon que estas funciones no se consideran parte de la mara. Para los encuestados, la violencia y la extorsión en los barrios se están intensificando, con un aumento de las tácticas de extorsión por imitación y una mayor competencia entre las maras más pequeñas. Los encuestados comentaron sobre la transición de Honduras de ser sólo un país de tránsito del narcotráfico a ser un productor y consumidor de cocaína y sintéticos, y esperaban que esta transición fuera acompañada de un aumento de la violencia por el control de las ganancias esperada.

Los encuestados consideran que la normalización de la violencia está relacionada con la pasividad del gobierno a la hora de abordarla, y en general consideran que la inhabilidad del Estado para proporcionar seguridad está fundamentalmente ligada a su falta de capacidad, recursos y voluntad para superar las realidades de los desafíos, a pesar de contar con personas y unidades comprometidas en todo el sistema. La desmilitarización de las responsabilidades de seguridad por parte de la presidenta Castro, incluyendo la transferencia de responsabilidades del ejército a la policía en general y específicamente con la Unidad Anti-Maras y Pandillas, refleja un cambio importante. Los encuestados se mostraron reticentes a este cambio, ya que sus implicaciones para la seguridad ciudadana no están claras sin un calendario establecido ni directrices de coordinación. El gobierno alienta las protestas como forma de afirmar una nueva política antirepresión. Pero existe la preocupación de que las protestas se intensifiquen con el tiempo y el gobierno tenga que responder inevitablemente con la fuerza, un acto que socavaría la credibilidad del gobierno y su capacidad para impulsar la narrativa de ser del y para el pueblo.

**Aseguramiento de la tierra.** Aunque no es un problema directo en Tegucigalpa, el equipo escuchó un reconocimiento emergente de que los conflictos sociales en torno a la tierra están cada vez más entrelazados con las entidades políticas, el sector privado y las DTO. Los conflictos son más complejos debido a la participación de múltiples partes, lo que complica los intentos de resolver concesiones contractuales de larga duración con el sector privado. Con un nuevo gobierno ideológicamente distanciado del sector privado, es cada vez más difícil que el Estado sirva también como actor neutral o mediador en las disputas por la tierra. Asimismo, los encuestados destacaron que las disputas por la tierra a veces van más allá de los foros de disputa locales y se llevan a los tribunales de Tegucigalpa. En estos casos, los tribunales de la capital a menudo no toman en consideración los matices locales o culturales, mientras que las partes pobres o no representadas en el caso pueden ser incapaces de participar plenamente, lo que a menudo conduce a sentencias que favorecen a las partes con más dinero y mejor conectadas.

**Jóvenes Privados de sus derechos.** Tegucigalpa, a pesar de su tamaño y densidad comercial, carece de suficientes oportunidades de empleo para los jóvenes de todos los niveles socio-económicos. Los jóvenes con estudios a menudo no encuentran opciones para aplicar su educación, y los jóvenes de los barrios pobres y de alta criminalidad se enfrentan a la estigmatización por parte de los empleadores, preocupados de que su empleo pueda aumentar el riesgo de ser objetivo de los extorsionistas. Esta falta de oportunidades de empleo contribuye a la migración en todos los niveles socioeconómicos. Los jóvenes cuyos padres han emigrado se enfrentan a un aumento de las responsabilidades de cuidado de la familia, tanto de los hermanos menores como de los mayores, lo que hace cada vez más difícil continuar con las responsabilidades educativas o laborales. Las limitaciones en la asistencia de salud y en la educación sexual contribuyen a aumentar los embarazos de adolescentes y a sumarse al millón y medio de niños y jóvenes hondureños que se calcula que no han vuelto a la escuela desde 2020. Los encuestados también señalaron que, debido a la inseguridad, los espacios públicos que antes utilizaban para la recreación y la actividad social se consideran inseguros y sirven como un recordatorio constante de la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad.

**Tensiones latentes entre el sector público/privado.** El gobierno de Castro y el Partido LIBRE han tratado de aumentar la responsabilidad del gobierno frente al sector privado a través de una serie de decisiones, políticas y discursos públicos polémicos que desafían el papel del sector privado. La serie de leyes orientadas al sector privado de la nueva administración, en particular las que prohíben el trabajo por horas y las leyes del sector eléctrico, son especialmente preocupantes. Estas leyes están desestabilizando el entorno empresarial en Honduras y afectando negativamente a la inversión nacional y extranjera. Los propietarios de pequeñas empresas y los inversionistas potenciales, que ya desconfiaban de la poca facilidad para hacer negocios en el país, citaron esta imprevisibilidad y la creciente hostilidad como razones para llevar sus inversiones a Guatemala y a los EEUU en lugar de invertir en el país. Incluso aquellos segmentos y organizaciones que representan al sector privado y que buscan contribuir a la responsabilidad social han encontrado que el gobierno no está dispuesto a comprometerse constructivamente.

**Impactos del cambio climático y la escasez de recursos.** Tegucigalpa enfrenta peligros naturales en forma de inundaciones e incendios, pero lo que más preocupa a los encuestados es la incapacidad del gobierno local para gestionar eficazmente la distribución de agua dentro de la ciudad. Además, como sede de las instituciones de respuesta a emergencias del país, el sector académico y las organizaciones internacionales, la ciudad debería considerarse también como el epicentro de la coordinación de la respuesta y la gestión del riesgo de desastres y la preparación para el cambio climático.

## **FACTORES MITIGANTES**

El equipo de evaluación en Tegucigalpa escuchó en partes iguales la esperanza en la nueva administración, el escepticismo sobre el grado de optimismo para el cambio, y una clara comprensión de la naturaleza finita del país y el optimismo de la capital. La esperanza de cambio se situó directamente en la adopción por parte del gobierno de enfoques de gobernanza más incluyentes y en la oportunidad de manifestarse sin miedo a la represión violenta. Sin embargo, los encuestados se apresuraron a señalar las limitaciones de ambos factores.

***Inclusión en el gobierno.*** LIBRE ha buscado intencionadamente la inclusión de poblaciones anteriormente marginadas, incluidas las personas LGBTQI+ y las minorías indígenas y étnicas, en sus instituciones. Los encuestados creían que estas medidas mejorarían la atención a las necesidades de estas comunidades, aunque las declaraciones públicas que promueven la inclusión también se han encontrado con un aumento de las reacciones contra esas comunidades. Esta inclusión también se extiende a las instituciones de seguridad de Tegucigalpa, donde la policía local se ha fijado objetivos de género para incluir a más mujeres en las fuerzas policiales locales para representar, servir y responder mejor a las necesidades de la comunidad. Si esta integración se gestiona eficazmente, estas instituciones estarán mejor equipadas para responder a las diversas necesidades de las comunidades que reciben apoyo, incluidos los altos niveles de violencia doméstica y de género. Sin embargo, la integración efectiva también requerirá medidas intencionales para gestionar los desafíos de la cultura institucional y los riesgos de la GBV internos a la policía.

***Mayor tolerancia a las protestas sociales.*** Los encuestados señalaron que el gobierno aboga por la "política de calle" y los comentarios que animan a quienes tienen problemas a expresarlos a través de las protestas. Esta narrativa permite a quienes tienen quejas sentirse escuchados por el gobierno, pero la resolución de los problemas también dependerá de la eficacia en la respuesta del gobierno. Aunque los encuestados creen que el gobierno se ha comprometido a dar menos respuestas policiales/militares, prevén que el gobierno acabará viéndose obligado a responder a los disturbios sociales con tácticas represivas, un acto que podría cambiar significativamente la percepción pública y la tolerancia hacia la inacción del gobierno.